

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



TESIS

**“AFECTACIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL
EFECTIVA DEL DEMANDANTE OBLIGADO, EN EL PROCESO DE
REDUCCIÓN DE ALIMENTOS EN LOS JUZGADOS DE PAZ
LETRADO DE PIURA AÑO 2016-2017”**

Presentada por:

Br. MARY CARLITA CUEVA AVENDAÑO

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

Línea de Investigación Institucional: Legislación y Ciencias Políticas

Sub Línea de Investigación: Derecho Civil: nuevas tendencias

PIURA-PERÚ

2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



TESIS

**“AFECTACIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL
EFECTIVA DEL DEMANDANTE OBLIGADO, EN EL PROCESO DE
REDUCCIÓN DE ALIMENTOS EN LOS JUZGADOS DE PAZ
LETRADO DE PIURA AÑO 2016-2017”**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

Br. Mary Carlita Cueva Avendaño

AUTORA

Dra. Jacqueline Sarmiento Rojas

ASESORA

Línea de Investigación Institucional: Legislación y Ciencias Políticas

Sub Línea de Investigación: Derecho Civil: nuevas tendencias

PIURA-PERÚ

2019

DECLARACION JURADA DE ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Yo: **MARY CARLITA CUEVA AVENDAÑO** identificada con DNI N° **47271282**, en la condición de Estudiante Egresada, de la Facultad de **DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**, Escuela Profesional de **DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS** y domiciliada en Asentamiento Humano 18 de Mayo MZ. F lote 12, Distrito de Piura, Provincia de Piura, Departamento de Piura, Celular: **957631630**, Email: **carla18_91@hotmail.com**.

DECLARO BAJO JURAMENTO: que el trabajo de investigación que presento a la Oficina Central de Investigación (OCIN), es original, no siendo copia parcial ni total de un trabajo de investigación desarrollado, y/o realizado en el Perú o en el Extranjero, en caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el Art. N°411, del código Penal concordante con el Art. 32° de la Ley N°27444, y Ley del Procedimiento Administrativo General y las Normas Legales de Protección a los Derechos de Autor. En fe de lo cual firmo la presente.



Piura, mayo del 2019

DNI N° 47271282

Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Art. 4. Inciso 4.12 del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales –RENATI Resolución de Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

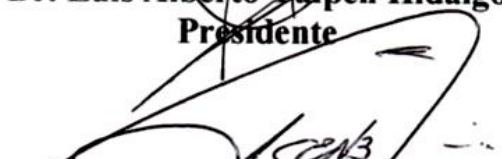


TESIS

**“AFECTACIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL
EFECTIVA DEL DEMANDANTE OBLIGADO, EN EL PROCESO DE
REDUCCIÓN DE ALIMENTOS EN LOS JUZGADOS DE PAZ
LETRADO DE PIURA AÑO 2016-2017”**

TESIS REVISADA Y APROBADA POR EL JURADO:


Dr. Luis Alberto Yarpén Hidalgo
Presidente


Dr. Juan Carlos Negro Balarezo
Secretario


Abog. Oscar Enrique Vilela Vargas
Vocal

PIURA-PERÚ

2019



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS
053-UI-FDCCP-UNP-2019

Los miembros del Jurado Calificador que suscriben, reunidos para evaluar la Tesis titulada: **"AFECTACION DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA DEL DEMANDANTE OBLIGADO, EN EL PROCESO DE REDUCCION DE ALIMENTOS EN LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE PIURA AÑO 2016 - 2017"**, presentada por la **Bachiller; CUEVA AVENDAÑO MARY CARLITA** con el **asesoramiento** de la **DOCTORA; JACQUELINE SARMIENTO ROJAS**; oídas las observaciones y respuestas a las preguntas formuladas y, de conformidad al Reglamento de Tesis para la obtención del Título Profesional, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la declaran:

APROBADO (X)

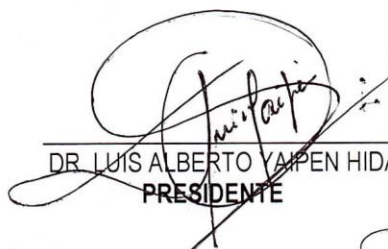
DESAPROBADO ()

Con la mención de:

MUY BUENO

- (X) En consecuencia, queda en condición de ser ratificada por Consejo de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título Profesional de Abogado.
- (X) En consecuencia, queda en condición de ser ratificada por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título Profesional de Abogado, después de que la sustentante incorpore las sugerencias del Jurado Calificador.

Piura, 04 de julio de 2019


DR. LUIS ALBERTO YÁÑEZ HIDALGO
PRESIDENTE


DR. JUAN CARLOS NEGRO BALAREZO
SECRETARIO


MAG. OSCAR ENRIQUE VILELA VARGAS
VOCAL

DEDICATORIA

Con eterna gratitud a mis padres, a quienes
admiro y son mi inspiración para superarme
cada día.

AGRADECIMIENTO

A Dios por ser partícipe en cada acto de mi vida.
A mis padres y hermanos por su amor y comprensión.

A mi asesora por el apoyo constante en la elaboración de la presente tesis. A mi facultad y docentes que me brindaron una sólida formación académica.

A todas aquellas personas y profesionales que hicieron posible la elaboración de la presente investigación.

ABREVIATURAS

Art.	Artículo
Arts.	Artículos
C.C.	Código Civil
C.N.A	Código de los Niños y Adolescentes
C.P.C	Código Procesal Civil
Inc.	Inciso
s.f.	Sin fecha
REDAM	Registro de Deudores Alimentarios Morosos
TP	Título Preliminar

INDICE GENERAL

DEDICATORIA	VI
AGRADECIMIENTO.....	VII
RESUMEN.....	XII
ABSTRACT	XIII
INTRODUCCIÓN	14
CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA	17
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA.....	17
1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN	18
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	19
1.3.1. Objetivo general	19
1.3.2. Objetivos específicos.....	19
1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	19
1.4.1. Delimitación Espacial	19
1.4.2. Delimitación Temporal	19
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	20
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	20
2.2. BASES TEÓRICAS	21
2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS	25
2.4. MARCO REFERENCIAL	26
2.4.1 Alimentos	26
2.4.1.1. Noción de alimentos.....	26
2.4.1.2. Naturaleza jurídica	28
2.4.1.3. Características del derecho de alimentos.....	30
2.4.1.4. Clasificación de los alimentos	33
2.4.1.5. Presupuestos para fijar alimentos	44
2.4.1.6. Variación de los alimentos	48
2.4.2 Reducción de la pensión alimenticia	54
2.4.2.1. Definición.....	54
2.4.2.2. Presupuestos	54
2.4.2.3. Circunstancias	55
2.4.2.4. Vigencia de las sentencias en los procesos de reducción de alimentos.....	56

2.4.2.5.	Requisito de admisibilidad para admitir la demanda de reducción de alimentos	58
2.4.3	Mecanismos de ejecución de las sentencias de alimentos	58
2.4.3.1.	Prohibición del demandado de ausentarse del país	58
2.4.3.2.	Embargo de las remuneraciones del obligado	59
2.4.3.3.	El proceso de omisión a la asistencia familiar	59
2.4.3.4.	El Registro de Deudores Alimentarios Morosos	60
2.4.4	El proceso de reducción de alimentos y su incidencia en el delito de omisión a la asistencia familiar	62
2.4.5	El principio del interés superior del niño	64
2.4.5.1.	Concepto	64
2.4.5.2.	El interés superior del niño en el proceso de alimentos	66
2.4.6	Tutela jurisdiccional efectiva	67
2.4.6.1.	Definición	67
2.4.6.2.	Características del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (TICONA POSTIGO, 1999, págs. 39-46)	69
2.4.6.3.	La tutela jurisdiccional efectiva como derecho humano (TICONA POSTIGO, 1999, págs. 28-31)	71
2.4.6.4.	Momentos de la tutela jurisdiccional efectiva	72
2.4.6.5.	Manifestaciones del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva	74
2.4.6.6.	Contenido del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva	76
2.4.7	Análisis de la Ley N° 29486	79
2.4.7.1.	Antecedentes	79
2.4.7.2.	Finalidad de la Ley N° 29486	79
2.4.7.3.	Opinión del Ministerio Público	81
2.4.7.4.	Otras opiniones	81
2.4.7.5.	Acuerdos plenarios respecto a la aplicación del artículo 565-A del Código Procesal civil en el proceso de reducción de alimentos	83
2.4.8	El proceso de reducción de alimentos en el derecho comparado	87
2.5.	HIPÓTESIS	91
2.5.1.	Variables	92
2.5.2.	Conceptualización de las variables	92
2.5.3.	Operacionalización de las variables	93
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO		96
3.1.	ENFOQUE Y DISEÑO	96
3.1.1.	Enfoque	96
3.1.2.	Diseño	96

3.2.	SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	97
3.3.	MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS	97
3.4.	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS	98
3.5.	ASPECTOS ÉTICOS	99
CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....		100
4.1.	RESULTADOS	100
4.2.	DISCUSIÓN	112
CONCLUSIONES		121
RECOMENDACIONES		123
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS		124
ANEXOS.....		127
ANEXO N° 01: MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA		128
ANEXO N° 02: DATOS ESTADÍSTICOS		130
ANEXO N° 02: PLENOS JURISDICCIONALES		132

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA N° IV.1	104
TABLA N° IV.2.....	105
TABLA N° IV.3:.....	107
TABLA N° IV.4.....	108
TABLA N° IV.5.....	110

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO N° IV.1.....	104
GRÁFICO N° IV.2.....	106
GRÁFICO N° IV.3.....	107
GRÁFICO N° IV.4.....	109
GRÁFICO N° IV.5.....	111

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objeto el análisis de la vulneración del derecho a la Tutela Jurisdiccional efectiva en el proceso de reducción de alimentos- supuesto elegido para la presente investigación-, por aplicación del artículo 565°-A del Código Procesal Civil, el mismo que refiere que encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia es un requisito para admitir la demanda de reducción de alimentos.

En ese sentido, se ha concluido que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho fundamental y protegido constitucionalmente, el cual supone el libre acceso a los órganos jurisdiccionales; por lo que su restricción debe ser razonable y proporcional al fin que se busca. Dentro de ese contexto, en la presente investigación se ha logrado concluir que el requisito de admisibilidad de estar al día en el pago de las pensiones alimenticias para admitir a trámite la demanda de reducción de alimentos, constituye una restricción impertinente y desproporcional del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ya que en los procesos de reducción de alimentos, precisamente, se alega la disminución de la capacidad económica del demandante obligado, por lo tanto corresponde que en sentencia y luego de actuados todos los medios probatorios el juez declare si le asiste o no el derecho y no así en los actos postulatorios, donde solo corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos de forma; consecuentemente, esta restricción acarrea la vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del demandante obligado.

PALABRAS CLAVES: Tutela Jurisdiccional Efectiva, reducción de alimentos, capacidad económica.

ABSTRACT

The purpose of this research work is to analyze the violation of the right to effective Jurisdictional Guardianship in the food reduction process-course chosen for the present investigation-, by application of article 565 ° -A of the Code of Civil Procedure, the same that refers that being up to date in the payment of alimony is a requirement to admit the demand for food reduction.

In this sense, it has been concluded that the right to effective judicial protection is a fundamental right protected constitutionally, which implies free access to jurisdictional bodies; therefore, its restriction must be reasonable and proportional to the purpose sought. Within this context, in the present investigation it has been concluded that the requirement of admissibility to be up to date in the payment of maintenance payments to admit the demand for food reduction, constitutes an impertinent and disproportionate restriction of the right to effective jurisdictional protection, since in the processes of reduction of food, it is precisely alleges the decrease of the economic capacity of the obliged claimant, therefore it corresponds that in a sentence and after acting all the evidence the judge declares if he assists or not the right and not in the postulational acts, where it only corresponds to verify the fulfillment of the requirements of form; consequently, this restriction entails the violation of the right to effective jurisdictional protection of the obligated claimant.

KEY WORDS: Effective Jurisdictional Tutelage, food reduction, economic capacity.

INTRODUCCIÓN

La Constitución Política del Perú en el artículo 139° inciso 3 establece que son principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Lo que nos permite afirmar que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental, según el cual toda persona puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente de la pretensión formulada y, a su vez, obliga al juzgador a impartir justicia observando el debido proceso y dentro de los estándares mínimos establecidos.

En el año 2009 entra en vigencia la Ley N° 29486, mediante la cual se incorpora el artículo 565-A al Código Procesal Civil, el mismo que exige como requisito para la admisión de la demanda de reducción, variación, prorrateo o exoneración de la pensión alimentaria, que el demandante obligado a la prestación de alimentos, acredite encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia. En virtud a ello, ahora, aquellos obligados que pretendan acudir al órgano jurisdiccional a fin de solicitar la reducción, variación, prorrateo o exoneración de la pensión alimentaria, lo podrán hacer siempre y cuando, se encuentren al día en el pago de la pensión alimenticia, de lo contrario su demanda es declarada improcedente, ante la imposibilidad de poder acreditar encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia al que se encuentra obligado.

Dentro de este contexto, el presente trabajo de investigación se enmarca en analizar la vulneración del derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, frente al requisito de admisibilidad instaurado por Ley N° 29486, en los procesos de reducción, variación, prorrateo o exoneración de alimentos, enmarcándonos, específicamente, en el proceso de

reducción de alimentos; dado que con la incorporación de este requisito de admisibilidad, se ha limitado a los demandantes obligados acceder al órgano jurisdiccional, dejándolos en desamparo legal, frente al cambio de sus condiciones económicas que les impide cumplir íntegramente su obligación.

Para ello, se analizó cada una de las instituciones jurídicas que giran en torno al tema de investigación, sobre todo el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, como un derecho constitucional, y de esta manera exponer argumentos jurídicos y doctrinarios que pongan de manifiesto que el artículo 565-A del Código Procesal Civil, vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del demandante obligado en el proceso de reducción de alimentos ante un rechazo liminar de la demanda.

El primer capítulo incluye los aspectos de problemática y desarrolla la descripción de la realidad problemática, la justificación e importancia de la investigación, los objetivos planteados y la delimitación de la investigación.

El segundo capítulo está conformado por el marco teórico, el mismo que comprende los antecedentes, bases teóricas, el marco referencial y la hipótesis. En este capítulo se desarrollan las diversas instituciones que forman parte de la presente investigación y que ayudaran a dar respuesta al problema planteado y con ello comprobar la hipótesis establecida.

El tercer capítulo comprende el marco metodológico el cual abarca el enfoque y diseño, sujetos de la investigación, los métodos y procedimientos, así como las técnicas e instrumentos utilizados en la presente tesis.

Finalmente, el cuarto capítulo desarrolla la probanza de la hipótesis, en donde a través de la información recabada, consistente en doctrina, jurisprudencia, estadísticas y demás información de los Juzgados de Paz Letrado de Piura, se determinará si la figura jurídica en cuestión vulnera o no el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de los demandantes obligados en el proceso de reducción de alimentos.

Por último, se muestran las conclusiones arribadas y las recomendaciones planteadas. Buscando con ello aportar una solución a la problemática existente. Esperando que el presente trabajo de investigación de mucha ayuda a los operadores del derecho.

La autora.

CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

Desde la incorporación del artículo 565°-A al Código Procesal Civil, mediante Ley N° 29486, que exige como requisito especial para la admisión de la demanda de reducción, variación, prorratio o exoneración de la pensión alimenticia, que el demandante obligado a la prestación de alimentos, acredite encontrarse al día en la pensión alimenticia, ha traído como consecuencia el rechazo liminar de las demandas de reducción de alimentos cuando el demandante obligado no cumpla con acreditar estar al día en el pago de la pensión alimenticia, criterio que se viene aplicando en los Juzgados de Paz Letrado de Piura.

Lo anterior, ha dado lugar a que los obligados al pago de una pensión alimenticia, se encuentren frente a una barrera que les impide acceder libremente al órgano jurisdiccional para tutelar su derecho, cuando pretenden reducir el monto de la pensión alimenticia frente a la imposibilidad de honrar en su totalidad el monto fijado primigeniamente, ya sea porque sus necesidades aumentaron o las circunstancias que sirvieron para fijar el monto de la pensión han variado, lo que a su vez pone en riesgo su propia subsistencia y la de sus dependientes.

En ese sentido, la exigencia de este requisito de admisibilidad implica la vulneración del derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva del demandante obligado, en tanto que no se le permite revisar el fondo de su pretensión, sino que, ante el incumplimiento del mismo, se produce el rechazo de la demanda. Esto a su vez, ha llevado a que los obligados alimenticios se conviertan en deudores de sumas impagables que desencadenan en procesos penales por omisión a la asistencia familiar, generando mayores gastos para el obligado a la prestación alimenticia.

Por lo antes expuesto nos planteamos el siguiente problema: ¿La exigencia del requisito especial de admisibilidad de encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia para admitir una demanda de reducción de alimentos, estaría vulnerando el derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva del demandante obligado en los Juzgados de Paz Letrado de Piura durante los años 2016-2017?

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación se justifica en la necesidad de analizar la vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de los obligados alimentarios en el proceso de reducción de alimentos, en los Juzgados de Paz Letrado de Piura durante los años 2016 a 2017, cuando se les exige como requisito de admisibilidad de su demanda, encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia.

Dentro de este contexto, la presente investigación coadyuvará a la búsqueda de mecanismos que permitan garantizar el derecho de acción de los demandantes obligados, de tal manera que se les permita iniciar un proceso de reducción de alimentos cuando se encuentren frente a la imposibilidad de cumplir en su totalidad el monto de pensión alimenticia fijado primigeniamente y a su vez impedir que dichas deudas acrecienten y se conviertan en deudas impagables, que posteriormente desencadenaran, irremediablemente, en un proceso penal.

Asimismo, la presente investigación permitirá coadyuvar con el operador jurídico para que en la práctica y frente a un proceso de reducción de alimentos, no se enmarque en la mera aplicación de la norma, sino que tenga una visión amplia sobre la realidad social que enfrentan los obligados alimentarios, de manera que permita analizar los fundamentos de la pretensión y emitir un pronunciamiento acorde con el derecho y la realidad de cada caso en concreto.

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1. Objetivo general

- Determinar, la posible vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del demandante obligado en los Juzgados de Paz Letrado de Piura durante los años 2016 a 2017, ante la exigencia del requisito especial de admisibilidad de encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia para admitir una demanda de reducción de alimentos.

1.3.2. Objetivos específicos

- Analizar el fundamento jurídico del proceso de reducción de alimentos.
- Determinar el contenido y manifestaciones del derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva.
- Analizar la Ley N° 29486 que incorpora el requisito especial de admisibilidad exigido por el artículo 565-A del Código Procesal Civil respecto del proceso de reducción de alimentos.
- Examinar el tratamiento normativo del tema de investigación en el derecho comparado.

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. Delimitación Espacial

La presente investigación se desarrolló en los Juzgados de Paz Letrado de Piura.

1.4.2. Delimitación Temporal

La investigación se enmarcó en el periodo comprendido entre los años 2016 a 2017.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Habiendo realizado las investigaciones correspondientes relacionadas al tema objeto de investigación se ha encontrado los siguientes antecedentes:

- Gissela Marilyn Arévalo Rodas (2014), en su trabajo de Tesis titulada: “EL REQUISITO DE PROCEDENCIA EN LAS PRETENSIONES SOBRE REDUCCIÓN, VARIACIÓN, PRORRATEO Y EXONERACIÓN DE ALIMENTOS, Y LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA”, concluye que: En el ordenamiento jurídico nacional vigente, específicamente con la dación del Artículo 565-A del CPC, se vulnera el fundamental derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del obligado alimentista, en su primer nivel de acceso al poder judicial, toda vez que el requisito de estar al día en el pago de las pensiones alimentistas para poder postular una demanda de reducción, variación, cambio en la forma de prestar alimentos, prorratio y exoneración de alimentos, constituye sin lugar a duda una limitación, un exceso y una barrera irracional y desproporcional al derecho de acción del obligado alimentista”. (ARÉVALO RODAS, 2014)
- Pleno Jurisdiccional Distrital de los Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Lima, realizado el 27 de diciembre del 2011, Tema N° 04 PROBLEMÁTICA EN TEMAS DE FAMILIA ANTE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO, en el primer subtema: Problemática en temas de familia ante los Juzgados de Paz Letrado. Implicaciones Constitucionales de la Ley 29486, se planteó la siguiente pregunta: ¿Es constitucional la exigencia del requisito de admisibilidad previsto en el artículo 565 A del Código Procesal Civil para iniciar un proceso de reducción, variación, prorratio o exoneración de pensión alimenticia? Habiendo arribado al debate, el pleno adoptó por mayoría la tercera posición que enuncia lo siguiente: “Que en casos que se haga

imposible presentar el requisito de admisibilidad, de acreditar encontrarse al día en el pago de las pensiones, se permita al Juez de Paz Letrado admitir la demanda al amparo de los principios de razonabilidad y proporcionalidad y de los derechos de acción y de tutela jurisdiccional efectiva.”

- El Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia de Lima, llevado a cabo el 02 de setiembre del 2011, en cuyo tema N° 01 PROCESO DE ALIMENTOS, se planteó la pregunta: En los Procesos de Exoneración o Reducción de Alimentos: ¿Puede admitirse una demanda sobre exoneración o reducción de alimentos no obstante lo dispuesto por el artículo 565° - A del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 29486, cuando el obligado alimentario se ha visto imposibilitado de cumplir el pago de las pensiones alimenticias? El Pleno adoptó por mayoría la primera ponencia, es decir, que sí procede, amparándose en el Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva.

2.2. BASES TEÓRICAS

2.2.1. Alimentos

El artículo 472° del Código Civil Peruano, refiere que se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa postparto.

El (CÓDIGO CIVIL, 1984) en su artículo 481° señala que los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor.

2.2.2. Reducción de alimentos

De conformidad con el artículo 482° del Código Civil, la pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarlas. Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de las remuneraciones del obligado, no es necesario nuevo juicio para reajustarla. Dicho reajuste se produce automáticamente según las variaciones de dichas remuneraciones.

En ese sentido, (BORDA, 1984)¹ manifiesta que la sentencia en juicio de alimentos tiene siempre un valor eminentemente provisional. En rigor, sólo tiene efectos plenos en tanto no se modifiquen las circunstancias de hecho que dieron lugar a la sentencia. Pero si se prueba un aumento o una disminución de las necesidades del alimentado o de las posibilidades económicas del alimentante o este demuestra que hay otro pariente más próximo en condiciones de prestar los alimentos, éstos pueden ser modificados o cesar.

2.2.3. Requisito de admisibilidad para admitir la demanda de reducción de alimentos

Mediante Ley N° 29486 publicada el 22 de diciembre del 2009, se incorporó el artículo 565-A del Código Procesal Civil, según el cual es requisito para la admisión de la demanda de reducción, variación, prorrateo o exoneración de pensión alimentaria que el demandante obligado a la prestación de alimentos acredite encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia.

¹ Citado por HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto, (2008) *Procesos Judiciales Derivados del Derecho de Familia*. Editorial Gaceta Jurídica. Pág. 489.

2.2.4. Tutela jurisdiccional efectiva

La Constitución Política del Perú (art. 139° inciso 3), consagra el derecho a la tutela jurisdiccional², derecho que también es recogido en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, mismo que señala que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.

Por su parte, el Tribunal Constitucional sostiene que: *“(…) la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia”*.³

La tutela jurisdiccional efectiva es el derecho de toda persona a que se le haga justicia; a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas. (GONZALES PÉREZ, 1985, pág. 27)

² Constitución Política del Perú de 1993, artículo 139° inciso 3: Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

³ STC N° 763-2005-PA/TC, fundamento 6.

2.2.5. El interés superior del niño (PLÁCIDO V., 2015, págs. 126-129)

El artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño subraya que las autoridades administrativas y legislativas, así como las instituciones públicas y privadas deben cerciorarse de las repercusiones que tendrán sobre el niño las medidas que adopten, con el objeto de que el interés superior del niño sea siempre una consideración primordial.

La Observación General N° 14 (2013) sobre “El derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1)” ha precisado que el objetivo del concepto de interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico; resaltando que tiene una triple aceptación: a) Un derecho sustantivo: se trata “del derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general”; b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: “si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño”; y, c) Una norma de procedimientos: “siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positiva o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados.

Asimismo, destaca que el interés superior del niño no siempre será el factor único y decisivo a considerar; puede que haya conflicto entre los intereses de diferentes niños o grupos de niños, o entre los intereses de los niños y de los adultos. No obstante, el interés del niño será, en todo caso, objeto de consideración. Es necesario, por tanto, demostrar que se ha investigado los derechos del niño y que se le ha dado consideración primordial.

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS

- **Constitución:** Ley fundamental de la organización de un Estado. En sentido material complejo de normas jurídicas fundamentales, escritas o no escritas que traza las líneas maestras de un ordenamiento jurídico. En sentido formal, conjunto de normas legislativas que ocupan una posición especial y suprema en el ordenamiento jurídico y que regulan las funciones y los órganos fundamentales del Estado.
- **Demanda:** Escrito por el cual el actor o demandante ejercita en juicio civil una o varias acciones o entabla recurso en la jurisdicción contenciosa administrativa. (CABANELLAS DE TORRES, 1993, pág. 96)
- **Norma jurídica:** Entendida como la regla social o institucional que establece límites y prohibiciones al comportamiento humano. (PODER JUDICIAL DEL PERÚ, s.f.)
- **Pensión alimentaria:** Es la asignación fijada voluntaria o judicialmente para la subsistencia de un pariente o persona que se halla en estado de necesidad. (PERALTA ANDÍA, 2002, pág. 501)
- **Reducción de alimentos:** Cantidad, ya sea en dinero, en especie o en ambas, que, por disposición convencional, testamentaria, legal o judicial, ha de pasar una persona a otra, o a su representante legal, a fin de que pueda alimentarse y cumplir otros fines esenciales de la existencia.
- **Tribunal Constitucional:** Órgano constitucional de naturaleza jurisdiccional encargado de administrarla justicia constitucional. Debe diferenciarse de los órganos de control de la constitucionalidad de las leyes que tienen naturaleza política y de los órganos del poder judicial ordinario que, en algunos sistemas, desempeñan tal función.

- **Tutela jurisdiccional efectiva:** Entendido como aquel derecho por el cual toda persona, como integrante de una sociedad, puede acceder a los órganos jurisdiccionales para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a que sea atendido a través de un proceso que le ofrezca las garantías mínimas para su efectiva realización.
- **Vulnerar:** Ir en contra de una ley o norma o no cumplirla, quebrantar, transgredir. Herir, dañar o perjudicar. (CABANELLAS DE TORRES, 1993)

2.4. MARCO REFERENCIAL

2.4.1 Alimentos

2.4.1.1. Noción de alimentos

La palabra alimentos proviene del latín “alimentum” que a su vez deriva de “alo” que significa nutrir, y comprende todo lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación y salud del alimentista; es decir, está referido al sustento diario que una persona requiere para vivir.

Jurídicamente, la noción de alimentos la encontramos en el artículo 472° del Código Civil, modificado por el artículo 2° de la Ley N° 30292 publicada el 28 de diciembre del 2014, que señala: *“Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa postparto.”* Definición que es concordante con aquella establecida por el Código de los Niños y Adolescentes, en cuyo artículo 92°, refiriéndose a los alimentos de los niños y adolescentes precisa: *“Se considera alimentos, lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación del niño o*

adolescente. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto.”

Para Trabucchi, (1967), citado por (GACETA JURÍDICA, 2014, pág. 30) “(...) *la expresión “alimentos” en el lenguaje jurídico tiene un significado más amplio del significado común, y comprende, además de la alimentación, cuanto es necesario para el alojamiento, vestido, los cuidados de la persona, su instrucción, etc.*”

Por su parte, Máximo Castro (1931) en (HINOSTROZA MINGUEZ, 2008, pág. 458), refiere que “(...) *jurídicamente hablando, se entiende por alimentos lo que asigna o da a una persona para cubrir las necesidades de la vida, cuales son comer, beber, vestir, calzar, habitar y recobrar la salud.*”

Parra Benítez, señala que “*Los alimentos son una prestación que, generalmente en dinero, se debe por una persona a otra, de acuerdo con el mandato de la ley, para que la segunda pueda con ella satisfacer sus necesidades más elementales o primarias, tales como la alimentación, la educación, la salud, la diversión, etc.*” (PARRA BENÍTEZ, 1997, pág. 395).

En consecuencia, la obligación alimentaria comprende –como se tiene dicho- a todo un conjunto de prestaciones cuya finalidad no sólo es la estricta supervivencia de la persona necesitada, sino también su mejor inserción social, pues existen varias prestaciones que no son alimentarias en estricto sentido como la educación, instrucción y capacitación para el trabajo, recreación, gastos de embarazo, etc., que engloban también su contenido y que se sustentan, obviamente, en razones familiares y de solidaridad social. (PERALTA ANDÍA, 2002, pág. 498)

En ese sentido, podemos afirmar que los alimentos comprenden no solo las sustancias ingeridas con fines nutricionales, sino que también incluye habitación, salud, educación recreación y todo lo que es necesario para el desarrollo y subsistencia de la persona.

2.4.1.2. Naturaleza jurídica

Este tema es, aún, bastante discutido por la doctrina. Partiendo de la clasificación tradicional de los derechos privados en personales y patrimoniales, surge la discrepancia entre los tratadistas, cuando se intenta ubicar el derecho de alimentos, surgiendo las siguientes tesis:

a) Naturaleza patrimonial

Cierto sector de la doctrina, consideraba que el derecho alimentario se encontraba dentro de los derechos patrimoniales, en tanto genera una prestación de esta calidad y son apreciables en dinero.

Para Messineo *“El derecho a lo alimentos tiene naturaleza genuinamente patrimonial; la nueva legislación⁴ no contiene ninguna indicación que justifique la concepción de aquel derecho como dirigido también al cuidado de la persona de quien recibe los alimentos.”* Citado por (CORNEJO CHAVEZ, s.f., pág. 228)

Sin embargo, esta tesis en la actualidad ha sido superada porque el derecho alimentario no sólo tiene naturaleza económica, sino que también posee un carácter extrapatrimonial.

b) Naturaleza personal

En contraposición a la tesis patrimonial surge la tesis personal. Esta tesis sostiene que el derecho alimentario es de índole personal por cuanto gira en torno a la persona humana, y se relaciona con la institución familiar.

⁴ Se refiere al Código Civil italiano de 1942.

Cicu (s.f) en (CORNEJO CHAVEZ, s.f., pág. 229), sostiene que *“como consecuencia de su última fundación ética, la deuda alimenticia no puede conceptuarse como de naturaleza puramente patrimonial, aun cuando, en definitiva, se resuelva en una prestación de esa índole. El derecho del alimentista no constituye un elemento activo de su patrimonio, porque no es este elemento algo de que pueda disponer, un valor que aumente el patrimonio y sirva de garantía a los acreedores; no constituye siquiera un interés patrimonial o individual al alimentista al que la ley otorgue protección, sino un interés de orden superior y familiar. Inversamente el débito por alimentos no constituye para el obligado un elemento pasivo de su patrimonio, ya que su importe no se toma en cuenta cuando se valúa la entidad económica del patrimonio del deudor. No se da aquí, pues, ni ventaja ni carga patrimonial porque su carácter prevalentemente es la naturaleza superior familiar y social de la institución que la excluye del ámbito de las relaciones individuales puras y simples de contenido económico.”*

En el mismo sentido, Ricci (s.f) afirma que *“este derecho [el alimentario], eminentemente personal, no forma parte de nuestro patrimonio, sino que es inherente a la persona, de la cual no puede separarse y con la cual se extingue o perece (...) así como es inherente a la persona el derecho de alimentos, es también personal el deber de prestarlos, es decir intransmisible a los herederos.”* (CORNEJO CHAVEZ, s.f., pág. 229)

c) Naturaleza sui generis

Otro sector de la doctrina afirma que el derecho alimentario tiene un carácter especial o sui generis de contenido patrimonial y finalidad personal conexas a un interés superior familiar.

De la misma posición es el jurista HÉCTOR CORNEJO CHÁVEZ, para quien los alimentos no forman parte de la persona, ni son la persona misma, sino que la sirven o pueden servirla; son valorables económicamente y pueden ser exigidos solo al sujeto o sujetos determinados. Por lo que el derecho a los alimentos se asemeja, no a los derechos personales, sino a los patrimoniales; y entre estos a las obligaciones y no a los reales. De allí que sostiene que la naturaleza jurídica del derecho alimentario es de carácter *sui generis*, ya que, si bien gira en torno a la persona humana, se debe considerar que todos los derechos tienen esa misma virtud, y son personales. Además, el derecho a los alimentos se asemeja más los derechos patrimoniales obligacionales, pero con algunas notas peculiares derivadas de la importancia y significación social de la familia dentro de cuyos ámbitos opera, así como del destino vital a que los mismos alimentos están dirigidos. (CORNEJO CHAVEZ, s.f., págs. 231-232)

2.4.1.3. Características del derecho de alimentos

Los principales caracteres del derecho alimentario son los siguientes:

a) Personal

Se trata de un derecho personalísimo, dado que está dirigido a asegurar la subsistencia de su titular, no puede desprenderse de él y lo acompaña en tanto subsista el estado de necesidad en que se sustenta.

b) Intransmisible

Como consecuencia de ser un derecho personalísimo, el derecho de alimentos no puede ser objeto de transferencia inter vivos ni transmisión mortis causa.

c) Irrenunciable

El alimentista puede renunciar al ejercicio del derecho, así como a las pensiones ya devengadas. Lo que no puede es renunciar al derecho, pues renunciar a él equivaldría a renunciar a la vida misma, lo que no es amparado por el derecho.

d) Intransigible

Dado que el derecho alimentario no puede ser objeto de concesiones recíprocas para poner fin a una relación jurídico familiar. Sin embargo, con frecuencia, las partes presentan una transacción respecto al monto de la pensión alimenticia para poner fin a un proceso de alimentos, transacción que, en el fondo, significa una conciliación extra judicial que el juez puede admitir siempre que evidencie que en ella no hay renuncia del derecho en sí.

e) Incompensable

Por cuanto la subsistencia del ser humano no puede trocarse por ningún otro derecho, ni puede extinguirse recíprocamente las obligaciones alimentarias. *“Esto quiere decir que los gastos realizados por el alimentante en beneficio del alimentista son considerados como una concesión de su parte, una especie de liberalidad a la cual no corresponde compensación alguna con las cuotas debidas.”* (HINOSTROZA MINGUEZ, 2008, pág. 463)

f) Imprescriptible

En razón de que el derecho para exigir alimentos no se extingue en tanto subsista aquel y el estado de necesidad.

Esta característica no se encuentra prevista expresamente en el ordenamiento jurídico, pero puede inferirse del artículo 486° del Código Civil⁵, que establece como única causa de extinción de la obligación alimentaria la muerte del obligado o del alimentista (sin perjuicio de lo señalado en el art. 728°⁶ del C.C.). Ello implica que el derecho alimentario no se extingue por prescripción.

Cabe precisar que resulta imprescriptible el derecho a alimentos mas no la acción para el cobro de las pensiones alimenticias ya devengadas, ya que esta prescribe a los 15 años, según el artículo 2001° inciso 57 del Código Civil.

g) Inembargable

Porque de esta nota distintiva se infiere el carácter intransmisible del derecho alimentario, lo cual significa que las prestaciones no pueden embargarse. Es decir, que la suma destinada a los alimentos no puede ser embargada por deuda alguna (Artículo 648°, inciso 7 del Código Procesal Civil)⁸.

h) Variable

No hay sentencia alguna referida a alimentos que tenga carácter definitivo. Lo que significa que el derecho alimentario está sujeto permanentemente a la posibilidad de revisión, esto en razón a que las necesidades del alimentista son variables, y por otro lado también son variables los medios económicos de los cuales dispone el

⁵ Artículo 486° del Código Civil: *“La obligación de prestar alimentos se extingue por la muerte del obligado o del alimentista, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 728°. En caso de muerte del alimentista, sus herederos están obligados a pagar los gastos funerarios.”*

⁶ Artículo 728° del Código Civil: *“Si el testador estuviese obligado al pago de una pensión alimenticia conforme al artículo 415°, la porción disponible quedará gravada hasta donde fuera necesario para cumplirla.”*

⁷ Inciso adicionado por el artículo único de la Ley N° 30179, publicada el 06/04/2014.

⁸ Artículo 648, inciso 7 del Código Civil: Bienes Inembargables: *“Son inembargables: (...) 7. Las pensiones alimentarias; (...)”*

alimentante. Siendo así, la obligación alimentaria puede aumentar, disminuir o cesar la respectiva cuota.

Únicamente, la sentencia de alimentos se mantendrá inalterable, en tanto subsistan los presupuestos de hecho sobre cuya base se expidió.

i) Recíproco

Este carácter se atribuye por razones de equidad y solidaridad presentes en las relaciones familiares. En tal sentido, el alimentante que asiste al alimentario puede en algún momento necesitar de éste si varían las posibilidades económicas de uno y otro. La reciprocidad es característica de los alimentos porque estos son debidos por los parientes entre sí, vale decir, el derecho recae en cada pariente, así como en cada pariente recae la obligación legal.

2.4.1.4. Clasificación de los alimentos

Existe varias clasificaciones de los alimentos dependiendo de factores, tales como: su origen, por su objeto, su amplitud, su duración y los sujetos que tienen derecho.

a) Por su origen

Los alimentos pueden ser de dos clases: voluntarios y legales

a.1. Los alimentos voluntarios

Se constituyen como resultado de una declaración de voluntad inter vivos o mortis causa. Surge de una obligación más bien de tipo moral o ético, nacida de una relación parental cercana.

a.2. Los alimentos legales

Es una obligación que surge por mandato de la ley, por actos contractuales o por resolución judicial. Estos alimentos se fundan en la existencia de vínculos parentales, otras veces en razón a la solidaridad humana o en la reciprocidad.

b) Por su objeto

Los alimentos son: naturales y civiles

b.1. Alimentos naturales

Son aquellos que comprenden estrictamente lo necesario para la subsistencia del alimentista, como lo es lo concerniente al sustento, habitación vestido y asistencia médica.

b.2. Alimentos civiles

Este tipo de alimentos comprende además otras necesidades de orden intelectual y moral, admitidas hoy universalmente como una imposición cultural del hombre y del creciente respeto por sus necesidades espirituales, como la educación, instrucción y capacitación laboral. En otras legislaciones, se incluyen, también, la recreación y los gastos de sepelio del alimentista. No están comprendidos los gastos superfluos ni el pago de las deudas.

c) Por su amplitud

Los alimentos pueden ser: necesario y congruos

c.1. Alimentos necesarios

También conocidos como alimentos restringidos. Comprende los alimentos indispensables para la satisfacción de las necesidades primordiales del alimentista, consecuentemente, comprenden tanto los alimentos naturales como los civiles.

A este tipo de alimentos hace referencia el artículo 485° del Código Civil, cuando señala que *“el alimentista que sea indigno o que pueda ser desheredado por el deudor de los alimentos, no puede exigir sino lo estrictamente necesario para subsistir.”*

c.2. Alimentos congruos

Conocidos también como alimentos amplios. Y, son aquellos que habilitan al alimentista para subsistir modestamente de un modo acorde a su nivel social y cultural.

d) Por su duración

Los alimentos en razón del tiempo son: temporales, provisionales y definitivos.

d.1. Alimentos temporales

Son aquellos alimentos que sólo duran un determinado tiempo. El caso típico es el de la madre que tiene derecho a alimentos desde la concepción hasta el parto y post parto, que incluyen los gastos de control de embarazo y alumbramiento.

d.2. Alimentos provisionales

Son aquellos que se otorgan de forma provisoria y no permanente por razones justificadas o de emergencia, siempre que se haya acreditado en la demanda, en forma indubitable y legalmente, la relación familiar, de tal manera que le permita al juez fijar una asignación anticipada, e incluso ésta debe ser otorgada de oficio en caso no se solicite, tal como lo precisa el artículo 675° del Código Procesal Civil,

que a la letra dice: *“En el proceso sobre prestación de alimentos procede la medida de asignación anticipada de alimentos cuando es requerida por los ascendientes, por el cónyuge, por lo hijos menores con indubitable relación familiar o por los hijos mayores de edad de acuerdo con lo previsto en los artículos 424°, 473° y 483° del Código Civil.*

En los casos de hijos menores con indubitable relación familiar, el juez deberá otorgar medida de asignación anticipada, actuando de oficio, de no haber sido requerida dentro de los tres días de notificada la resolución que admite a trámite la demanda.

El juez señala el monto de la asignación que el obligado pagará por mensualidades adelantadas, las que será descontadas de la que se establezca en la sentencia definitiva.”⁹

d.3. Alimentos definitivos

Son aquellos que se conceden en forma definitiva, concluyente y periódica. Solamente estará sujeta a variación a solicitud del interesado, siempre y cuando las necesidades del alimentista aumenten o disminuyan o cambien las posibilidades económicas del obligado.

e) Por los sujetos que tienen derecho

De acuerdo con nuestro sistema jurídico, los alimentos se diversifican en: derecho alimentario de los cónyuges, de los hijos y demás descendientes, de los padres y demás ascendientes, de los hermanos. Pero no se regula los alimentos entre afines como el caso de los suegros respecto del yerno o de la nuera o viceversa, como si lo regulan otras legislaciones como el código argentino.

⁹ Artículo modificado por el Artículo único de la Ley N° 29803, publicada el 06/11/2011.

e.1. Derecho alimentario entre cónyuges

El deber alimentario de los cónyuges deriva de otro que es esencial al matrimonio: el deber de asistencia, de ahí su reciprocidad, tal como lo precisa el art. 474° inc. 1 del Código Civil, el cual establece que se deben alimentos recíprocamente los cónyuges.

En una situación normal de convivencia, el deber de asistencia y su consecuente obligación alimentaria se cumplen sin intervención del poder público. De tal manera, ambos cónyuges están en la obligación de contribuir al sostenimiento del hogar, según sus respectivas posibilidades, de modo que, si uno se dedica exclusivamente al cuidado de los hijos y al trabajo del hogar, la obligación de sostener a la familia recae sobre el otro, sin perjuicio de la ayuda que se deben ambos.

No obstante, en situaciones de crisis matrimonial las relaciones conyugales quedan sometidas a ciertas reglas y se cumplen con intervención de la autoridad pública. En el caso de separación de hecho, el segundo párrafo del art. 291° del C.C., establece que la obligación le corresponde al cónyuge que hizo abandono del hogar. Pudiéndose solicitar la administración de los bienes sociales o de los bienes propios del otro.

Cuando se produce la nulidad y divorcio cesa la obligación de alimentos, salvo en caso de excepción. Si el ex cónyuge es el inocente el artículo 350° de nuestro Código Civil, señala que el juez puede fijar una pensión alimenticia, siempre y cuando carezca de bienes propios o sociales o estuviere en la imposibilidad de trabajar o de subsistir a través de otros medios. Situación similar sucede si se contrajo el matrimonio nulo respecto del cónyuge de buena fe o mala fe, si no cuenta con lo necesario para subsistir.

Ahora bien, si el cónyuge fue culpable, sólo tiene derecho a alimentos si es indigente.

De otro lado, otro caso excepcional al derecho de alimentos entre cónyuges es el caso de los concubinos, pues si bien nuestra legislación admite la regulación del concubinato de manera restringida, esto es, para efectos patrimoniales y de filiación; sin embargo, el artículo 326° del Código Civil, también estipula el derecho de alimentos de una manera especial, siempre que se cumplan determinadas condiciones como la falta de impedimentos matrimoniales, el tiempo de convivencia establecido y la culpa de la ruptura de la unión de hecho, en este caso el concubino culpable queda obligado al pago de una indemnización o una pensión de alimentos a favor del concubino inocente, a elección de este último.

Asimismo, el art. 414° del Código Civil plantea el derecho de alimentos a favor de la madre soltera, es decir, aquellas madres que tienen hijos extramatrimoniales reconocidos por los padres o declarados judicialmente, y que no se encuentran bajo el amparo de la unión de hecho, en cuyo caso tienen derecho a alimentos durante los sesenta días anteriores y sesenta días posteriores al parto.

En cuanto al cese del derecho alimentario de los cónyuges se presentan los siguientes supuestos:

- Abandono de la casa conyugal sin causa justa y se rehúsa volver a ella.
- Desaparición del estado de necesidad del cónyuge alimentista.
- Sobrevenida insuficiencia de la capacidad económica del cónyuge obligado.
- Por divorcio, salvo las excepciones ya mencionadas.
- Por muerte de uno de los cónyuges.

e.2. Derecho alimentario de los hijos y demás descendientes

Este derecho se origina en la consanguinidad y otros factores jurídicos que reafirman tal derecho, como: el matrimonio de los padres, el ejercicio de la patria potestad, el goce del usufructo legal, la presunción de paternidad por haber mantenido trato sexual en la época de la concepción, etc. (PERALTA ANDÍA, 2002, pág. 507)

Los artículos 93° y 94° del CNA., determinan que es obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos, aun cuando se produzca la suspensión o pérdida de la patria potestad.

Ahora bien, cabe precisar que en virtud del principio de igualdad de derechos que consagra la Constitución, los hijos matrimoniales y los hijos extramatrimoniales tienen iguales derechos, por lo que los padres se encuentran en la obligación de proveer el sostenimiento, la protección, la educación y formación de los hijos menores, según sus posibilidades, independientemente si descenden de una relación matrimonial o extramatrimonial.

En cualquier situación, el derecho alimentario de los hijos solo existe, en cuanto subsiste el estado de necesidad, lo que significa que solo tiene derecho a percibir alimentos mientras no pueden valerse por sí mismos. Existiendo la presunción de que, hasta cierta edad, se encuentran en estado de necesidad, de modo que no existe la obligación de acreditarlos. Tratándose de hijos mayores de edad, el estado de necesidad deben, necesariamente, acreditarlo.

No obstante, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido diversas situaciones, en la que, pese a que los hijos cumplieron la mayoría de edad, subsiste el derecho de continuar percibiendo una pensión alimenticia. Así tenemos: los hijos e hijas solteros que al cumplir la mayoría de edad estén siguiendo con éxito una

profesión u oficio hasta los 28 años de edad; hijas e hijos solteros que no se encuentren en aptitud de atender su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobada¹⁰; el hijo mayor de dieciocho años que no se encuentra en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas; el hijo mayor de dieciocho años, cuando la causa que lo redujo a ese estado fue su propia inmoralidad, situación en la cual solo podrá exigir lo estrictamente necesario para subsistir¹¹.

Por otro lado, también existen otros descendientes con derecho alimentario, como es el caso de los nietos respecto de sus abuelos. Esta situación se presenta cuando el hijo matrimonial o extramatrimonial no puede obtener alimentos de su padre, ya sea por ausencia de este o por causas de pobreza, en cuyo caso puede pedirlos a sus abuelos, conforme al artículo 479° del Código Civil el cual señala: *“Entre los ascendientes y descendientes, la obligación de darse alimentos pasa por causa de pobreza del que debe prestarlos al obligado que le sigue.”* En el mismo sentido, el artículo 93° del Código de Niños y Adolescentes refiere que: *“Es obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de los padres o desconocimiento de su paradero, prestan alimentos en el orden de prelación siguiente: 1. Los hermanos mayores de edad; 2. Los abuelos; 3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y 4. Otros responsables del niño o del adolescente.”*

En cuanto a la extinción del derecho alimentario de los hijos, se presentan las siguientes causas:

¹⁰ Artículo 424° del Código Civil: *“Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de dieciocho años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad; y de los hijos e hijas que no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas.”*

¹¹ Artículo 473° del Código Civil: *“El mayor de dieciocho años sólo tiene derecho a alimentos cuando no se encuentre en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Si la causa que lo redujo a ese estado fue su propia inmoralidad, sólo podrá exigir lo estrictamente necesario para subsistir. (...)”*

- Por muerte del alimentista, porque ella es el fin de la personalidad.
- Por cesación de su estado de incapacidad, lo que generalmente ocurre a los dieciocho años, salvo los casos antes mencionados.
- Por muerte del alimentante, sin embargo, ello no impide que el beneficiario pueda solicitarlo contra un nuevo obligado.
- Por haber sobrevenido la pobreza del obligado que, si bien no es una causal de extinción, al menos, lo es para suspender la obligación alimentaria, sin que ello impida, al alimentista, ejercer su derecho contra el siguiente obligado.

e.3. Derecho alimentario de los padres y otros ascendientes

La ley dispone que se deben alimentos recíprocamente los ascendientes y descendientes entre sí¹², de lo que se infiere que tanto los padres como los abuelos maternos y paternos, tiene un derecho alimentario que está a cargo de los hijos y nietos, respectivamente.

Es deber de los hijos mayores de edad alimentar o sostener a sus padres que han devenido en incapacidad de sufragar sus propias necesidades. La fuente del derecho alimentario de los padres se encuentra en la consanguinidad; no obstante, (CORNEJO CHAVEZ, s.f., pág. 259), señala que no basta la consanguinidad para que el derecho pueda ser ejercido, sino que, para actualizarlo y para movilizar eventualmente la acción, deben darse dos circunstancias concurrente: el estado de necesidad, y el haber el padre prestado antes alimentos al hijo a quien hoy los pide.

12 Artículo 474° del Código Civil: “*Se deben alimentos entre sí: 1. Los cónyuges. 2. Los ascendientes y descendientes. 3. Los hermanos.*”

Efectivamente, el padre que reclame alimentos, tiene que acreditar que se encuentra en estado de necesidad, por no poder proveer a su subsistencia, ya que no existe presunción alguna de necesidad. En cambio, en cuanto a la segunda circunstancia, referida a que el padre haya prestado alimentos al hijo, si bien no se exige de manera directa, sí hace referencia a ella, en forma indirecta, el artículo 398^{o13} del Código Civil.

Respecto al derecho alimentario de los abuelos paternos y maternos, puede tratarse de las siguientes situaciones:

- Un abuelo que tiene hijos y nietos, donde el obligado principal es el hijo, el cual puede ser padre matrimonial o extramatrimonial que reconoció voluntariamente a su hijo, que lo reconoció tardíamente, fue declarado judicialmente o solo alimentista.
- Un abuelo necesitado que sólo tiene nietos, pero no hijos, caso en el cual aquellos resultarían obligados.
- Abuelo necesitado que, teniendo hijos y nietos, el primer obligado no puede dar alimentos por razón de pobreza. En estas situaciones el problema se resuelve de acuerdo con el derecho de otros ascendientes más remotos. (PERALTA ANDÍA, 2002, pág. 512)

En cuanto a la extensión de los alimentos, tanto para los padres y abuelos, éstos deben comprender lo necesario para cubrir las necesidades de sustento, vestido, habitación y asistencia médica, dentro de las limitaciones de la situación económica y obligaciones del hijo o nieto, respectivamente. Esta extensión no podrá reducirse, aun cuando la causa que conllevó al padre o abuelo a la pobreza sea su propia

¹³ Artículo 398° del Código Civil: *“El reconocimiento de un hijo mayor de edad no confiere al que lo hace derechos sucesorios ni derecho a alimentos, sino en caso que el hijo tenga respecto de él la posesión constante de estado o consienta en el reconocimiento.”*

inmoralidad, esto por mandato expreso del art. 473° del C.C, cuyo tercer párrafo precisa que “no se aplica lo dispuesto en el párrafo anterior [refiriéndose al estado de necesidad por inmoralidad del propio alimentista, que conlleva a exigir solo lo necesario para subsistir], cuando el alimentista es ascendiente del obligado a prestar alimentos.” Empero, y por situación de extrema gravedad, la pensión se reduce a lo estrictamente necesario para subsistir si el padre incurre en causal de indignidad o desheredación, tal como lo prescribe el artículo 485° del Código Civil, que a la letra dice: *“El alimentista que sea indigno de suceder o que pueda ser desheredado por el deudor de los alimentos, no puede exigir sino lo estrictamente necesario para subsistir.”*

Finalmente, la prestación alimentaria se mantendrá en tanto subsista el estado de necesidad que la originó, pero también culminará por muerte del alimentista o del alimentante.

e.4. Derecho alimentario de los hermanos

Por disposición del art. 474, inc. 3° del Código Civil, también se deben alimentos recíprocamente los hermanos.

Este derecho, al igual que los anteriores, también tiene su origen en los lazos de consanguinidad que los vincula. Y, pueden ejercitarlo tanto los hermanos germanos, es decir, de padre y madre, como los medios hermanos, esto es, hermanos sólo por parte de madre o sólo de padre; al igual que los hermanos de padres casados entre sí, como aquellos cuyos padres no están unidos por el matrimonio.

Para acceder a este derecho se requiere que el peticionante se encuentre en estado de necesidad, es decir, que no pueda proveer por sí mismo su subsistencia, tratándose de hermanos menores de edad dicho estado de necesidad se presume. Y de otro lado, que el hermano obligado se encuentre en una posición económica que le permita atender las necesidades primordiales del otro.

Este derecho comprende lo necesario para el sustento, vestido, habitación y asistencia médica, si los alimentistas son mayores de edad. Tratándose de hermanos menores, comprende, además lo preciso para la educación, instrucción y capacitación laboral del alimentista.

2.4.1.5. Presupuestos para fijar alimentos

Precisa el artículo 481° del Código Civil que los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos. De allí se concluye que para solicitar alimentos tienen que acreditarse conjuntamente los siguientes presupuestos: estado de necesidad de quien lo solicita; posibilidades económicas de quien debe prestarlos; y, una norma legal que establezca la obligación.

a) Estado de necesidad de quien lo solicita

Este requisito está referido a las necesidades del alimentista y a la imposibilidad de atenderlas por sí mismo. En el caso de menores de edad nuestra doctrina ha establecido que existe presunción de estado de necesidad. Dicha presunción es *iuris tantum*, vale decir, una presunción relativa, ya que, a pesar de la incapacidad por minoría de edad del niño o adolescente, el menor podría tener bienes y derecho con los que puede cubrir sus necesidades.

Contrariamente, en el caso de mayores de edad, el estado de necesidad debe ser probado. No se requiere que el estado de necesidad sea absoluto, sino relativo en relación con las condiciones personales y sociales del alimentista. Asimismo, el mayor de edad deberá acreditar que no puede obtener lo necesario para subsistir, ya sea por razones de salud o por otras circunstancias. Otro punto que también debe considerar el juez al momento de fijar los alimentos para mayores de edad, es la circunstancia que dio lugar al estado de necesidad, pues como bien señala el segundo

párrafo del artículo 473° del Código Civil, si la causa de miseria fuese su propia inmoralidad, la pensión se limitará a lo estrictamente necesario para subsistir.

(CORNEJO CHAVEZ, s.f., pág. 236), citando a Josserand precisa que es el Juez quien debe determinar la existencia del estado de necesidad en que se halla el acreedor, tomando en cuenta los ingresos de éste más bien que su capital, porque no se puede obligar a un propietario a deshacerse de un bien productivo para constituirse una renta vitalicia. Seguidamente añade que, en la apreciación de los ingresos han de tomarse en cuenta las posibilidades más bien que las realidades, ya que quien está en condiciones de ganarse la vida trabajando, no podría tener la pretensión de practicar la ociosidad en perjuicio de sus parientes para ser pensionista de éstos.

Efectivamente, como bien piensa Messineo, el acreedor no puede pretender alimentos si no en cuanto demuestre que ha intentado, pero que le ha resultado inútil, proveer para sí mismo. Y agrega que sin este límite la pretensión a los alimentos se resolvería en un medio de especulación para los holgazanes. (CORNEJO CHAVEZ, s.f., pág. 237)

Entonces, el estado de necesidad se define como aquella situación en la que se encuentra una persona a quien le es difícil proveer y satisfacer sus propias necesidades más elementales, ya sea por carecer de medios propios o por no poder procurárselos él mismo.

b) Posibilidades económicas de quien debe prestarlos

Es necesario que la persona a quien se pide una pensión alimenticia esté en condiciones de poder suministrarla, es decir, que disponga de medios que superen la atención de sus propias necesidades elementales, pues no podría obligársele a privarse de lo indispensable para contribuir al alimentista.

Citando a Josserand, (CORNEJO CHAVEZ, s.f., pág. 237), comenta que, así como el acreedor debe hallarse en estado de necesidad, el deudor debe tener lo superfluo, más el juez habrá de considerar, no sólo los ingresos del demandado y su situación de familia, sino también sus posibilidades de ganar más de lo que actualmente gane.

El cumplimiento de la obligación alimentaria no puede poner en riesgo la propia subsistencia del alimentante. El deudor debe estar en posibilidades de atender con alimentos al necesitado, pero si al darlos va a devenir en estado de necesidad e incluso poner en riesgo su propia subsistencia, entonces esta obligación debe desplazarse hacia otros obligados (VARSI, 2012, pág. 444). De allí que nuestra legislación ha previsto el orden de prelación entre los obligados a prestar alimentos tanto cuando se trata de un menor¹⁴ o mayor¹⁵ de edad. De otro lado, también ha previsto la posibilidad de prorratar la pensión alimenticia cuando son dos o más los obligados a prestarla¹⁶.

Por su parte, el artículo 481° del Código Civil precisa que: *“Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor (...)”* En tal sentido, claro está que no puede exigirse el pago de una pensión alimenticia cuando ésta signifique poner en riesgo la subsistencia del obligado.

¹⁴ Artículo 93° del Código de los Niños y Adolescentes: *“Es obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de los padres o desconocimiento de su paradero, prestan alimentos en el orden de prelación siguiente: 1. Los hermanos mayores de edad; 2. Los abuelos; 3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y 4. Otros responsables del niño o del adolescente.”*

¹⁵ Artículo 475° del Código Civil: *“Los alimentos, cuando sean dos o más los obligados a darlos, se presentan el orden siguiente: 1. Por el Cónyuge. 2. Por los descendientes. 3. Por los ascendientes. 4. Por los hermanos.”*

¹⁶ Artículo 477° del Código Civil: *“Cuando sean dos o más los obligados a dar alimentos, se divide entre todos el pago de la pensión en cantidad proporcional a sus respectivas posibilidades. Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez puede obligar a uno solo a que los preste sin perjuicio de su derecho a repetir de los demás la parte que les corresponda.”*

Ahora bien, la carga de probar los ingresos del demandante, en principio, recae sobre quien pide una pensión alimenticia. No obstante, de conformidad con el párrafo final del artículo 481° de nuestro Código Civil, no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos. Dado que existen situaciones en las que, por la actividad u oficio que desempeña el obligado, resulta difícil probar con exactitud los ingresos del alimentante, en cuyo caso se tiene que recurrir a indicios, esto es, a la valoración del patrimonio del alimentante, su posición social, su forma de vivir, etc.

c) Una norma legal que establezca la obligación

Resulta evidente que, tratándose de obligaciones civiles y no meramente naturales, exista una norma legal que establezca la obligación alimentaria, generalmente, a consecuencia de los vínculos familiares entre el alimentista y el obligado, y por excepción, entre extraños. A su vez, la existencia de esta norma confiere fundamentos al acreedor para que pueda ejercer su derecho.

Nuestra legislación nacional, el derecho de alimentos se encuentra regulado en el Título I de la Sección Cuarta del Libro Tercero del Código Civil, en el Capítulo IV del Título I del Libro Tercero del Código de los Niños y Adolescentes; así como en el Subcapítulo 1° del Capítulo I del Título II de la Sección Quinta del Código Procesal Civil.

2.4.1.6. Variación de los alimentos

Atendiendo a la naturaleza del derecho alimentario, éste se encuentra sujeto a las variaciones en la situación de las partes en el tiempo, además es un principio universalmente aceptado que no existe cosa juzgada en materia de fijación de pensiones alimentarias¹⁷, en tal sentido, luego de emitida la sentencia la pensión alimenticia sufre determinadas variaciones.

Como bien lo precisa el artículo 482° del Código Civil, la pensión alimenticia va a sufrir un aumento o reducción del monto de acuerdo a las necesidades de los acreedores y también de acuerdo a las posibilidades de los obligados.

En el mismo sentido los arts. 483°, 484° y 486° del antes citado cuerpo legal, autorizan al interesado a solicitar al juzgador que se resuelva nuevamente la situación cuando ocurran circunstancias que sirvieron para otorgar una pensión alimenticia, han variado.

Siendo así a continuación se desarrollan los tipos de variaciones que puede sufrir la pensión alimenticia:

a) Reducción de la pensión alimenticia

Como lo mencionamos anteriormente, el artículo 482° de nuestro Código Civil regula la posibilidad de que la pensión alimenticia se incremente o reduzca, esto teniendo en cuenta el aumento o disminución de las necesidades del alimentista, así como atendiendo a las posibilidades del obligado. De allí, que el deudor alimentario se encuentra facultado a solicitar la reducción de la pensión alimenticia cuando sus ingresos son insuficientes, de manera que no puede cumplir con la obligación alimentaria sin poner en riesgo su propia subsistencia y la de su familia.

¹⁷ Casación N° 2511-2004/Ica, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-10-2006, pág. 17414. b

Cabe precisar que el tema de la reducción alimenticia será desarrollado posteriormente.

b) Aumento de la pensión alimenticia

Consiste en el incremento de la pensión alimenticia por incremento de las necesidades del acreedor y de las posibilidades del obligado. Facultad que, al igual que la reducción alimenticia, la encontramos en el artículo 482° del Código Civil.

Ahora bien, el artículo en comento refiere que no es necesario solicitar el aumento, cuando la pensión alimenticia se hubiese fijando en porcentaje, supuesto en el cual se reajusta automáticamente de acuerdo a las variaciones que sufra la remuneración del obligado.

En todo caso, será el juez quien, en mérito a las pruebas y fundamentos, determine si la pensión alimenticia, fijada primigeniamente, debe aumentarse; atendiendo, asimismo, al aumento de necesidades del alimentista, así como los ingresos del demandado, ya que de ninguna manera se puede poner en peligro su subsistencia.

c) Cambio en la forma de prestar alimentos

La obligación alimentaria puede ser cumplida de tres formas: en dinero, en especie y en forma mixta.

La forma en que se presta pensión alimenticia depende, fundamentalmente, de la situación de hecho en que se encuentran los sujetos de la relación (CORNEJO CHAVEZ, s.f., pág. 280). En tal sentido, si viven juntos, el obligado cumple su deber suministrando, lo esencial para el sustento del alimentista, más en especie que en dinero. En cambio, si dicho derecho es declarado por el juez, generalmente, se obliga

al demandado a pagar un monto determinado, es decir, en dinero ya sea en un monto fijo o en porcentaje, por periodos adelantados y se ejecuta aunque haya apelación¹⁸.

Empero, el legislador ha establecido que, cuando existan casos especiales y justificados, el obligado puede pedir que se le permita prestar alimentos en forma diferente del pago de una pensión (art. 484° del C.C); es aquí donde se faculta al deudor alimentario, a solicitar el cambio en la forma de prestar alimentos, es decir, de un monto fijo puede satisfacer la obligación en especie, (entregando bienes) o manteniendo en casa al alimentista. Este artículo, a su vez, permite se solicite el cambio de la pensión fijada en porcentaje por el establecimiento de un monto fijo.

Asimismo, el obligado también puede prestar los alimentos de forma mixta, esto es, en dinero y en especie. Esto ocurre, por ejemplo, en los acuerdos conciliatorios, donde el obligado se compromete a pasar determinada cantidad de dinero, además de asumir, independientemente, otros gastos del alimentista (podemos citar, gastos de colegio, ropa, médicos, etc.)

d) Prorratio de la pensión alimenticia

Se entiende por prorratio a la división en partes iguales, en este caso, de la pensión alimenticia. Precisa Pedro Mejía citado por (PERALTA, 2011), que *“Es la división de la cuota alimentaria entre los obligados a prestarla, se realiza por vía judicial cuando sean dos o más los obligados en igual grado de prelación (varios obligados principales).”*

Esta figura jurídica se encuentra regulada en el artículo 477° del Código Civil según el cual, cuando sean dos o más los obligados a dar los alimentos, se divide entre todos el pago de la pensión en cantidad proporcional a sus respectivas

¹⁸ Artículo 566° del Código Procesal Civil: *“La pensión de alimentos que fije la sentencia debe pagarse por periodo adelantado y se ejecuta aunque haya apelación. En este caso, se formará cuaderno separado. Si la sentencia de vista modifica el monto, se dispondrá el pago de éste (...)”*

posibilidades. Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez puede obligar a uno solo a que los preste, sin perjuicio de su derecho a repetir de los demás la parte que les corresponda. De la misma manera, el artículo 95° del Código de los Niños y Adolescentes, menciona que *“La obligación alimentaria puede ser prorrateada entre los obligados si es que, a criterio del Juez, aquellos se hallan materialmente impedidos de cumplir dicha obligación en forma individual. (...)”*.

En efecto, el prorrateo significa la división de la obligación alimenticia ante la concurrencia de varios deudores frente a un solo acreedor, lo que implica la distribución de cuotas entre aquellos, en proporción a sus posibilidades económicas.

Empero, como bien señala (CORNEJO CHAVEZ, s.f., págs. 276-277), semejante situación puede suscitarse cuando, frente a un solo obligado, accionan varios titulares del derecho. En este caso, procede el prorrateo, es decir, la distribución entre los varios alimentistas de la parte de renta que deba o pueda destinarse al cumplimiento del conjunto de esas obligaciones. Porque sería injusto e inequitativo, y hasta impráctico, que se comprometiera el íntegro de las rentas del obligado para alimentar a otras personas, de tal modo que él mismo se viera en estado de inopia.

e) Exoneración de la pensión alimenticia

La exoneración viene a ser la liberación, temporal o permanente, del cumplimiento de la obligación alimentaria y se produce a solicitud del obligado. Según el artículo 483° del Código Civil, *“El obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere si disminuyen sus ingresos, de modo que no pueda atenderla sin poner en peligro su propia subsistencia o si ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad. Tratándose de hijos menores, a quienes el padre o la madre estuviese pasando una pensión alimenticia por resolución judicial, esta deja de regir al llegar aquéllos a la mayoría de edad. Sin embargo, si subsiste el estado de necesidad por*

causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas o el alimentista está siguiendo una profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la obligación continúe vigente.”

El citado artículo enumera los supuestos que eximen al obligado de seguir prestando alimentos. Estos son:

1. Cuando han disminuido los ingresos del obligado, de manera que no puede seguir cumpliendo con la pensión alimenticia sin poner en riesgo su propia subsistencia. En cuyo caso está autorizado a pedir la exoneración, pues antes que todo debe prevalecer su derecho a la vida.
2. Cuando ha desaparecido el estado de necesidad del alimentista. Situación que se justifica por cuanto ha desaparecido uno de los presupuestos indispensables que dio lugar a la pensión alimenticia.
3. Cuando el alimentista alcanza la mayoría de edad, dado que el estado de necesidad se presume en menores de edad; consecuentemente al cumplir la mayoría de edad, esta presunción desaparece, debiendo en todo caso ser acreditada por el alimentista, es por ello que el artículo citado impone excepciones a esta regla: cuando subsiste el estado de necesidad en el alimentista mayor de edad por incapacidad física o mental, o está siguiendo una profesión u oficio exitosamente, en cuyo caso debe pedir continúe vigente la pensión alimenticia.

f) Cese de la obligación alimentaria

El hijo alimentista, es decir, el hijo extramatrimonial no reconocido ni declarado judicialmente, tiene derecho a percibir una pensión alimenticia de aquel que tuvo relaciones sexuales con la madre durante la época de la concepción. Esta pensión se prolonga hasta que el hijo alimentista cumpla la mayoría de edad (18 años), pudiendo mantenerse vigente si el hijo es incapaz (física o mental) de manera que no puede proveer su propia subsistencia. Sin embargo, si el supuesto padre demuestra judicialmente, a través de una prueba biológica, que él no es el padre, se encuentra autorizado para solicitar el cese de la pensión alimenticia. (Art. 415° del C.C.)

g) Extinción de la obligación alimentaria

Es el cese definitivo de la obligación alimentaria, sin posibilidad de reaparecer. De conformidad con el artículo 486° del Código Civil, la obligación de prestar alimentos culmina por dos causas. La primera de ellas, está referida a la muerte del alimentista. La muerte pone fin a la persona¹⁹, y con ello su derecho también ha terminado, ya que, precisamente, los alimentos sirven para lograr la supervivencia de la persona. En este caso, los herederos del alimentista están obligados a pagar los gastos funerarios.

La segunda causa concierne a la muerte del obligado. En este caso, la obligación se extingue respecto del fallecido, pues bien puede el alimentista accionar contra otro obligado, atendiendo al orden de prelación al que se refiere el artículo 475° del Código Civil.

¹⁹ Artículo 61° del Código Civil: “*La muerte pone fin a la persona.*”

2.4.2 Reducción de la pensión alimenticia

2.4.2.1. Definición

La sentencia que establece la pensión de alimentos no produce cosa juzgada material, pudiendo ser modificada posteriormente en el caso que varíen las circunstancias de hecho en las cuales se restablecieron. Dentro de este contexto, el artículo 482° de nuestro Código Civil²⁰, establece que la pensión alimenticia se reduce según la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades de que debe prestarlas.

En palabras de Palacio, (1990) citado en (GACETA JURÍDICA, 2014, pág. 72) *“La reducción de la cuota alimentaria, procede, en primer lugar, frente a la prueba de que se ha operado una disminución del patrimonio del obligado o de su capacidad laboral, o bien cuando se acredita la existencia de erogaciones que gravitan negativamente en sus posibilidades económicas. Debe asimismo prosperar la pretensión en la hipótesis de probarse que la pensión fijada, a raíz de circunstancias sobrevinientes, exceden las necesidades del alimentado.”*

En tal sentido, la reducción de la pensión alimenticia, viene a ser un derecho que tiene el alimentante de solicitar la disminución de la cuota alimentaria, atendiendo a circunstancias que justifican o impiden cumplir a cabalidad el monto fijado primigeniamente.

2.4.2.2. Presupuestos

Estando a lo dispuesto por el Código Civil, el obligado puede solicitar la reducción de la pensión alimenticia cuando:

²⁰ Código Civil Peruano, artículo 482°: *La pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla. Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en porcentaje de las remuneraciones del obligado, no es necesario nuevo juicio para reajustarla. Dicho reajuste se produce automáticamente según las variaciones de dichas remuneraciones.”*

- a) Disminuyen las necesidades del alimentista, es decir, las necesidades que sirvieron de base para fundamentar el monto de la pensión alimenticia impuesta han disminuido, es decir, ya no son las mismas, lo que justifica que dicha pensión pueda ser materia de reducción.
- b) Las posibilidades del obligado han disminuido. Es decir, que el alimentante no cuenta con las mismas posibilidades económicas que antes, ya sea porque disminuyó su patrimonio, su capacidad laboral, o aumento su carga familiar.

Por otro lado, el art. 482° del código acotado, refiere que cuando el monto de la pensión fue fijado en porcentaje, no se requiere de un nuevo proceso, pues ésta se reajusta automáticamente conforme a las variaciones que sufra la remuneración del obligado.

2.4.2.3. Circunstancias

Entre las circunstancias que pueden llevar al obligado a solicitar la reducción de alimentos se encuentran las siguientes:

- a) Disminución de la capacidad laboral del obligado alimentario, de manera que implique la disminución de sus ingresos, de manera que no le permita cumplir cabalidad con la pensión alimenticia fijada.
- b) Por nuevo matrimonio o convivencia del progenitor obligado al pago de la pensión alimenticia. Al respecto, si bien los progenitores pueden rehacer sus vidas, esto no debe de forma alguna perjudicar a los hijos de la primera unión.
- c) Por el nacimiento de nuevos hijos del deudor alimentario. Como se ha dicho, los hijos de la primera unión no tienen por qué verse perjudicados con los actos posteriores de sus progenitores; sin embargo, ante el nacimiento de un nuevo hijo, también surge, en contraposición los derechos de este último, que al igual

que el primero, merece la misma protección y cuidados, que tampoco pueden ser desatendidos.

d) Cuando las necesidades del alimentista disminuyen, es decir que ya no son las mismas en proporción a las que tenía cuando se fijó la pensión alimenticia.

e) También por aumento de la capacidad económica del otro progenitor. Es decir, si un progenitor mejora su situación económica, esto permite que el otro progenitor, inicie un proceso para reducir la pensión alimenticia. De esta manera se estaría contribuyendo con la manutención del menor alimentista, en proporción a los ingresos de cada obligado.

2.4.2.4. Vigencia de las sentencias en los procesos de reducción de alimentos

El artículo 568° del Código Procesal Civil, es claro en señalar que la pensión alimenticia empieza regir desde el día siguiente de la notificación con la demanda. Sin embargo, el problema se suscita cuando se trata de los demás procesos, llámese: aumento, reducción, cambio en la forma de prestarla, prorratio, exoneración y extinción de pensión de alimentos. Pues en estos casos, y específicamente en el caso materia de la presente investigación- reducción de alimentos-, no existe una regulación al respecto.

Dentro de este contexto, si nos remitimos lo dispuesto por el art. 571° del CPC, que a la letra refiere: *“Las normas de este Subcapítulo son aplicables a los procesos de aumento, reducción, cambio en la forma de prestarla, prorratio, exoneración y extinción de pensión de alimentos, en cuanto sean pertinentes”*, se puede concluir que por aplicación extensiva del artículo 568° antes citado, las respectivas sentencias tendrían efecto desde el día siguiente de la notificación con la demanda. No obstante, la última parte del artículo 571, ya citado,

señala que las normas en materia de alimentos son aplicables extensivamente en cuanto sean pertinentes.

Lo anterior ha dado lugar a que, en las sentencias, en el caso concreto de reducción de alimentos, se inaplique el artículo 568°, en consecuencia, el nuevo monto empieza a regir a partir de la fecha en que la sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada. En ese sentido se ha pronunciado el Pleno Jurisdiccional de Familia²¹, llevado a cabo en Trujillo los días 17 y 18 de diciembre del 2010, así como también el Primer Encuentro de Jueces de Paz Letrado de Junín²², llevado a cabo el día 03 de junio del 2011. En ambos casos se adoptó la posición referida a que, en los procesos de reducción de alimentos, las sentencias empezarán a regir una vez que hayan adquirido la calidad de cosa juzgada. Criterio que se viene aplicando.

²¹ Respecto al TEMA N° 01: VIGENCIAS DE LAS SENTENCIAS DE LOS PROCESOS DERIVADOS DE ALIMENTOS. Respecto a las DEMANDAS DE REDUCCION, PRORRATEO, EXONERACION Y CESE DE PENSION ALIMENTICIA, ASI COMO CAMBIO EN LA FORMA DE PRESTAR LOS ALIMENTOS. El pleno acordó que en “Las sentencias que amparan la demanda en todas estas pretensiones empiezan a regir desde que quedan consentidas o ejecutoriadas ya sea que el beneficiario (s) sean niños, adolescentes o mayores de edad.”

²² En el TEMA 8.A: Aumento de Alimentos. ¿Desde cuándo rige la sentencia en un proceso de aumento de alimentos y reducción, desde la notificación de la demanda o cuando la sentencia quede firme? Se adoptó por mayoría la segunda posición que señala: “En éste extremo, es necesario tener en cuenta el tipo de sentencia que se trata, sabemos que las sentencias declarativas declaran el derecho que ya era inherente a la persona, se limita a declarar un derecho que ya se tenía, por ello sus efectos se retrotraen al momento que surgió ese derecho, situación distinta ocurre con las sentencias constitutivas en que se modifica una situación jurídica existente, constituyendo una nueva, es por ello que en esos casos, necesariamente la sentencia surte efectos desde que alcanza la autoridad de cosa juzgada; y, finalmente, las sentencias de condena que además de reconocer un derecho al vencedor, obligan a cumplir una prestación.

Una sentencia de aumento de alimentos es una sentencia de condena, en tanto que reconoce el derecho del alimentista a que se le aumente la pensión por haberse incrementado sus necesidades, y a su vez condena al obligado a un aumento en el monto de la pensión, es así que, teniendo en cuenta la naturaleza de éste tipo de sentencia, puede retrotraerse al momento de notificada la demanda, pues ese incremento de necesidades se dio desde entonces y por tanto el aumento debe liquidarse desde entonces.

Situación distinta ocurre con los casos de reducción de los alimentos, pues se trata de una sentencia constitutiva, ya que se va a modificar una situación jurídica ya existente y se va a constituir otra al reducir los alimentos por haber variado las condiciones que se daban al momento de fijar la pensión inicial, es por ello que en éstos casos, la sentencia siempre empezará a regir una vez que haya adquirido la autoridad de cosa juzgada.”

2.4.2.5. Requisito de admisibilidad para admitir la demanda de reducción de alimentos

Mediante Ley N° 29486 publicada el 22 de diciembre del 2009, se incorporó el artículo 565-A del Código Procesal Civil, según el cual es requisito para la admisión de la demanda de reducción, variación, prorratio o exoneración de pensión alimentaria que el demandante obligado a la prestación de alimentos acredite encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia.

Conforme puede verse, constituye un requisito especial exigible para la demanda que verse sobre la pretensión de reducción de la pensión alimentaria, que el demandante obligado pruebe no encontrarse adeudando ninguna suma por concepto de pago de pensión alimenticia, de lo contrario la demanda será declarada improcedente de plano.

2.4.3 Mecanismos de ejecución de las sentencias de alimentos

2.4.3.1. Prohibición del demandado de ausentarse del país

A pedido de parte y cuando se acredite de manera indubitable el vínculo familiar, el juez puede prohibir al demandado ausentarse del país mientras no esté garantizado debidamente el cumplimiento de la asignación anticipada o pensión alimentaria. Esta prohibición se aplica independientemente de que se haya venido produciendo el cumplimiento de la asignación anticipada o pensión alimentaria. Para efectos de dar cumplimiento a la prohibición, el juez cursa oficio a las autoridades competentes. (art. 563° del C.P.C)

Cabe resaltar que esta prohibición al demandado de no ausentarse del país, no necesariamente debe mantenerse durante todo el desarrollo del proceso, sino que esta puede ser levantada en tanto el demandado cumpla con garantizar adecuadamente el pago de la asignación anticipada o de la pensión alimentaria.

2.4.3.2. Embargo de las remuneraciones del obligado

Conforme al segundo párrafo del inciso 6) del artículo 648° del Código Procesal Civil, cuando se trata de garantizar obligaciones alimentarias, el embargo procede hasta el sesenta por ciento del total de los ingresos, con la sola deducción de los descuentos establecidos por ley.

De esta manera, nuestra legislación permite el embargo del sesenta por ciento del total de los ingresos del demandado, como una medida legal que permite garantizar el pago de las pensiones alimentarias; debiendo entender por “total de los ingresos” todo aquello que perciba el obligado sea cual fuese la fuente que lo origina. Así en el caso del trabajador dependiente, esa totalidad de ingresos está constituida tanto por los conceptos remunerativos, como por los no remunerativos; y tratándose de un trabajador independiente lo constituye la totalidad de sus honorarios y otros conceptos que perciba. Lo anterior implica una interpretación acorde con el principio del interés superior del niño.

2.4.3.3. El proceso de omisión a la asistencia familiar

Cabe precisar que, de conformidad con el artículo 566-A del Código Procesal Civil, *“Si el obligado, luego de haber sido notificado para la ejecución de sentencia firme, no cumple con el pago de los alimentos, el juez, a pedido de parte y previo requerimiento a la parte demandada bajo apercibimiento expreso, remitirá copia certificada de la liquidación de las pensiones devengadas y de las resoluciones respectivas al Fiscal Provincial Penal de Turno, a fin de que proceda con arreglo a sus atribuciones. Dicho acto, sustituye el trámite de interposición de denuncia penal.”*

Conforme a lo anterior, cuando el alimentante se resiste a pagar, previo requerimiento, la pensión alimenticia fijada en una sentencia firme expedida en un proceso de alimentos, incurre en la comisión del delito de incumplimiento de obligación alimentaria,

más conocido como “omisión de asistencia familiar”. Delito previsto en el artículo 149° del Código Penal, que a la letra dice: *“El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial.*

Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en conveniencia con otra persona o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo la pena será no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Si resulta lesión grave o muerte y éstas pudieron ser prevista, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro en caso de lesión grave, y no menor de tres ni mayor de seis en caso de muerte.”

Este delito se configura cuando el deudor, teniendo pleno conocimiento de la sentencia que le ordena pasar una pensión alimenticia, incumple con el mandato. Es un delito de peligro. La víctima no requiere probar haber sufrido algún daño con la conducta omisiva del agente. Siendo suficiente que se constate que el obligado viene omitiendo dolosamente su obligación de asistencia, establecida por resolución judicial, para perfeccionarse el ilícito (SALINAS SICCHA, 2010, pág. 425).

El bien jurídico que se pretende proteger, es el deber de asistencia, auxilio o socorro que tienen los componentes de una familia entre sí.

2.4.3.4. El Registro de Deudores Alimentarios Morosos

El Registro de los Deudores Alimentarios Morosos (en adelante REDAM), fue creado mediante Ley N° 28970, vigente desde el 13 de julio del 2007, el cual está a cargo del Órgano de Gobierno del Poder Judicial. El REDAM es un libro que registra la información judicial del deudor alimentario moroso y es de carácter y de acceso gratuito.

Como lo precisa la ley, en el REDAM son inscritas aquellas personas que adeudan más de tres cuotas, sucesivas o no, de sus obligaciones alimentarias establecidas en sentencias firmes, o en acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada. De la misma manera, se inscriben aquellas personas que no cumplen con pagar pensiones devengadas, si éstas no son canceladas en un periodo de tres meses desde que son exigibles.

a) Procedimiento

Como señala el artículo 4° de la Ley N° 28970, la inscripción será ordenada por el juez que conoce o conoció el proceso de alimentos, no sin antes correr traslado, al alimentante, de la solicitud de declaración de Deudor Alimentario Moroso. Resolviendo, en el plazo de 3 días con absolución o sin ella.

Contra la resolución que ordena la inscripción, procede recurso de apelación sin efecto suspensivo, el será resuelto dentro del plazo máximo de 5 días.

A efectos de proceder a la inscripción, el Juez deberá oficiar al Órgano de Gobierno del Poder Judicial en un plazo no mayor de tres días luego de resolver la cuestión.

b) Efectos del registro

- El primer efecto lo encontramos en el artículo 5° de la Ley N° 28970, cuando señala que el acceso a la información del REDAM es gratuito. Asimismo, precisa que tiene carácter público, lo que significa que cualquier ciudadano puede acceder a él. Lo que implica una sanción de tipo moral para el deudor alimentario.

- Inscripción en la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo de Pensional (SBS en adelante); para cuyo efecto el artículo 6° de la Ley precisa que el Órgano de Gobierno del Poder Judicial comunicará a la SBS mensualmente la lista de actualizada de los Deudores Alimentarios Morosos, para que se registre la deuda alimentaria en la Central de Riesgos. De la misma manera prevé que esta información puede ser remitida a las Centrales de Riesgo Privadas.

- Otro efecto radica en la comunicación que deberá efectuar el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo al Órgano de Gobierno del Poder Judicial de los contratos de trabajo suscrito entre particulares, a efectos de identificar a los Deudores Alimentarios Morosos y comunicar a los juzgados correspondientes para que actúen conforme a sus atribuciones. Lo que puede dar lugar a las medidas cautelares como los embargos de sus remuneraciones, conforme a la normatividad vigente.

- Finalmente, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, deberá enviar una lista de las transferencias de bienes a favor de personas naturales, lo que, al igual que el caso anterior, de verificar que un deudor alimentario moroso cuenta con bienes, estos pueden ser susceptibles de embargos otro tipo de medidas que permitan cubrir las pensiones alimenticias.

2.4.4 El proceso de reducción de alimentos y su incidencia en el delito de omisión a la asistencia familiar

Se ha dicho que la reducción de alimentos es un derecho que le permite al obligado al pago de la pensión alimenticia, solicitar la reducción de la pensión cuando su capacidad económica experimente una disminución que implica la imposibilidad de cumplir con el pago de la pensión.

Lo cierto es que, por desconocimiento o mala defensa de los deudores alimentarios, éstos no solicitan la reducción de la pensión alimenticia cuando corresponde, es decir, en el momento en que el obligado sufre la disminución de su capacidad económica, y como consecuencia de ello, no cumple mes a mes, con el pago oportuno de la pensión alimenticia, cayendo así en el incumplimiento de su obligación.

Lo anterior, da lugar a la acumulación de las pensiones alimenticias, surgiendo así – en la mayoría de casos- liquidaciones reiteradas de pensiones devengadas que terminan por convertirse en impagables, de manera que, al haber disminuido la capacidad económica del obligado, no será factible que dichas liquidaciones puedan ser canceladas en el tiempo oportuno.

De otro lado, también está presente la barrera legal, impuesta por el legislador en el artículo 565°-A del Código Procesal Civil, que impone como requisito de admisibilidad de la demanda de reducción de alimentos, que el obligado esté al día con el pago de la pensión alimentaria. Es decir, como lo señalamos antes, si el deudor alimentario no cuenta con la capacidad económica para pagar mensualmente la pensión alimentaria, cómo es que se le exige que esté al día para admitir a trámite su demanda. En otras palabras, si tiene una liquidación de pensiones alimenticias devengadas, primero tendría que pagar esta liquidación para recién hacer uso de su derecho a la tutela jurisdiccional. Lo que, a su vez, resultaría contradictorio, pues si tuviese los medios para cumplir con su obligación no recurriría a un proceso de reducción de alimentos.

De esta manera, conforme al art. 566°-A del Código Procesal Civil, el juez requiere el pago de las pensiones devengadas, bajo apercibimiento de remitir copia certificada al Fiscal Provincial Penal de Turno para que proceda conforme a sus atribuciones, esto es, la respectiva denuncia por el delito de Omisión a la Asistencia familiar.

Así explicado, es como existe una estrecha relación entre los procesos de reducción de alimentos y el delito de omisión a la asistencia familiar, ya que, ante el incumplimiento del requerimiento de pago, el deudor alimentario termina siendo denunciado penalmente.

2.4.5 El principio del interés superior del niño

2.4.5.1. Concepto

La declaración de los Derechos del Niño de 1959, así como la Convención sobre los derechos del Niño de 1989, significaron un hito importante en lo que a derechos del niño se refiere, pues estas normas internacionales establecieron un concepto primordial relacionado con el principio del Interés Superior del Niño.

El Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, establece: *“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por los medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.”* Principio que es reafirmado en el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño²³, convirtiéndose, en el principio rector de la Convención, según el cual todos los asuntos relacionados con los niños y niñas deben ser guiados y resueltos atendiendo al interés superior del niño; en otras palabras, los derechos del niño establecidos en la convención deben prevalecer sobre cualquier interés colectivo o de índole cultural. Por ello, podemos afirmar que el interés superior del niño implica la plena satisfacción de sus derechos.

²³ Convención sobre los Derechos del Niño, Artículo 3°: *“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño.”*

Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan con las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.”

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que *“La prevalencia del interés superior del niño debe ser atendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de los menores, que obligan al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad (...)”* (CASO DE LAS NIÑAS YEAN Y BOSICO VS REPÚBLICA DOMINICANA, 2005)

Para (SORIANO ORTEGA, 2015, pág. 41) el principio del interés superior de la niña y el niño es una herramienta interpretativa fundamental para ampliar la esfera de protección de los derechos de las niñas y los niños. En la medida en que su empleo sea coherente con los principios en los que descansa, permitirá el desarrollo progresivo de los derechos de las niñas y niños.

Ahora bien, en nuestra legislación, el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, respecto del interés superior del niño, prescribe: *“En toda medida concerniente al niño y adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del adolescente y el respeto de sus derechos.”*

Al igual que la Convención, el Código de los Niños y Adolescentes nos ofrece una definición del principio del interés superior del niño, pero ha sido la doctrina y la jurisprudencia quienes se han encargado de precisar el alcance de este importante principio. Así la Casación N° 1805-2000-LIMA²⁴ precisa que *“El interés superior es un principio que garantiza la satisfacción de los derechos del menor, como estándar jurídico implica que dicho interés deberá estar presente en el primer lugar de toda decisión que afecte al niño y al adolescente.”*

²⁴ Publica en el Diario Oficial El Peruano, el 30 de enero del 2001. Pág. 6810.

En función a lo expuesto, el Principio del Interés Superior del Niño es la satisfacción plena de los derechos de los niños, a fin de garantizar su desarrollo integral y una vida digna, por lo que debe servir como guía para la toma de decisiones, pero debe tenerse en cuenta que no es suficiente la sola enunciación de este principio, sino que debe ser el resultado de la valoración de todos los medios probatorios que se aporten al proceso, de los cuales decidirá lo mejor para el niño.

2.4.5.2. El interés superior del niño en el proceso de alimentos

Refiere (PLÁCIDO V., 2015, págs. 428-429) que al momento de sentenciar, el juzgador debe apreciar la concurrencia de los requisitos de la obligación alimentaria en armonía con el principio del interés superior del niño. De manera que, al amparo del interés superior del niño, el estado de necesidad de los niños y adolescentes se debe juzgar en función a sus necesidades y sexo del alimentista y de las condiciones de vida de la familia. Con respecto a la capacidad económica del obligado, el principio del interés superior del niño, obliga a atender no solo al niño o adolescente que requiere los alimentos sino también al del niño o adolescentes, hijos del obligado a dar alimentos. Es decir, que el juez al momento de graduar el monto de la pensión debe considerarlos a todos a fin de no afectar el interés de cada uno de ellos.

En referencia a la incorporación del artículo 565-A del Código Procesal Civil, manifiesta que la interpretación literal [del artículo 565-A] determina considerar la previsión de un requisito de admisibilidad; sin embargo, considerarlo así, constituiría un limitante al ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Por ello, resulta más razonable su comprensión como requisito de procedencia que posibilite al amparo de la demanda; por lo que, si durante el proceso se verifica que el peticionante adeuda pensiones alimenticias devengadas, carecería del derecho para que se le ampare la demanda, salvo, por supuesto, en

los casos de reducción o exoneración por evidenciar los cambios alegados en la capacidad económica. (PLÁCIDO V., 2015, pág. 432)

2.4.6 Tutela jurisdiccional efectiva

2.4.6.1. Definición

Como refiere (TICONA POSTIGO, 1999, págs. 14-15), el derecho de acción, o en términos generales, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tiene como punto de partida la proscripción de la autotutela o justicia por mano propia, aspecto que está expresa o implícitamente establecido como principio de orden público en toda sociedad civilizada. Asimismo, afirma que la sociedad existe en tanto cada integrante de la misma, ante un conflicto de intereses intersubjetivo, puede solicitar la intervención del organismo jurisdiccional, a fin de resolverlo; por consiguiente, es indudable que el estado, antes que conceder, debe reconocer a toda persona la posibilidad de defender sus derechos e intereses tutelados por el ordenamiento jurídico, concluyendo que acción y jurisdicción son conceptos correlativos, inexplicables el uno sin el otro.

La acción es el derecho de recurrir a los organismos jurisdiccionales, requiriendo tutela, ante un conflicto de intereses. Mientras que la jurisdicción es el poder-deber del Estado de intervenir en la solución de un conflicto de intereses; por eso se dice que la jurisdicción tiene como contrapartida el derecho a la tutela jurisdiccional (MONROY GÁLVEZ, 1996, pág. 245).

Ahora bien, el artículo 139° inciso 3 de la Constitución Política del Perú, consagra el derecho a la tutela jurisdiccional²⁵, derecho que también es recogido en el artículo I del Título Preliminar de Nuestro Código Procesal Civil, mismo que señala: *“Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.”*

De allí se afirma que, la tutela jurisdiccional es el poder que tiene toda persona, sea natural o jurídica, para exigir al Estado que haga efectiva su función jurisdiccional; es decir, permite a todo sujeto de derechos ser parte en un proceso y así causar la actividad jurisdiccional sobre las pretensiones planteadas.

Por su parte, el Tribunal Constitucional sostiene que: *“la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia”*.²⁶

Como señala Marianella Ledesma, la tutela jurisdiccional efectiva garantiza que bajo ningún supuesto se produzca denegación de justicia; agregando que esta, no resulta vulnerada por rechazar una demanda ante la no subsanación de ciertas omisiones; asimismo,

²⁵ Constitución Política del Perú de 1993, artículo 139° inciso 3: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (...) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional (...)”

²⁶ Sentencia de Tribunal Constitucional N° 763-2005-PA/TC.

no implica un derecho absoluto, ya que requiere del cumplimiento de determinados requisitos a través de las vías procesales establecidas por ley; sin embargo, éste derecho solo podría ser limitado en virtud de la concurrencia de otro derecho o libertad constitucionalmente protegido, que suponga incompatibilidad con el mismo. (LEDESMA NARVÁEZ, 2008, págs. 27-28)

(GONZALES PÉREZ, 1985, pág. 27), refiere que la tutela jurisdiccional efectiva *“es el derecho de toda persona a que se le haga justicia; a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas.”*

Señala (TICONA POSTIGO, 1999, págs. 38-49) que, en una definición de tutela jurisdiccional se debe necesariamente incluirse al debido proceso, por cuanto para que la tutela sea efectiva, el derecho fundamental debe ejercitarse dentro de un debido proceso. Por lo que el citado autor concluye que *“...el derecho a la tutela jurisdiccional despliega sus efectos en tres correspondientes derechos fundamentales: acceso a la jurisdicción, debido proceso y eficacia de la sentencia...”*

2.4.6.2. Características del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (TICONA POSTIGO, 1999, págs. 39-46)

El derecho a la tutela jurisdiccional, presenta las siguientes características:

a) Es un derecho fundamental

La tutela jurisdiccional es un derecho humano porque es inherente a la condición de persona que tiene todo ser humano. Además, este derecho es reconocido por la Constitución Política del Perú (Art. 139° inc. 3), como un derecho fundamental. Por

lo tanto, tiene como contenido básico el de obtener de los órganos judiciales una respuesta motivada a las pretensiones planteadas.

b) Es un derecho público

Porque el derecho a la tutela jurisdiccional se hace efectivo en contra o frente al Estado, a través del órgano jurisdiccional competente, quien debe administrar justicia cuando un asunto es sometido a su conocimiento.

c) Es un derecho subjetivo

Este derecho corresponde a todo sujeto de derecho, ya sea una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, persona capaz o incapaz, de derecho público o privado.

d) Es un derecho abstracto

El derecho a la tutela jurisdiccional es ejercitado por cualquier persona que se encuentre en estado de necesidad de tutela jurisdiccional, sin que sea necesario probar, previamente, ser el titular del derecho, bastando solamente invocar interés o legitimidad para obrar.

e) Es un derecho de configuración legal

Por cuanto el ejercicio de este derecho debe hacerse, conforme a los requisitos, formas y condiciones razonables que el legislador, mediante ley ordinaria las establezca expresa e inequívocamente.

f) Es un derecho de contenido material y no puramente nominal

Es decir, no es suficiente la formal y aparente lesión de este derecho humano, sino que necesariamente debe haberse producido verdadera y materialmente,

perjudicando gravemente el derecho de acción del actor, o el derecho de contradicción del demandado o, en su caso, el derecho al debido proceso de cualquiera de los litigantes.

2.4.6.3. La tutela jurisdiccional efectiva como derecho humano (TICONA POSTIGO, 1999, págs. 28-31)

Los derechos humanos han sido definidos como el conjunto de facultades e instituciones, que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente en los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional.

El derecho a la tutela jurisdiccional no solamente es un derecho procesal y un derecho constitucional, sino que es esencialmente un derecho humano, un derecho fundamental. Incluso, se considera a este derecho –el acceso a la justicia- como el más importante de los derechos humanos. Y como tal ha sido recogido por nuestra Constitución de 1993 (art. 139° inc. 3); así como también, por nuestro Código Procesal Civil (art. I del Título Preliminar).

Ahora bien, como todo derecho humano, el derecho a la tutela jurisdiccional, también tiene reconocimiento y protección internacional. Así, el artículo 10° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, precisa, *“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.”*

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no es ajeno al tema, por lo que en el artículo 14° inc. 1) expresa: *“Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil...”*

De la misma manera, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, establece en el artículo 8° inciso 1) que *“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente o imparcial, establecido con anterioridad por ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”*

2.4.6.4. Momentos de la tutela jurisdiccional efectiva

Como precisa (MONROY GÁLVEZ, 1996, págs. 245-249), el derecho a la tutela jurisdiccional tiene dos planos de existencia: antes y durante el proceso.

a) El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva antes del proceso

Consiste en aquel derecho que tiene toda persona, en tanto es sujeto de derechos, de exigir al Estado provea a la sociedad, de los requisitos o presupuestos materiales y jurídicos indispensables para solventar un proceso judicial en condiciones satisfactorias. Resulta absolutamente irrelevante si esa estructura material y jurídica que debe sostener el Estado va a ser usada o no. Lo trascendente es, única y exclusivamente, que ese andamiaje destinado a solucionar conflictos aplicando el derecho que corresponde al caso concreto debe estar siempre en aptitud de conceder

a los ciudadanos la posibilidad de un tratamiento certero, eficaz y homogéneo a su exigencia de justicia. (MONROY GÁLVEZ, 1996).

Por su parte, Horaccio D. Rosatti, citado por (MONROY GÁLVEZ, 1996, pág. 246) precisa que *“El derecho a la jurisdicción antes del proceso es el derecho a exigir del Estado – monopolizador del servicio de administración de justicia- el cumplimiento de los presupuestos jurídicos y fácticos necesarios para satisfacer el cometido jurisdiccional ante la eventualidad de una litis concreta.”*

Lo hasta aquí expuesto, permite concluir que el Estado está en la obligación de dotar a la sociedad, con anticipación, de normas procesales que permitan afrontar un proceso judicial en condiciones satisfactorias, ante un eventual conflicto de intereses que se pueda suscitar entre sus miembros.

b) El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva durante el proceso

Este momento de la tutela jurisdiccional, señala (MONROY GÁLVEZ, 1996, pág. 247), contiene el haz de derechos esenciales que el Estado debe proveer a todo justiciable que participe en un proceso judicial.

Por su parte, (TICONA POSTIGO, 1999, pág. 31), refiere que este segundo caso consiste en el derecho que tiene toda persona de acceder a un proceso, aun juicio previo, con garantías mínimas que aseguren un juzgamiento imparcial y justo.

En buena cuenta Monroy Gálvez, precisa que este derecho se desdobra en: derecho al proceso y derecho en el proceso. El primero se refiere al derecho a juicio previo, es decir, el derecho a no ser condenado sin juicio previo. Mientras que el

segundo, es el denominado debido proceso, en otras palabras, el derecho a que el Estado provea a toda persona, involucrada en un proceso, de garantías mínimas que le aseguren un juzgamiento imparcial y justo.

2.4.6.5. Manifestaciones del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva

El derecho a la tutela jurisdiccional comprende los derechos de acción y de contradicción, siendo que para que este derecho se haga efectivo debe realizarse a través de un debido proceso.

a) El derecho de acción

En los orígenes de la civilización, y ante la necesidad de conservar la especie, los hombres de esta prematura sociedad, aprendió a solucionar sus conflictos sin destruirse y esto gracias a la intervención de un tercero. Este acto de recurrir a un tercero dio origen a lo que hoy denominamos derecho de acción.

Chiovenda, (1948), define la acción como *“el poder jurídico de dar vida a la condición para la actuación de la voluntad de la ley. La acción es un poder que corresponde frente al adversario, respecto al cual se produce el efecto jurídico de la actuación de la ley. El adversario no está obligado a ninguna cosa frente a este poder; está, simplemente, sujeto a él. La acción se agota con su ejercicio, sin que el adversario pueda hacer nada para impedirla, ni para satisfacerla. Tiene naturaleza privada o pública, según que la voluntad de la ley cuya actuación produce tenga naturaleza privada o pública.”* (MONROY GÁLVEZ, 1996, pág. 260)

Para COUTURE (1985), el derecho de acción es *“(…) el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión. Este poder jurídico compete al individuo en cuanto tal,*

como un atributo de su personalidad. Pero al mismo tiempo, en la efectividad de ese ejercicio está interesada la comunidad, lo que le asigna carácter público. Mediante la acción se cumple la jurisdicción, vale decir, se realiza efectivamente el derecho, ya que, por tradicional principio que rige en materia civil, la jurisdicción no actúa sin la iniciativa individual: nemo iudex sine actore. (...)” (MONROY GÁLVEZ, 1996, pág. 266)

Por su parte, (MONROY GÁLVEZ, 1996, pág. 271) nos dice: “...el derecho de acción es aquel derecho de naturaleza constitucional, inherente a todo sujeto – en cuanto es expresión esencial de este- que lo faculta a exigir del Estado tutela jurisdiccional para un caso concreto.” Asimismo, el citado autor, afirma que este derecho presenta las siguientes características: es público, por cuanto el sujeto pasivo contra quien se dirige el derecho de acción es el Estado; es subjetivo, porque se encuentra permanentemente presente en todo sujeto de derecho por la sola razón de serlo, siendo irrelevante si está en condiciones de hacerlo efectivo; es abstracto, porque no requiere de un derecho sustancial o material que lo impulse, es decir, no tiene contenido, es solo un impulso de exigir tutela jurisdiccional al Estado; y es autónomo porque tiene requisitos, presupuestos, teorías explicativas sobre su naturaleza jurídica, normas reguladoras de su ejercicio, etc.

b) El derecho de contradicción

El derecho de contradicción es otra forma a través de la cual se materializa el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Es un derecho constitucional, subjetivo, público, abstracto y autónomo.

Este derecho, si bien presenta las mismas características que el derecho de acción, difiere del mismo por carecer -el derecho de contradicción-, de libertad en su

ejercicio, es decir, que no puede ser ejercido a la voluntad de su titular, sino que únicamente es posible ejercitarlo cuando ya se ha iniciado un proceso.

Ahora bien, la importancia del derecho de contradicción se encuentra en la necesidad de que el demandado sea válidamente notificado, en otras palabras, que se le comunique el inicio de un proceso en su contra y las incidencias que ocurren dentro del mismo. Igualmente es importante el derecho de contradicción, porque permite que el emplazado tenga derecho de presentar alegatos y medios probatorios que sustenten su posición.

Como consecuencia del ejercicio del derecho de acción, surge el derecho de defensa, el cual garantiza que todos los sujetos del proceso puedan ser oídos, tengan derecho a probar, a hacer uso de los medios impugnatorios que les faculta la ley. Lo que justifica la naturaleza constitucional del derecho de acción.

Finalmente cabe anotar que este derecho, al igual que el derecho de acción, ha sido regulado por el artículo 3° del Código Procesal Civil, que señala: *“Los derechos de acción y contradicción en material procesal no admiten limitación ni restricción para su ejercicio, sin perjuicio de los requisitos procesales previstos en este Código.”*

2.4.6.6. Contenido del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva

Para un sector de la doctrina, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva comprende: a) El derecho de acceso a la justicia; b) El derecho a una sentencia de fondo; c) El derecho a la ejecución; y, d) El derecho a un proceso con todas las garantías mínimas.

A decir de Chamorro Bernal, (1994), el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva comprende un cuádruple contenido: a) el derecho de libre acceso a la jurisdicción y al proceso en las instancias reconocidas; b) el derecho de defensa o la prohibición

constitucional de indefensión; c) el derecho de obtener una resolución fundada en derecho que ponga fin al proceso; d) el derecho constitucional a la efectividad de la tutela judicial. Citado por (TICONA POSTIGO, 1999, pág. 49)

El Tribunal Constitucional peruano ha señalado que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no sólo implica el derecho de acceso a la justicia y el derecho al debido proceso, sino también el derecho a la “efectividad” de las resoluciones judiciales; busca garantizar que lo decidido por la autoridad jurisdiccional tenga un alcance práctico y se cumpla, de manera que no se convierta en una simple declaración de intenciones²⁷.

Por otro lado, el tercer párrafo del artículo 4° de nuestro Código Procesal Constitucional, refiere *“Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal.”* De lo anterior, podemos concluir que el contenido de la tutela jurisdiccional efectiva comprende: el derecho al acceso a los órganos jurisdiccionales; el derecho a una resolución fundada en derecho; y, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales.

²⁷ Ver Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 6 de diciembre de 2002, recaída en el Expediente N°. 1042-2002-AA/TC, Fundamento 2.3.1, Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 10 de octubre de 2003, Separata “Jurisprudencia”. Pág. 5884.

a) El derecho de acceso a la jurisdicción

Señala (RIOJA BERMUDEZ, 2013), el derecho de acceso a la justicia se configura como aquel poder que consiste en promover la actividad jurisdiccional del Estado, sin que se le obstruya, impida o disuada irrazonablemente; éste componente se concreta en el derecho a ser parte en un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que converja en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas al interior de un proceso.²⁸

b) El derecho a obtener una resolución fundada en derecho

Lo que implica obtener no solo una sentencia que ponga fin a la controversia, sino que, el juez, se encuentra obliga a motivar cada una de sus decisiones; es decir, expresar el proceso mental que lo ha llevado a fallar en determinado sentido.

c) El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales

Este derecho exige que después de haber obtenido una sentencia fundada en derecho a través de un proceso con todas las garantías mínimas, ésta se cumpla, aun cuando exista negativa por parte del obligado. Dicho de otro modo, busca que lo decidido por el órgano jurisdiccional se haga efectivo y no se quede en una mera declaración de intenciones.

²⁸ RIOJA BERMUDEZ, Alexander (2013). “*El Debido Proceso y la Tutela Jurisdiccional Efectiva*”. Disponible en <http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/05/25/el-debido-proceso-y-la-tutela-jurisdiccional-efectiva/>

2.4.7 Análisis de la Ley N° 29486

2.4.7.1. Antecedentes

Mediante Proyecto de Ley N° 1750/2007-CR, presentado el 18 de octubre del 2007, de autoría de la Congresista Luisa María Cuculiza Torre, propone incorporar el “artículo 565°-A requisito Especial de la Demanda”, en el Código Procesal Civil, con el fin de establecer como requisito para demandar la reducción, variación, prorratio, exoneración o extinción de las pensiones alimentarias, que el demandado se encuentre al día en el pago de sus obligaciones alimentarias.

Señala, el citado proyecto, que la propuesta tiene por finalidad reforzar los mecanismos procesales a efectos de garantizar la ejecución de sentencias de alimentos.

Con fecha 28 de marzo del 2008, este proyecto de ley fue dictaminado favorablemente por la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social, en su calidad de Segunda Comisión Dictaminadora, por lo que recomienda su aprobación al considerar que la propuesta resulta beneficiosa para la optimización del cumplimiento del pago de alimentos y por ende el Juez está en mayores posibilidades de asegurar el resultado de un conflicto de intereses, así mismo señala que se beneficiará a la estructura procesal por cuanto disminuirá la carga procesal.

2.4.7.2. Finalidad de la Ley N° 29486

Con fecha 23 de noviembre del año 2009, se promulgó la Ley N° 29486, Ley que establece como requisito para demandar la Reducción, Variación, Prorratio o exoneración de Pensiones Alimentarias, cuyo artículo Único incorporó el artículo 565°-A al Código Procesal Civil en los siguientes términos:

“Artículo 565°-A.- Requisito especial de la demanda

Es requisito para la admisión de la demanda de reducción, variación, prorrateo o exoneración de pensión alimentaria que el demandante obligado a la prestación de alimentos acredite encontrarse al día en el pago de la pensión alimentaria.”

Dentro de este contexto, el artículo incorporado tendría como finalidad garantizar la ejecución de las sentencias de alimentos, atendiendo el carácter impostergable del derecho alimentario, conforme lo señala la exposición de motivos del proyecto de ley.

Sin embargo, hay que precisar que, pese a la finalidad que buscaba la ley, lo que se estableció como un requisito especial demanda, no es más que un requisito de admisibilidad de la demanda, en donde se valoran aspectos formales de la demanda, por lo que el mismo constituye un límite al ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

Por otro lado, no podemos olvidar que existen otros mecanismos dirigidos a garantizar la ejecución de las sentencias de alimentos como: a) Prohibición del demandado de ausentarse de del país; b) Embargo de las remuneraciones del demandado; c) El Proceso de Omisión a la Asistencia Familiar; d) El Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme lo hemos desarrollado en el capítulo concerniente a Alimentos.

Lo cierto es que la Ley N° 29486, antes que constituirse en un mecanismo de ejecución de las sentencias de alimentos, flagrantemente, trastoca un derecho fundamental como el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

2.4.7.3. Opinión del Ministerio Público

Respecto del Proyecto de la Ley N° 29486, el Ministerio Público es de la opinión que, si bien la propuesta resulta comprensible por las razones expuestas en la exposición de motivos del proyecto de ley; sin embargo, refiere que el mismo debe ser materia de mayor análisis ya que se limitaría el derecho de acción, el cual en materia civil no admite limitación ni restricción para su ejercicio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° del Código Procesal Civil.

2.4.7.4. Otras opiniones

a) (CELIS VÁSQUEZ, 2011) en su artículo web denominado: “Requisito especial en demanda del obligado a prestación de alimentos. La inconstitucionalidad de la Ley N° 29486”²⁹, refiere que a través de la tutela judicial efectiva toda persona puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. Siendo que el juez está en la obligación de acoger la pretensión y brindarle una sensata y razonada ponderación en torno a su procedencia o legitimidad, sin que ello signifique que su resultado favorable esté asegurado, sino que el órgano encargado de la administración de justicia efectúe un análisis de la demanda con miras a la expedición de un pronunciamiento cualquiera sea su resultado. Además, puntualiza que, para la admisión de la demanda, el juez solo puede verificar la satisfacción de los requisitos formales de admisibilidad y procedencia señalados en la ley procesal, los cuales están relacionados con la validez de la relación procesal, esto es, con los presupuestos procesales y las condiciones de la acción.

²⁹CELIS Vásquez, Marco Antonio (2013): “*Requisito especial en demanda del obligado a prestación de alimentos. La Inconstitucionalidad de la Ley N° 29486*”. Disponible en: <https://agendamagna.wordpress.com/2013/05/20/requisito-especial-en-demanda-del-obligado-a-prestacion-de-alimentos/>

Respecto de la aplicación de la ley hace un deslinde respecto de la pretensión de exoneración de alimentos, por cuanto la finalidad que persigue es exonerar del derecho de alimentos al deudor alimentario por el hecho de que el alimentista adquirió la mayoría de edad, o ya no existe el estado de necesidad, es decir, allí no se objeta el monto de la pensión (como sucede en los casos de prorratio, reducción y variación), sino que se exige un derecho contemplado en la norma, por lo que para acceder a tal derecho el padre debe cumplir con la obligación de haber acudido puntualmente las pensiones alimenticias a las que estuvo obligado.

Es por ello que concluye que la Ley 29486 resulta manifiestamente inconstitucional, únicamente en el extremo que exige como requisito de procedibilidad al deudor alimentario, en las acciones de reducción, variación y prorratio de alimentos, estar al día en la pensión alimenticia a la que tuvo obligado, resultando constitucional la exigencia de dicho requisito en las acciones de exoneración de alimentos.

b) Por su parte, (AGUILAR LLANOS, 2010), señala que la pertinencia y utilidad de la norma contenida en la Ley N° 29486 se hace evidente, pues si el demandado ha venido incumpliendo el pago de la pensión ¿cómo podría solicitar la reducción de la pensión? Por este motivo, la exigencia del fiel cumplimiento del pago de la pensión alimenticia sí juega un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción de reducción.

2.4.7.5. Acuerdos plenarios respecto a la aplicación del artículo 565-A del Código Procesal civil en el proceso de reducción de alimentos

Después de la promulgación de la Ley N° 29486, que incorpora el artículo 565°-A al Código Procesal Civil, el cual establece como requisito especial estar al día en el pago de la pensión de alimentos para admitir a trámite la demanda de reducción de alimentos, se generaron diferentes posiciones sobre la aplicación o no de este artículo. En virtud a ello, algunos distritos judiciales han efectuado reuniones plenarias a fin de arribar a un consenso sobre el tema. Es así que a continuación se mencionan algunos de ellos y los acuerdos adoptados.

a) Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia de Lima

En la ciudad de Lima, el 02 de setiembre del 2011 se realizó el Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia. Siendo el Tema N° 01: “En los procesos sobre Exoneración o reducción de Alimentos: ¿Puede admitirse una demanda sobre exoneración o reducción de alimentos no obstante lo dispuesto por el artículo 565° - A del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 29486, cuando el obligado alimentario se ha visto imposibilitado de cumplir el pago de las pensiones alimenticia?”

En el caso, existieron dos ponencias. La primera, señalaba que sí procede, amparándose en el derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva. Mientras que la segunda ponencia, manifestaba que no procede conforme a lo dispuesto en la Ley N° 29486. Efectuada las votaciones, el Pleno por MAYORÍA adoptó la primera ponencia que señalaba: “El requisito previsto en el artículo 565°-A del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 29486, debe ser entendido como un requisito de admisibilidad, sobre cuyo cumplimiento el demandante deberá pronunciarse en los actos postulatorios. Sin embargo, en atención al derecho a la

Tutela Jurisdiccional efectiva a que se refiere el numeral 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil y teniéndose presente que los casos de familia deben ser analizados como problemas humanos, el Juez podrá admitir la demanda a fin de debatir la existencia de fundamentos razonables en lo expuesto, resolviendo lo pertinente en sentencia.”

b) Pleno Jurisdiccional Distrital de los Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Lima

El Pleno Jurisdiccional Distrital de los Juzgados de Paz Letrado de Lima, llevado a cabo el día 27 de diciembre del 2011, entre otros temas, decidió respecto al Tema N°04: PROBLEMÁTICA EN TEMAS DE FAMILIA ANTE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO. Primer Subtema: Problemática en temas de familia ante los Juzgados de Paz Letrado. Implicancias Constitucionales de la Ley N° 29486. Para lo cual plantea la siguiente interrogante: ¿Es constitucional la exigencia del requisito de admisibilidad previsto en el artículo 565 A del Código Procesal Civil para iniciar un proceso de reducción, variación, prorrateo o exoneración de pensión alimenticia?

Respecto a la interrogante planteada, surgieron dos ponencias. La Primera: Es constitucional la exigencia del requisito de admisibilidad previsto en el artículo 565 A del CPC en la medida que constituye un desarrollo del segundo párrafo del artículo 6 de la Constitución que prevé que es deber de los padres alimentar a los hijos, principio que encuentra justificación en los principios de interés superior del niño, integridad y la dignidad de la persona humana.

La segunda ponencia refería: Es inconstitucional la exigencia del requisito de admisibilidad previsto en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, en la medida que constituye una restricción desproporcional al derecho -principio de tutela

jurisdiccional efectiva-, previsto en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución, en particular al derecho de acceso a la justicia, reconocido en los y tratados internacionales sobre protección de Derechos Humanos.

Surgido el debate y dadas las conclusiones arribadas por cada grupo de trabajo, el pleno decidió plantear una tercera posición, que es como sigue: “No es inconstitucional, se debe agregar a la norma, que en casos se haga imposible presentar el requisito de admisibilidad, de acreditar encontrarse al día en el pago de las pensiones, se permita al Juez de Paz Letrado admitir la demanda al amparo del principio de razonabilidad y proporcionalidad; y los derechos de acción y de tutela jurisdiccional efectiva que goza todo justiciable”.

Dentro de ese contexto, por MAYORÍA, el pleno adoptó la tercera posición.

c) Reunión Plenaria entre los Jueces de Paz Letrado y los Jueces de Familia de Ica

Por su parte, los Jueces de Paz Letrado y de Familia de Ica, con fecha 15 de junio del 2018, se reunieron a fin de llevar a cabo una reunión plenaria entre jueces de la especialidad de familia. Dentro de los tres temas materia de debate, el Tema N° 02, refiere: El requisito especial de admisión de las demandas de reducción, variación, prorratio o exoneración de alimentos, contemplado en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, del cual surgieron tres posiciones:

- **Posición a)** Sólo en algunas de las pretensiones previstas en el artículo 565-A del CPC, es aplicable el requisito especial de admisión de la demanda, en pro de la tutela jurisdiccional efectiva (las pretensiones específicas se precisarán en el conversatorio).

- **Posición b)** En todas las pretensiones previstas en el artículo 565-A del CPC, es aplicable el requisito especial de admisión de la demanda, al no evidenciarse vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva.
- **Posición c) posición eclética:** En los casos en donde se haga imposible para el demandado presentar el requisito de admisibilidad, de acreditar encontrarse al día en el pago de las pensiones, se permitirá al Juez de Paz Letrado, admitir la demanda al amparo del principio de razonabilidad y proporcionalidad, los derechos de acción y de tutela jurisdiccional efectiva, según cada caso en concreto.

Culminado el debate, quedó la posición c) como sigue: “En los casos de prorratio de alimentos, no será necesaria la aplicación estricta del artículo 565-A del CPC. En los casos de reducción de alimentos, cuando el alimentista sea menor de edad, el Juez deberá aplicar el artículo 565-A del CPC. Asimismo, en los demás casos, el Juez deberá analizar la exigencia contenida en el artículo 565-A del CPC, en cada situación en concreto, teniendo en cuenta ciertas variables, como la calidad de adulto mayor o situación de vulnerabilidad del obligado, la imposibilidad del obligado de acreditar estar al día en el pago o la existencia de duda razonable sobre ello; debiendo el Juzgador dejar dicho análisis para el momento de sentenciar, pronunciándose sobre el fondo del asunto, constituyendo tal situación de incumplimiento, un fundamento de fondo en contraste con otras situaciones alegadas y acreditadas dentro del proceso; todo ello, a la luz de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, pro-actione y la tutela jurisdiccional efectiva (acceso a la justicia).”

2.4.8 El proceso de reducción de alimentos en el derecho comparado

a) En la legislación argentina

El Código Civil y Comercial de la Nación³⁰ regula el modo como se satisface la obligación alimenticia, así en el artículo 119° se estipula que “El Juez debe fijar las sumas requeridas para la educación y alimentos del niño, niña o adolescente, ponderando la cuantía de sus bienes y la renta que producen, sin perjuicio de su adecuación conforme a las circunstancias. Si los recursos de la persona sujeta a la tutela no son suficientes para atender a su cuidado y educación, el tutor puede, con autorización judicial, demandar alimentos a los obligados a prestarlos.”

Más adelante el artículo 541° precisa el contenido de la obligación alimentaria, en tal sentido textualmente dice: *“La prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica, correspondientes a la condición del que la recibe, en la medida de sus necesidades y de las posibilidades económicas del alimentante. Si el alimentado es una persona menor de edad, comprende, además, lo necesario para la educación.”* Artículo que es concordante con el artículo 659° del mismo código, en la medida que este último también refiere que la obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Además, precisa que los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado.

³⁰ Aprobado por Ley N° 26.994, promulgada el 7 de octubre de 2014 y publicada en el Boletín Oficial el 8 de octubre del 2014. El Código entró en Vigencia el 01 de agosto del 2015.

En lo respecta a la reducción de alimentos, el dispositivo legal en comento hace referencia al procedimiento aplicable para tramitar el cese, el aumento o la reducción de la cuota fijada, esto en el último párrafo del artículo 554°, que a la letra dice: “(...) *La pretensión de cese, aumento o reducción de los alimentos tramita por el procedimiento más breve que prevea la ley local.*” Posición que es reiterada en el artículo 650³¹ del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

b) En la legislación colombiana

De conformidad con el artículo 133° del Código del Menor, “*Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y educación o instrucción del menor. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto.*”

En relación a la reducción de alimentos, se encuentra regulado en el Código de la Infancia y la Adolescencia en el octavo párrafo del artículo 129° cuando refiere que: “*Con todo, cuando haya variado la capacidad económica del alimentante o las necesidades del alimentario, las partes de común acuerdo podrán modificar la cuota alimentaria, y cualquiera de ellas podrá pedirle al juez su modificación. En este último caso el interesado deberá aportar con la demanda por lo menos una copia informal de la providencia, del acta de conciliación o del acuerdo privado en que haya sido señalada.*”

³¹ CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN de Argentina. Artículo 650°: “Trámite para la cesación o modificación de los alimentos. Toda petición de aumento, disminución, cesación o coparticipación en los alimentos, se sustanciará por las normas de los incidentes en el proceso en que fueron solicitados. Este trámite no interrumpirá la percepción de las cuotas ya fijadas. En el incidente de aumento de la cuota alimentaria, la nueva cantidad fijada rige desde la notificación del pedido.”

No obstante, antes de acudir a la vía judicial, es necesario acudir a la Comisaría de Familia o Bienestar Familiar o ante cualquier centro de conciliación y mediación solicitando una conciliación respecto a la disminución de la cuota de alimentos. En otras palabras, la conciliación constituye un requisito de procedibilidad para acudir a la instancia judicial de conformidad con la Ley N° 640 del 2001³².

Hay que destacar que, a parte del requisito de procedibilidad antes citado, al demandante solo se le exige que acredite que la disminución de su capacidad económica en comparación con la que tenía al momento en que se fijó la cuota alimentaria, no existiendo algún otro requisito de procedibilidad al respecto.

c) En la legislación ecuatoriana

Respecto a los alimentos señala el artículo Innumerado 2 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia³³, precisa: *“Del Derecho de Alimentos.- El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye: 1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; 3. Educación; 4. Cuidado; 5. Vestuario adecuado; 6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 7. Transporte; 8. Cultura, recreación y*

³² Artículo 35. “Requisito de procedibilidad. En los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, contencioso administrativo, y de familia, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas áreas (...)”

³³ Ley s/n, publicada en el Suplemento de Registro Oficial 643, el 28 de julio del 2009, mediante Artículo Único dispuso el reemplazo del Título V del Libro Segundo: “Del Derecho a Alimentos” del Código de la Niñez y Adolescencia.

deportes; y, 9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva.”

Ahora bien, el artículo innumerado 42 del cuerpo legal antes citado, establece que si cualquiera de las partes demostrare que han variado las circunstancias y hechos que sirvieron de base para la resolución que fija la pensión alimenticia, el Juez, podrá revisar y modificar la resolución, previo el procedimiento establecido en este capítulo.

Conforme puede verse, no existe un requisito adicional para solicitar la reducción de pensión alimenticia, bastando solamente con acreditar la variación de las circunstancias y hechos en base a la cual se fijó la pensión alimenticia.

d) En la legislación española

El artículo 142° del Código Civil Español, refiere que: *“Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo.”*

Ahora bien, en lo que corresponde a la reducción de la pensión alimenticia, el artículo 147° la norma citada, indica: Los alimentos, en los casos a que se refiere el artículo anterior, se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos.

Por otro lado tenemos que, conforme al artículo 775° de la Ley de Enjuiciamiento Civil³⁴, mediante el procedimiento de modificación de medidas se puede solicitar la reducción del pago de la pensión de alimentos; para ello, a decir de (MONDÉJAR PEÑA, 2006, págs. 165-167), para que prospere la modificación de la pensión alimenticia es preciso que se inste a través del oportuno juicio de alimentos y concurren los siguientes requisitos: a) Que los hechos justificativos de la demanda se hayan producido con posterioridad al momento en que se fijó la pensión; b) que la alteración tenga un carácter sustancial y permanente; c) Que la alteración sustancial y permanente quede debidamente acreditada; d) Que las causas impositivas del pago de los alimentos no deriven de circunstancias exclusivamente dependientes de la voluntad del deudor de los mismos.

2.5. HIPÓTESIS

La exigencia del requisito de admisibilidad de encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia para admitir una demanda de reducción de alimentos, vulneraría el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del demandante obligado en los Juzgado de Paz Letrado de Piura durante el periodo de 2016 al 2017.

³⁴ Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 775°: “**Modificación de las medidas definitivas.** 1. El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o incapacitados y, en todo caso, los cónyuges, podrán solicitar del tribunal que acordó las medidas definitivas, la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que haya variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas. 2. Estas peticiones se tramitarán conforme a lo dispuesto en el artículo 770. No obstante, si la petición se hiciera por ambos cónyuges de común acuerdo o por uno con el consentimiento del otro y acompañando propuesta de convenio regulador, regirá el procedimiento establecido en el artículo 777. 3. Las partes podrán solicitar, en la demanda o en la contestación, la modificación provisional de las medidas definitivas concedidas en un pleito anterior. Esta petición se sustanciará con arreglo a lo previsto en el artículo 773.”

2.5.1. Variables

a) Variable Independiente

La exigencia del requisito de admisibilidad de encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia para admitir una demanda de reducción de alimentos.

b) Variable Dependiente

Vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del demandante obligado a la pensión alimenticia en los Juzgados de Paz Letrado de Piura durante el periodo del año 2016 al 2017.

2.5.2. Conceptualización de las variables

- **VI: El requisito de admisibilidad de encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia para admitir una demanda de reducción de alimentos.**

Los requisitos de admisibilidad están constituidos por aquellas exigencias legales de orden formal que condicionan la admisión de una demanda.

La demanda de reducción de alimentos es el escrito por el cual el actor o demandante ejercita su derecho de acción a fin de petitionar la disminución del monto de la pensión alimenticia al que se encuentra obligado. En tal sentido, mediante el proceso de reducción de alimentos se petitiona la disminución del monto la pensión alimenticia al que se encuentra obligado el demandante.

- **VD: Vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del demandante obligado en los Juzgados de Paz Letrado de Piura durante el periodo del año 2016 al 2017**

La Tutela Jurisdiccional efectiva es el derecho por el cual toda persona, como integrante de una sociedad, puede acceder a los órganos jurisdiccionales para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a que sea atendido a través de un proceso que le ofrezca las garantías mínimas para su efectiva realización.

Marianella Ledesma, señala que *“la tutela jurisdiccional efectiva garantiza que bajo ningún supuesto se produzca denegación de justicia; agregando que esta, no resulta vulnerada por rechazar una demanda ante la no subsanación de ciertas omisiones; asimismo no implica un derecho absoluto, ya que requiere del cumplimiento de determinados requisitos a través de las vías procesales establecidas por ley; sin embargo, éste derecho solo podría ser limitado en virtud de la concurrencia de otro derecho o libertad constitucionalmente protegido, que suponga incompatibilidad con el mismo.”* (LEDESMA NARVÁEZ, 2008, pág. 27)

El demandante viene a ser la persona que presenta una demanda contra otra persona en el Juzgado en reclamación de un derecho. (PODER JUDICIAL DEL PERÚ, s.f.)

2.5.3. Operacionalización de las variables

VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	FUENTES
VI: La exigencia del requisito de admisibilidad de encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia para admitir una demanda de reducción de alimentos	Es una exigencia legal que condiciona la admisión de la demanda de reducción de alimentos.	Requisito de admisibilidad que exige al demandante obligado encontrarse al día en el pago de pensión de alimentos para admitir su demanda de reducción de alimentos	<ul style="list-style-type: none"> - Requisito de admisibilidad. - Demanda de Reducción de alimentos 	<ul style="list-style-type: none"> - Estar al día en el pago de la pensión alimenticia. - Disminución de las necesidades del alimentista - Disminución de las posibilidades económicas del obligado. 	<p>Norma: art. 565-A del CPC.</p> <p>Doctrina</p> <p>Derecho comparado</p> <p>Norma: art. 482° del CC.</p> <p>Doctrina</p> <p>Derecho comparado</p>

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

3.1. ENFOQUE Y DISEÑO

3.1.1. Enfoque

- Cualitativo: por cuanto la presente investigación está orientada al conocimiento y comprensión del tema planteado, de manera que permita explicar la manera en que el requisito de admisibilidad establecido en el artículo 565-A del Código Procesal Civil vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del demandado en los procesos de reducción de alimentos.

3.1.2. Diseño

- Teórica fundamentada: en la medida que se buscó generar una teoría que explique cómo se vulneraría el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del demandante obligado en los procesos de reducción de alimentos, al exigir estar al día para admitir su demanda, tomando como referencia la jurisprudencia existente, así como opinión de algunos autores, ello con la finalidad de dar una solución de manera que no se vulneren derechos constitucionales.
- Es descriptivo- documental por cuanto está basado en la búsqueda, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, en decir, aquellos que son obtenidos y registrados por otros investigadores en diferentes fuentes, ya sean impresas, audiovisuales o electrónicas.

3.2. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN

El universo de nuestra investigación lo constituye el Distrito Judicial de Piura, siendo nuestra población los procesos de reducción de alimentos en los Juzgados de Paz Letrado de Piura de especialidad familia civil (Primero, Tercero y Séptimo Juzgado de Paz Letrado) en los años 2016 a 2017, y la muestra lo constituye 50 procesos de reducción de alimentos elegidos al azar.

3.3. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

- a) **Método Analítico:** Porque a partir del estudio y análisis de la doctrina, legislación y jurisprudencia, y después de descomponer el tema bajo análisis nos ha permitido conocer la causa y efectos del mismo.
- b) **Método Sintético:** Una vez descompuesto el tema a través del método analítico, este método nos ayudó a reconstruir e integrar la información de interés a fin de afianzar las bases de nuestro tema de investigación, y así hacer un aporte a las ciencias jurídicas.
- c) **Método Inductivo-Deductivo:** Mediante el cual se estableció ciertas conclusiones partiendo del análisis del marco legal de las normas, con ello se determinó si el requisito de admisibilidad en las demandas de reducción de alimentos es razonable y si este vulnera o no el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
- d) **Método Hermenéutico jurídico:** Este método se empleó con la finalidad de llegar a una interpretación clara de la norma, para ello se estudió las normas del Código Civil, Código Procesal Civil y los principios que derivan de la misma, así como los derechos establecido en la Constitución Política del Perú. Asimismo, se empelará para analizar y comparar la normatividad nacional e internacional sobre las figuras jurídicas estudiadas.

La información se procesó de acuerdo a los logros obtenidos mediante las técnicas, fuentes e instrumentos empleados para la recolección de la información. De esta forma, los datos obtenidos se analizaron detalladamente con la finalidad de dar validez a la hipótesis planteada.

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

La técnica utilizada en el presente trabajo ha sido la de acopio documental, esta técnica se aplica sobre documentos de diversa índole, tales como: material bibliográfico, informes de investigación, literatura especializada, artículos de revistas, documentos electrónicos, etc. sobre el tema objeto de investigación; en otras palabras, se usa la técnica de recolección y análisis de datos, por medio de la cual se analiza la información doctrinaria y legislativa referente al tema tratado.

Fuentes directas: Constitución Política del Perú, Código Civil, Código Procesal Civil, Doctrina, artículos jurídicos, libros especializados, datos estadísticos, jurisprudencia.

3.5. ASPECTOS ÉTICOS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN



DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Yo: MARY CARLITA CUEVA AVENDAÑO, identificado con CU/DNI -Nº 47271282. En mi condición de Estudiante () Egresante () Egresado (X), de la FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

Título:

"AFECTACIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA, DEL DEMANDANTE OBLIGADO, EN EL PROCESO DE REDUCCIÓN DE ALIMENTOS"

DECLARO BAJO JURAMENTO: que el trabajo de investigación que presento a la Oficina Central de Investigación (OCIN), es original, no siendo copia parcial ni total de un trabajo de investigación desarrollado, y/o realizado en el Perú o en el Extranjero, en caso contrario de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el Art. N° 411, del código Penal concordante con el Art. 32° de la Ley N° 27444, y Ley del Procedimiento Administrativo General y las Normas Legales de Protección a los Derechos de Autor.

En fe de lo cual firmo la presente.



Huella Digital

Piura, 06 de Julio 2018


MARY CARLITA CUEVA AVENDAÑO
CU/DNI -Nº 47271282



UNP-VRI-OCIN-DJ-Nº-0922/2018

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. RESULTADOS

a) En la doctrina

Del desarrollo de la doctrina se ha determinado que existen posiciones a favor o en contra respecto a la aplicación del artículo 565°- A del Código Procesal Civil en los procesos de reducción de alimentos. Así, el Juez Marco Antonio Celis Vásquez³⁵, manifiesta que es impertinente exigir al demandante que cumpla con acreditar estar al día en el pago de la pensión alimenticia, para admitir su demanda de reducción, variación y prorratio de alimentos, pues ello implica vulnerar su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva por cuanto se rechaza su demanda alegando una causal de improcedencia impertinente. Indica, además, que en la admisión de la demanda se verifica el cumplimiento de requisitos de forma de admisibilidad y procedencia que están relacionados con los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Sin embargo, hace un deslinde respecto de la pretensión de exoneración de alimentos, en razón a que en esta pretensión no se objeta el monto de la pensión como sí ocurre en las pretensiones de prorratio, variación y exoneración de alimentos.

Por su parte el Dr. Alex Plácido señala que considerar, el requisito exigido en el artículo 565°-A del Código Procesal Civil, como uno de admisibilidad constituye una restricción al ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Por lo que considera este debe ser comprendido como un requisito de procedencia que posibilite al amparo de la demanda. Advirtiéndole que si durante el proceso se verifica que el demandante adeuda pasiones alimenticias no tendría derecho a que se le ampare su demanda. Sin embargo, hace

³⁵ Juez de la Corte Superior de Justicia de La Libertad desde el año 2002. Abogado egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Autor de varios artículos en materia de Derecho de Familia. Maestro en Derecho Civil y Comercial y egresado de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Trujillo con estudios concluidos de Doctorado en Derecho. Profesor de los cursos de Derecho de Familia, Sucesiones y Derecho Procesal III en la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo.

la salvedad en los casos de reducción y exoneración por evidenciar cambios en la capacidad económica del demandante.

Por otro lado, hay quienes opinan a favor de exigir el requisito de encontrarse al día para admitir la demanda de prorratio, reducción, variación y exoneración de la pensión alimenticia. En ese sentido se pronuncia Benjamín Aguilar Llanos³⁶, para quien es pertinente y útil exigir el cumplimiento del requisito exigido por el artículo 565°-A del Código Procesal Civil, toda vez que si el demandado no cumple con la pensión alimenticia no tendría derecho a demandar la reducción de la misma.

b) En la Jurisprudencia

De los plenos jurisdiccionales donde se ha debatido sobre la aplicación del artículo 565°-A del Código Procesal Civil, respecto a la exigencia del requisito especial de encontrarse al día para demandar reducción de alimentos, tenemos el Pleno Jurisdiccional de Familia de Lima (2011) donde por mayoría se acordó que el juez podrá admitir la demanda a fin de debatir la existencia de fundamentos razonable en los expuesto, resolviendo lo pertinente en la sentencia, esto en atención al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y teniendo en cuenta que los casos de familia deben ser analizados como problemas humanos. En igual sentido se concluyó en el Pleno Jurisdiccional Distrital de los Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Lima (2011), donde se acordó que ante la imposibilidad de presentar el requisito de admisibilidad de encontrarse al día en el pago de las pensiones, se permitía al Juez admitir la demanda amparándose en los principios de

³⁶ Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con estudios de Maestría en Derecho Civil en la misma universidad. Docente de derecho de Familia y Sucesiones en la Pontificia Universal Católica del Perú.

razonabilidad y proporcionalidad y en los derechos de acción y de tutela jurisdiccional efectiva del demandante.

Del mismo modo, en la reunión plenaria entre jueces de paz letrado y los jueces de familia de Ica (2018), en la cual se acordó que en los casos de reducción de alimentos se aplicaría el artículo 565-A del Código Procesal Civil cuando el alimentista sea menor de edad. Mientras que el caso de prorrateo de alimentos no será necesaria la aplicación estricta; y, en los demás casos es el juez quien debe analizar su aplicación o no en cada caso en concreto, teniendo en cuenta la calidad de adulto mayor, la situación de vulnerabilidad del obligado, la imposibilidad de acreditar estar al día en el pago o la existencia de duda razonable sobre ello, debiendo dejar dicho análisis para el momento de sentenciar, esto a la luz de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, pro actione y la tutela jurisdiccional efectiva.

c) En el Derecho comparado

A efectos de verificar si en el derecho comparado se regulaba el requisito de encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia para admitir la demanda de reducción de alimentos, se analizó la legislación de los países como Argentina, Colombia, Ecuador y España. De ello se determinó que, en ninguna de las legislaciones de los países citados se exige el requisito de encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia para admitir la demanda de reducción de alimentos. En el caso de Argentina no se requiere un requisito especial de admisibilidad, como el que nuestra legislación ha previsto. A su vez, en la legislación de Colombia, si bien la conciliación antes de acudir a la vía judicial es un requisito de procedibilidad, no se requiere de algún otro requisito de admisibilidad; por el contrario, cuando la capacidad económica del alimentante haya variado, este puede solicitar la reducción de la pensión alimenticia

Igualmente, la legislación ecuatoriana se ha establecido que el juez puede revisar y modificar la pensión alimenticia, si las partes demuestran que han variado las circunstancias y hechos que sirvieron para fijarla. Para lo cual no se ha previsto la exigencia de un requisito especial de admisibilidad. Por último, en el caso de legislación española, tampoco se ha regulado el requisito de encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia para admitir la demanda de reducción de alimentos; estableciendo, únicamente, que el demandante acredite la disminución de las necesidades del alimentista o de su fortuna, siendo que esta disminución deberá ser posterior al momento que se fijó la pensión alimenticia.

d) Procesos de reducción de alimentos

Finalmente, dada la naturaleza de la presente investigación se recurrió a la Corte Superior de Justicia de Piura a fin de obtener datos exactos sobre la aplicación del requisito establecido en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, en las demandas de reducción de alimentos ingresadas a los Juzgados de Paz Letrado de Piura de especialidad en Familia Civil (Primer, Tercer y Séptimo Juzgado de Paz Letrado), durante los años 2016-2017, de manera que nos permita demostrar la vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de demandante obligado.

A continuación se presentan los resultados obtenidos:

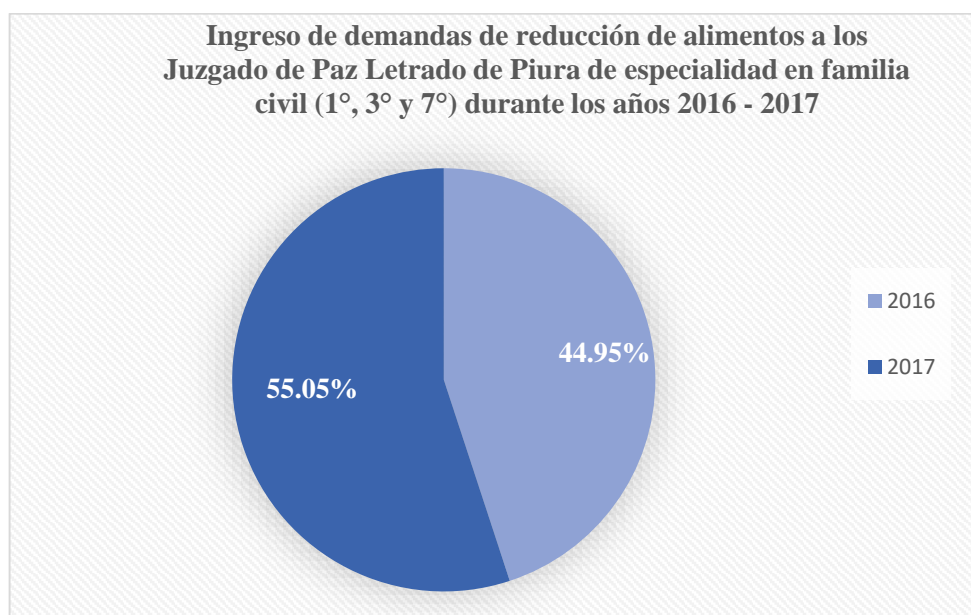
TABLA N° IV.1

Ingreso de demandas de reducción de alimentos a los Juzgado de Paz Letrado de Piura de especialidad en familia civil (1°, 3° y 7°) durante los años 2016 - 2017

AÑO	CANTIDAD	PORCENTAJE
2016	49	44.95%
2017	60	55.05%
TOTAL	109	100.00%

Fuente: Oficina de Estadística de la Corte superior de Justicia de Piura

GRÁFICO N° IV.1



Fuente: Oficina de Estadística de la Corte superior de Justicia de Piura

Después de efectuar las investigaciones correspondientes, se obtuvo los resultados presentados respecto a los procesos de reducción de alimentos tramitados antes los Juzgados de Paz Letrado de Piura (1°, 3° y 7°) en la especialidad de familia durante los años 2016 y 2017. De los datos obtenidos, se observa que durante el 2016 ingresaron 49 demandas de reducción de alimentos, mientras que en el año 2017 ingresaron 60 demandas. En total, durante los dos años, ingresaron 109 demandas de reducción de alimentos, conforme se verifica de la Tabla N° IV.1.

Ahora bien, a efectos de verificar la aplicación del artículo 565°-A del Código Procesal Civil en los procesos de reducción de alimentos ingresados durante los años 2016 a 2017, se eligió al azar 50 procesos de reducción de alimentos, los cuales constituyen nuestra muestra materia de estudio, la cual permitirá probar la hipótesis planteada en la presente investigación.

En ese sentido, se presentan los resultados siguientes:

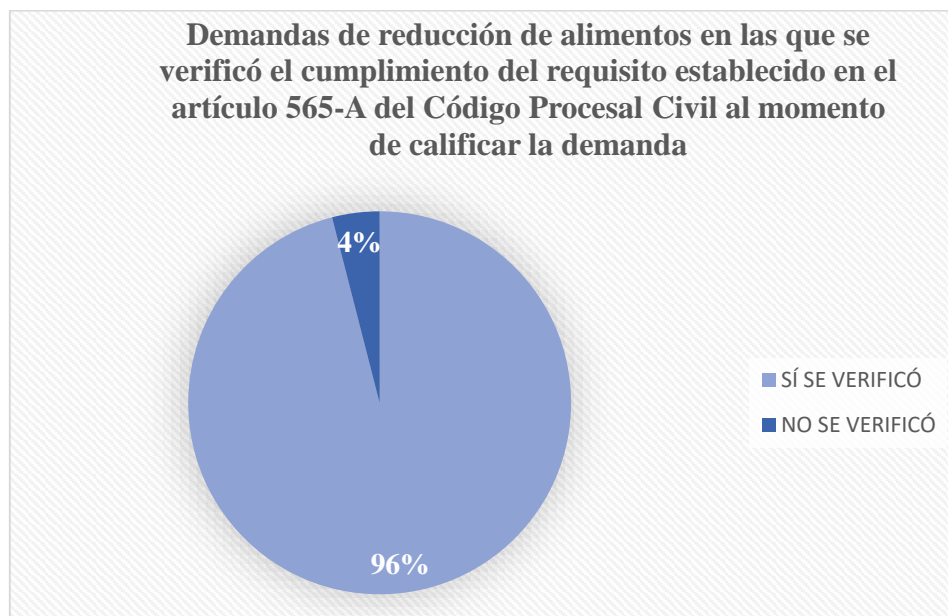
TABLA N° IV.2

Demandas de reducción de alimentos en las que se verificó el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 565-A del Código Procesal Civil al momento de calificar la demanda

	CANTIDAD	PORCENTAJE
SÍ SE VERIFICÓ	48	96%
NO SE VERIFICÓ	2	4%
TOTAL	50	100%

Fuente: Oficina de Estadística de la Corte superior de Justicia de Piura

GRÁFICO N° IV.2



Fuente: Oficina de Estadística de la Corte superior de Justicia de Piura

La Tabla N° IV.2 muestra que, del 100% de nuestra muestra materia de estudio, en el 96% de las demandas de reducción de alimentos ingresadas, se verificó el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 565°-A del Código Procesal Civil, esto es, de estar al día al momento de interponer la demanda, a efectos de calificar la demanda, siendo que ante el incumplimiento del mismo se declaró inadmisibile la demanda debiendo subsanar la omisión, bajo apercibimiento de rechazar la demanda y ordenar su archivo correspondiente. Mientras que en el 4% de las demandas no se verificó el cumplimiento de dicho requisito, esto amparándose en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y prorrogando su verificación para el momento del saneamiento procesal y/o cuando se emitía la sentencia correspondiente.

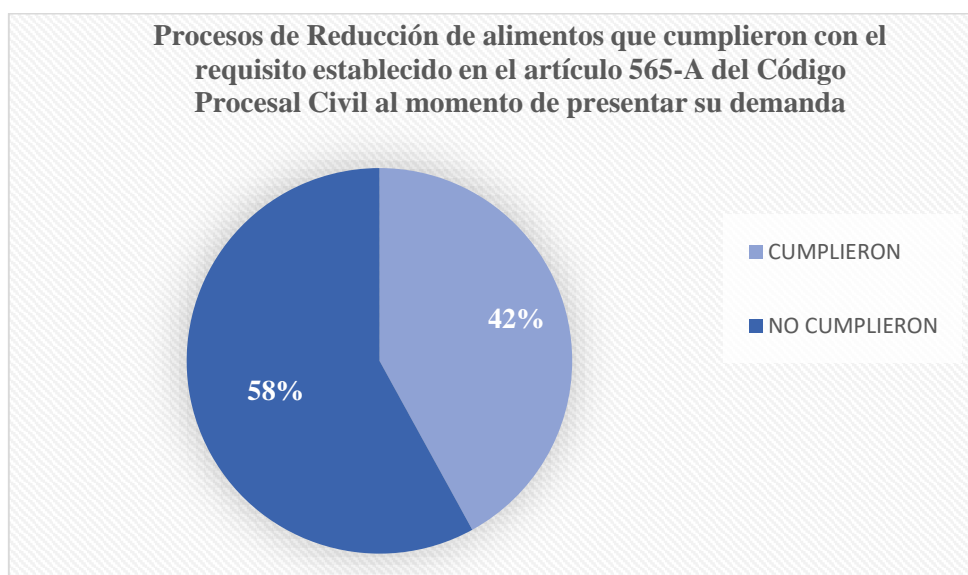
TABLA N° IV.3

Procesos de Reducción de alimentos que cumplieron con el requisito establecido en el artículo 565-A del Código Procesal Civil al momento de presentar su demanda

	CANTIDAD	PORCENTAJE
CUMPLIERON	21	42%
NO CUMPLIERON	29	58%
TOTAL	50	100%

Fuente: Oficina de Estadística de la Corte superior de Justicia de Piura

GRÁFICO N° IV.3



Fuente: Oficina de Estadística de la Corte superior de Justicia de Piura

La presente tabla muestra los procesos de reducción de alimentos que cumplieron con el requisito de acreditar estar al día en el pago de la pensión alimenticia al momento de presentar la demanda. Así, tenemos que el 42% de los procesos cumplió con dicho requisito, mientras que el 58% de los procesos no cumplieron con el requisito de acreditar estar al día en el pago de la pensión alimenticia al momento de presentar la demanda, siendo declarados inadmisibles a efectos de subsanar y por ende cumplir con dicho requisito y poder admitir la demanda de reducción de alimentos.

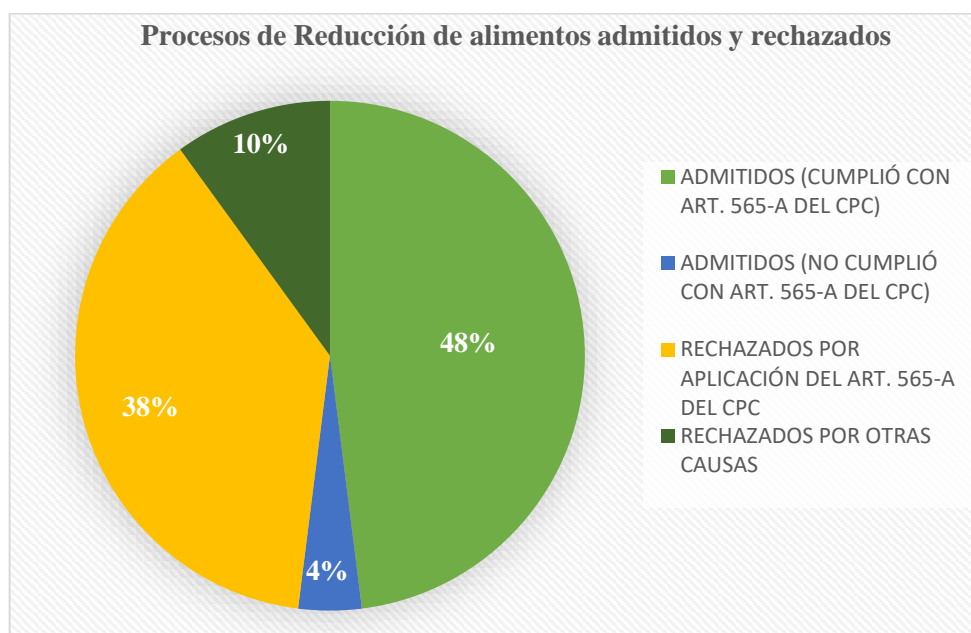
TABLA N° IV.4

Procesos de Reducción de alimentos admitidos y rechazados

Fuente: Oficina de Estadística de la Corte superior de Justicia de Piura

PROCESOS	CANTIDAD	PORCENTAJE
ADMITIDOS (CUMPLIÓ CON ART. 565-A DEL CPC)	24	48%
ADMITIDOS (NO CUMPLIÓ CON ART. 565-A DEL CPC)	2	4%
RECHAZADOS POR APLICACIÓN DEL ART. 565-A DEL CPC	19	38%
RECHAZADOS POR OTRAS CAUSAS	5	10%
TOTAL	50	100%

GRÁFICO N° IV.4



Fuente: Oficina de Estadística de la Corte superior de Justicia de Piura

En la Tabla N° IV.4 se muestra los procesos de reducción de alimentos admitidos a trámite y rechazados. Como resultado, se advierte que el 48% de demandas de reducción de alimentos fueron admitidas a trámite al haber cumplido con el requisito de estar al día en el pago de la pensión alimenticia, requisito establecido en el artículo 565-A del Código Procesal Civil. Sin embargo, también advertimos que el 4% de demandas fueron admitidas sin haber cumplido con el requisito de estar al día en el pago de la pensión alimenticia, para lo cual el A Quo se amparó en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, habiendo dejado la verificación del cumplimiento del citado requisito para el saneamiento procesal y/o al momento de emitir sentencia, en donde, previamente, se pronunciaría sobre el cumplimiento o no del requisito a fin de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

De otro lado, se observa que el 38% de los procesos de reducción de alimentos fueron rechazados porque, precisamente, el demandante obligado no logró acreditar estar al día en el pago de la pensión alimenticia al momento de presentar la demanda. Mientras que el 10% de los procesos rechazados o declarados improcedentes corresponden a otras causas, los cuales obedecen, básicamente, a requisitos de forma.

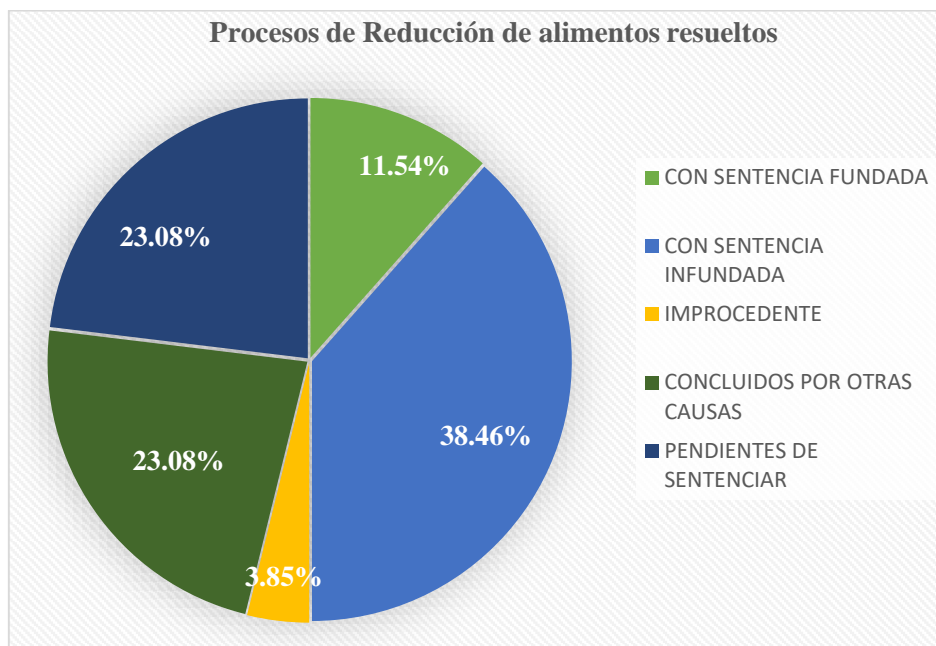
TABLA N° IV.5

Procesos de Reducción de alimentos resueltos

PROCESOS RESUELTOS	CANTIDAD	PORCENTAJE
CON SENTENCIA FUNDADA	3	11.54%
CON SENTENCIA INFUNDADA	10	38.46%
IMPROCEDENTE	1	3.85%
CONCLUIDOS POR OTRAS CAUSAS	6	23.08%
PENDIENTES DE SENTENCIAR	6	23.08%
TOTAL	26	100.00%

Fuente: Oficina de Estadística de la Corte superior de Justicia de Piura

GRÁFICO N° IV.5



Fuente: Oficina de Estadística de la Corte superior de Justicia de Piura

Finalmente, la Tabla N° IV.5 muestra la información sobre los procesos que fueron admitidos y resueltos. Cabe precisar que del 100% de los procesos de reducción de alimentos admitidos a trámite, sólo el porcentaje equivalente al 11.54% cuentan con sentencia fundada; mientras que el 38.46% fueron declarados infundados. A su vez, el 3.85% de los procesos estudiados fueron declarados improcedente, esto en razón a que, antes de emitir pronunciamiento sobre el fondo, el juez advirtió que el demandante no se encontraba al día en el pago de la pensión alimenticia cuando interpuso la demanda. De igual forma, 23.08% representa los procesos que fueron concluidos por otras causas. Y, por último, las demandas que se encuentran pendientes de sentenciar constituyen el 23.08%.

4.2. DISCUSIÓN

En el presente punto se interpretará y analizará los resultados obtenidos en nuestra investigación, de manera que nos permita probar la hipótesis planteada. Para ello, cabe precisar que nuestra investigación se planteó como hipótesis: La exigencia del requisito especial de admisibilidad de encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia para admitir una demanda de reducción de alimentos, estaría vulnerando el derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva del demandante obligado en los Juzgados de Paz Letrado de Piura durante los años 2016-2017.

Conforme se desarrolló en el punto 2.4.2. del capítulo II, el derecho a solicitar la reducción de alimentos se encuentra contemplado en el artículo 482° del Código Civil, según el cual, la reducción de la pensión alimenticia procede cuando disminuyen las necesidades del alimentista y la capacidad económica del obligado, en este último caso, ya sea porque se produjo el nacimiento de un nuevo hijo, porque la capacidad laboral del obligado disminuye o porque ocurrieron circunstancias ajenas a su voluntad que implican la disminución de su patrimonio. Lo cierto es que, ante la disminución de su capacidad económica, el obligado se encuentra imposibilitado de cumplir a cabalidad con el pago de la pensión alimenticia, pues ello implica poner en riesgo su subsistencia, tanto más si cuenta con carga familiar adicional. Es aquí donde nuestro ordenamiento legal le otorga el derecho a acudir al órgano jurisdiccional a fin de solicitar la reducción de la pensión alimenticia, de manera que se fije un nuevo monto acorde con su posibilidad económica actual.

Ahora bien, el artículo 565°-A del Código Procesal Civil, establece un requisito especial de admisibilidad para admitir a trámite la demanda de variación, reducción, prorrato o exoneración de la pensión alimentaria, esto es, que al momento de postular su demanda el demandante obligado debe acreditar encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia, precisando que para efectos de la presente investigación se analizó el supuesto de la demanda de reducción de alimentos, lo cual conforme a lo desarrollado en el presente trabajo, constituye una limitación al acceso al órgano jurisdiccional, afectando de esta manera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

Respecto a la tutela jurisdiccional efectiva, podemos concluir que es un derecho fundamental, un derecho humano, ya que es inherente a la condición de persona. Este derecho ha sido recogido en el artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Perú, así como también en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, y es definido como el derecho de toda persona de acceder al órgano jurisdiccional a fin de que el Estado intervenga en la solución de su conflicto de intereses, pero para que esta tutela sea efectiva, se debe permitir y acceder al ejercicio del derecho de acción y contradicción con sujeción a un debido proceso. Es por ello que Marianella Ledesma, refiere que la tutela jurisdiccional efectiva garantiza que bajo ningún supuesto se produzca la denegación de justicia.

Del análisis de esta institución se concluye la tutela jurisdiccional efectiva comprende: el derecho de libre acceso a la jurisdicción, es decir, el derecho de promover la actividad del Estado sin impedimento u obstrucción irrazonable; así como también, el derecho a obtener una resolución fundada en derecho, esto es, que el juez tiene la obligación de motivar la sentencia; y, finalmente el derecho a la efectividad de la sentencia, de manera que lo decidido por el órgano jurisdiccional no se convierta en meras declaraciones, sino que la decisión se haga efectiva.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que el requisito de admisibilidad establecido en el artículo 565°-A del Código Procesal Civil, atenta contra el derecho al libre acceso a la jurisdicción, toda vez que se está limitando este derecho bajo un supuesto impertinente, desproporcional e irrazonable. Puesto que, exigir al demandante obligado que acredite encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia, en los actos postulatorios y como requisito de admisibilidad, es impertinente. Primero, porque en la calificación de la demanda únicamente se analiza el cumplimiento de requisitos de admisibilidad y procedencia, los cuales están relacionado, estrictamente, con cuestiones de forma y capacidad procesal. Segundo, porque lo exigido por el artículo 565°-A del Código Procesal Civil, bajo la denominación de requisito especial, no es más que un requisito de fondo ya que un proceso de reducción de alimentos, precisamente, se fundamenta en el cambio de la capacidad económica del demandante obligado, hecho que corresponde pronunciarse

en sentencia, pues es en esta etapa donde el juez, a la luz de los medios probatorios presentados por las partes declara el derecho, no así en la etapa postulatoria, donde no se actúa medio probatorio alguno. Es más, es en el desarrollo del proceso donde corresponde actuar los medios probatorios pertinentes a fin de determinar la variación de la capacidad económica del demandante y que de alguna manera esta variación implicó el no estar al día en el pago de las pensiones alimenticias.

En tal sentido, rechazar liminarmente la demanda alegando el incumplimiento de un requisito que no constituye un requisito de forma, es irrazonable y restringe manifiestamente el derecho a la tutela jurisdiccional, en tanto se está limitando el derecho de libre acceso a la jurisdicción. De allí que el Dr. Alex Placido, así como los demás autores citados a lo largo de nuestra investigación, señalan que el requisito del artículo 565°-A del Código Procesal Civil, es un limitante al ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Del mismo modo han resuelto el Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia de Lima, el Pleno Jurisdiccional Distrital de los Juzgados de Paz Letrado de La Corte Superior de Lima y la Reunión Plenaria entre Jueces de Paz Letrado y los Jueces de Familia de Ica, los cuales, amparados en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, flexibilizaron la aplicación del artículo citado, de manera que se facultaba al juez admitir la demanda y sea en la sentencia donde correspondía que el juez se pronuncie sobre el fondo de la pretensión.

De otro lado, del análisis de la Ley N° 29486, que incorpora el artículo 565°-A al Código Procesal Civil, se tiene que, conforme a la exposición de motivos de la misma, esta ley tendría como finalidad asegurar la ejecución de las sentencias de alimentos. Sin embargo, de acuerdo a lo desarrollado en el 2.4.3 del capítulo II de la presente tesis, nuestra legislación regula otros mecanismos para garantizar el cumplimiento de las pensiones alimenticias, dentro de las cuales tenemos la prohibición del demandado de ausentarse del país, en tanto no garantice debidamente el cumplimiento de la asignación anticipada o pensión alimentaria; el embargo de las remuneraciones del obligado, para lo cual se ha establecido que el embargo procede hasta el sesenta por ciento del total de los ingresos del demandante; el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, en el cual se

inscribe a aquellos obligados que adeudan más de tres cuotas, sucesivas o no, de la pensión alimenticia fijada en sentencia. Cabe precisar que dicho registro es público, además, la deuda es inscrita en la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de fondo de Pensiones (SBS), asimismo, existe comunicación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, a fin de que este último remita información sobre los contratos suscritos entre particulares, a efectos de identificar los deudores alimentarios morosos y así se tomen las medidas correspondientes, como por ejemplo, proceder a embargar la remuneración de los deudores. Finalmente, otro mecanismo es el proceso de omisión a la asistencia familiar, el cual es de contenido penal, donde el obligado puede ser condenado hasta tres años de pena privativa de la libertad.

Dentro de este contexto, podemos afirmar que existen otros mecanismos que permiten garantizar el cumplimiento de la pensión alimenticia, en otras palabras, el requisito establecido en el artículo 565°-A del Código Procesal Civil no es el único; por lo tanto, la finalidad que aluden no reviste la urgencia que señalan y por ende tampoco justifica la limitación de un derecho constitucional como la tutela jurisdiccional efectiva, en la medida que se impide acceder a la jurisdicción bajo supuestos impertinentes. En consecuencia, al no poder acreditar estar al día en el pago de las pensiones alimenticias, se deja en desamparo a aquellos obligados que por diversas circunstancias, ajenas a su voluntad, ven disminuida su capacidad económica encontrándose imposibilitados de cumplir con la obligación alimentaria en el monto fijado, es decir, el obligado no tendría la oportunidad a que dentro de un proceso y luego de actuados y analizados todos los medios probatorios, se decida si es amparable o no su demanda de reducción de alimentos, pues cabe precisar, que el hecho de admitir una demanda no necesariamente implica que ésta se declare fundada. Estando a lo expuesto, antes que un verdadero mecanismo de ejecución de sentencias de alimentos, el requisito de admisibilidad de encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia para admitir a trámite la demanda de reducción de alimentos, se ha convertido en un mecanismo que restringe derechos fundamentales.

Por otra parte, el requisito de admisibilidad establecido en el artículo 565°-A del Código Procesal Civil respecto de los procesos de reducción de alimentos, necesariamente nos lleva a considerar el principio del interés superior del niño, el cual garantiza que, en aquellos casos en los que se encuentren involucrados niños o adolescentes, se procure la protección integral de sus derechos. Ahora bien, en los procesos de alimentos, como bien lo dice Alex Plácido, este principio no solo obliga a atender las necesidades del niño o adolescente que está pidiendo alimentos, sino que también se debe procurar la satisfacción de los derechos de los demás hijos del obligado.

Siendo así, la Ley N° 29486 que incorpora al Código Procesal Civil el requisito especial de admisibilidad, respecto a los procesos de reducción de alimentos, no ha tenido en cuenta este importante y fundamental principio, pues si bien, en teoría, pretende proteger al niño, en este caso solo se trataría del niño o adolescente a favor de quien se pide alimentos, dejando de lado los derechos de los demás alimentistas que no son parte del proceso pero que al igual que el peticionante le asisten los mismos derechos. En ese sentido, podemos afirmar que rechazar liminarmente una demanda de reducción de alimentos, por aplicación del artículo 565°-A del Código Procesal Civil, cuando el demandante obligado ha disminuido su capacidad económica y más aún si cuenta con más hijos menores a su cargo, no solo se vulnera su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de sino que además se transgrede el principio del Interés Superior del Niño, por cuanto no solo se tiene que velar por la satisfacción plena de los derechos del menor que solicita alimentos sino que, simultáneamente, se debe considerar los derechos de los demás hijos a cargo del obligado a efectos de no vulnerar el interés de cada uno de ellos.

En razón a ello, es impertinente exigir como un requisito de admisibilidad en los procesos de reducción alimentos, que el demandante obligado acredite estar al día en el pago de la pensión alimenticia, porque es en el desarrollo del proceso donde se puede acreditar la existencia de otros hijos menores a cargo cuyos derechos también requieren de protección.

De lo desarrollado en el punto 2.4.8 del Capítulo II respecto al proceso de reducción de alimentos en el derecho comparado, para lo cual se analizó las legislaciones de Argentina, Colombia, Ecuador y España, se logró determinar que, en el derecho comprado, no se ha previsto la exigencia de un requisito como el regulado por el artículo 565°-A del Código Procesal Civil peruano, es decir, no se exige el requisito de encontrarse al día para admitir una demanda de reducción de alimentos, esto ni como requisito de admisibilidad ni como requisito de fondo, pues solo se requiere que el demandante obligado acredite el cambio en su capacidad económica que le impide seguir cumpliendo con el monto o porcentaje de la pensión alimenticia fijada. Por lo que concluimos que lo regulado por el artículo 565°-A del Código Procesal Civil, no tiene antecedente alguno en la legislación comparada.

Por último, del estudio de los procesos de reducción de alimentos ingresados durante los años 2016 y 2017, a los Juzgados de Paz Letrado de Piura especializados en familia, hemos podido comprobar que en dichos órganos jurisdiccionales se aplica el artículo 565°-A del Código Procesal Civil, como un requisito de admisibilidad, pues, a excepción de dos procesos, en todos los demás se exigió que el demandante acredite encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia, tal como se corrobora en la Tabla IV.2; siendo que el 58% de los procesos estudiados, no cumplieron con este requisito al momento de presentar la demanda, por lo que se les declaró inadmisibile la demanda, requiriendo que subsanen dicho extremo, bajo apercibimiento de rechazar la demanda, apercibimiento que se hizo efectivo en el 38% de los procesos estudiados. Pese a que los demandantes alegaban que su capacidad económica había disminuido, tenían nuevos hijos, liquidaciones por pensiones alimenticias devengadas elevadas, algunos con procesos penales y sentenciados con pena efectiva, lo que hacía imposible estar al día en el pago de la pensión alimenticia para poder solicitar al reducción de alimentos, lo que a su vez significa que estas liquidaciones irían incrementándose hasta el punto de hacerse impagables, aun así se les rechazó su demanda, afectado su derecho a la Tutela jurisdiccional efectiva, impidiendo acceda a un proceso donde en base a las pruebas aportadas y dentro de un debido proceso se decida sobre su pretensión.

De la misma manera, del estudio de los procesos de reducción de alimentos, se ha obtenido que del total demandas admitidas (26 demandas)- a dos de las cuales no se exigió el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 565°-A del Código Procesal Civil- solo el 11.54%, es decir, 3 demandas, fueron declaradas fundadas, pues la mayoría, el 38.56% (10 demandas), fueron declaradas infundadas. Lo que pone de manifiesto que no todas las demandas admitidas necesariamente tienen que ser declaradas fundadas, en otras palabras, el hecho de admitir a trámite una demanda ello no significa que ya se le está reconociendo el derecho al demandante, sino que su admisión garantiza que, dentro de un proceso con garantías mínimas, el juez pueda emitir una decisión conforme a derecho, lo que implica que esta decisión puede conceder o denegar la pretensión de reducción de alimentos.

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Ahora bien, en virtud a los resultados obtenidos podemos afirmar que la hipótesis planteada en la presente investigación ha quedado demostrada, por lo tanto, reafirmamos que la exigencia del requisito de admisibilidad de encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia para admitir una demanda de reducción de alimentos, vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del demandante obligado, en tanto como requisito de admisibilidad, constituye una restricción impertinente y desproporcional del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

Del análisis teórico, jurisprudencial y práctico desarrollado en la presente investigación, se ha podido determinar que siendo el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva un derecho constitucional, no puede ser restringido de manera irrazonable y desproporcional. Por su parte, la pretensión de reducción de alimentos es un derecho que tiene el obligado cuando ha disminuido su capacidad económica esto por circunstancias ajenas a su voluntad. En ese sentido, la tutela jurisdiccional efectiva, entendida como libre acceso al órgano jurisdiccional, no puede ser restringida por la exigencia de un requisito “especial” de admisibilidad, en una etapa donde únicamente se verifican

los requisitos de forma de la demanda, más aún si este requisito tiene implicancia con el fondo de la pretensión, en consecuencia, corresponde ser valorado en el desarrollo del proceso

Por otra parte, la Ley N° 29486, que incorporó el artículo 565°-A del Código Procesal Civil, señala que finalidad de este requisito es la protección de los alimentistas, asegurando el cumplimiento de la pensión alimenticia; no obstante, lo cierto es que existen otros mecanismos de ejecución que cumplen con este fin, consecuentemente, el fin en el que se sustenta la norma es desmedido respecto del derecho a la tutela jurisdiccional, pues al existir otros mecanismos que garantizan el cumplimiento, no reviste la urgencia ni justifica la restricción de un derecho protegido por la Constitución.

Pese a ello, del análisis de los casos en el presente trabajo, en los Juzgados de Paz Letrado de Piura de la especialidad de familia, se viene aplicando, literalmente, el artículo 565-A del Código Procesal Civil, pues el 38% de las demandas ingresadas en el año 2016 y 2017, fueron rechazadas por no cumplir con acreditar estar al día en el pago de la pensión alimenticia, sin que los demandantes tengan la oportunidad de enfrentarse a un proceso donde puedan acreditar y probar la concurrencia de los supuestos que permiten reducir la pensión alimenticia. Cabe precisar que la imposibilidad de acreditar estar al día en el pago de la pensión alimenticia, generalmente, recae en aquellos obligados cuyos descuentos no se hacen por planilla, es decir, aquellos trabajadores independientes o con trabajos no formales, siendo ellos quienes se encuentran sujetos al cambio constante de trabajo y consecuentemente a la variación de la remuneración mensual que perciben. Y, la disminución de su capacidad económica, conlleva a dejar de cumplir en su totalidad, con la pensión alimenticia fijada, y que por desconocimiento o falta de asesoría no plantea la correspondiente reducción de alimentos, enfrentándose luego a liquidaciones que muchas veces se convierten en impagables y que al final desencadenan en procesos penales.

En este contexto, es imposible que los demandantes, tengan la oportunidad de reducir la pensión alimenticia, por el contrario, se está permitiendo que las liquidaciones se hagan cada vez inmensas, sin la mínima posibilidad que el obligado obtenga un pronunciamiento judicial sobre el fondo.

En definitiva, el propósito de nuestra investigación ha cumplido su fin, pues está probado que el artículo 565°-A del Código Procesal Civil, que requiere al demandante acreditar estar al día en el pago de la pensión alimenticia para admitir la demanda de reducción de alimentos, vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, por lo que a fin de evitar esta transgresión se debe flexibilizar la aplicación de esta norma, por lo menos en el proceso de reducción de alimentos, donde se alega variación en la capacidad económica del demandante obligado.

CONCLUSIONES

1. El requisito de admisibilidad, contemplado en el artículo 565°-A del Código Procesal Civil, el cual refiere que el demandante obligado debe acreditar encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia para admitir la demanda de reducción de alimentos, vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional, en la medida que limita al demandante, acceder libremente al órgano jurisdiccional de manera desproporcional.
2. La tutela jurisdiccional es un derecho fundamental, que se manifiesta en los derechos de acción y contradicción, y para que sea efectiva debe realizarse dentro de un debido proceso. Este derecho, además, comprende los derechos al libre acceso a los órganos jurisdiccionales, a tener una resolución fundada en derecho y a la actividad de las resoluciones judiciales. En tal sentido, su restricción debe darse bajo supuestos pertinentes, razonables y proporcionales, situación que no se presenta en el supuesto establecido en el artículo 565°-A del Código Procesal Civil.
3. Al ser, la tutela jurisdiccional un derecho fundamental, no puede ser restringido por una norma de inferior jerarquía, por cuanto el poder normativo de la Constitución impide que el legislador ordinario someta a debate lo que el poder constituyente ha decidido.
4. Es inadecuado limitar el derecho del demandante obligado de libre acceso a los órganos jurisdiccionales en los procesos de reducción de alimentos, bajo el supuesto de acreditar estar al día en el pago de la pensión de alimentos al momento de presentar la demanda, pues ello no se condice con los supuestos que establece la norma para la procedencia de la reducción de alimentos, esto es, la disminución de la capacidad económica del obligado y las necesidades del alimentista.

5. Existen otros mecanismos que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de la pensión alimenticia, los cuales no limitan ni restringen el derecho a la tutela jurisdiccional del demandante, como son: la prohibición del obligado de ausentarse del país mientras no asegure el cumplimiento de la pensión alimenticia; el embargo de la remuneración del obligado; el proceso de omisión a la asistencia familiar; y, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
6. En el derecho comparado no se ha previsto la exigencia de un requisito especial de admisibilidad como el regulado en artículo 565°-A del Código Procesal Civil, por el contrario, es suficiente que el demandante obligado acredite la variación de su capacidad económica y que esta variación se produjo después de fijada la pensión alimenticia.
7. En resumen, la aplicación del artículo 565°-A del Código Procesal Civil, vulnera flagrantemente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del demandante obligado, lo cual ha sido corroborado con el estudio de los procesos de reducción de alimentos ingresados a los Juzgados de Paz Letrado de Piura, por lo tanto, debe ser sacado del ordenamiento jurídico.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda la modificación del artículo 565°-A del Código Procesal Civil, de manera que no se exija este requisito de admisibilidad en los procesos de reducción de alimentos- supuesto estudiado en la presente investigación-, por alegar cambios en la capacidad económica., atendiendo además a la realidad social y económica que enfrenta nuestro país.
2. Dado que los magistrados vienen aplicando, fielmente, el artículo 565°-A del Código Procesal Civil, afectado a muchos demandantes obligados, y en tanto se modifique, se recomienda su inaplicación o en todo caso el control difuso de la norma, sobre todo en los procesos de reducción de alimentos el cual se basa en supuestos de variación de la capacidad económica, más aún si el demandante alega la disminución de su capacidad económica (por causas de salud, nacimiento de otro hijo, incapacidad laboral, etc.) y la imposibilidad de cumplir con el pago de la pensión alimenticia fijada.
3. Atendiendo a la cantidad de demandas de reducción de alimentos rechazadas, en los Juzgados de Paz Letrado de Piura, por no cumplir con acreditar estar al día en el pago de la pensión alimenticia, se recomienda a los Magistrados velar y garantizar el cumplimiento de los derechos que nuestra Constitución protege, de manera que la observancia de la tutela jurisdiccional prevalezca sobre cualquier restricción desproporcional de este derecho. Y así resolver con criterio de justicia los conflictos jurídicos puestos a su conocimiento, tanto más si versan sobre conflictos familiares donde no solo se debe proteger al menor alimentista, sino también a los demás hijos del obligado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGUILAR LLANOS, B. (diciembre de 2010). APRECIACIÓN CRÍTICA DE LA LEY 29486 SOBRE EL INSTITUTO JURÍDICO DE LOS ALIMENTOS. *Boletín del Instituto de la Familia* N° 12, 13-30. Obtenido de https://www.academia.edu/1287079/2.1_NECESIDAD_DE_ESTAR_CUMPLIENDO_CON_LA_OBLIGACION_ALIMENTARIA_PARA_SOLICITAR_EXONERACION
- ARÉVALO RODAS, G. M. (2014). *El requisito de procedencia en las pretensiones sobre reducción, variación, prorrateo y exoneración de alimentos, y la vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva*. Tesis para obtener el título profesional de abogado, Universidad Privada Antenor Orrego, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, TRUJILLO.
- CABANELLAS DE TORRES, G. (1993). *Diccionario Jurídico Elemental* (Undécima Edición ed.). Heliasta SRL.
- CASO DE LAS NIÑAS YEAN Y BOSICO VS REPÚBLICA DOMINICANA (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 08 de Setiembre de 2005). Obtenido de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_130_esp.pdf
- CELIS VÁSQUEZ, M. A. (07 de diciembre de 2011). *Requisito especial en demanda del obligado a prestación de alimentos. La inconstitucionalidad de la Ley N° 29486*. Obtenido de <https://agendamagna.wordpress.com/2013/05/20/requisito-especial-en-demanda-del-obligado-a-prestacion-de-alimentos/>
- (1984). *CÓDIGO CIVIL*. Lima: Jurista Editores.
- CORNEJO CHAVEZ, H. (s.f.). *Derecho Familiar Peruano* (Quinta ed.). Editorial Ibreria Studium S.A..

- GACETA JURÍDICA. (2014). *El Código Procesal Civil Explicado en su Doctrina y Jurisprudencia. Tomo III* (Primera ed.). lima: Gaceta Jurídica.
- GONZALES PÉREZ, J. (1985). *El Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva* (Segunda ed.). España: Editorial Civitas.
- HINOSTROZA MINGUEZ, A. (2008). *Procesos Judiciales Derivados del Derecho de Familia*. Editorial Gaceta Jurídica S.A.
- LEDESMA NARVÁEZ, M. (2008). *Comentarios al Código Procesal Civil, Tomo I* (Primera Edición ed.). Gaceta Jurídica.
- MONDÉJAR PEÑA, M. I. (2006). *La Obligación de Alimentos y las Políticas de la Administración Española sobre la Protección de los Mayores y Dependientes*. (DIKINSON, & U. A. MADRID, Edits.) *REVISTA JURÍDICA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID*, 128-185. Obtenido de <https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6126>
- MONROY GÁLVEZ, J. (1996). *Introducción al Proceso Civil. Tomo I*. Bogotá - Colombia: Editorial Temis S.A.
- PARRA BENÍTEZ, J. (1997). *Manual de Derecho Civil*. (Tercera ed.). Bogotá - Colombia: Editorial Temis S.A Santa Fe de Bogotá - Colombia.
- PERALTA ANDÍA, J. R. (2002). *Derecho de Familia en el Código Civil*. Editorial Moreno S.A.
- PERALTA, K. (2011). *El requisito de Admisibilidad de no tener deuda alimentaria, regulado por la Ley N° 29486 y la contravención del Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, en los casos de Reducción de Alimentos*. Obtenido de <http://karlosperalta.blogspot.com/2011/11/articulo.html>
- PLÁCIDO V., A. F. (2015). *MANUAL DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES* (Primera Edición ed.). Instituto Pacífico S.A.C.

- PODER JUDICIAL DEL PERÚ. (s.f.). *Diccionario Jurídico*. Obtenido de https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_servicios/as_enlaces_de_interes/as_orientacion_juridica_usuario/as_diccionario_juridico/diccionario+juridicos
- RIOJA BERMUDEZ, A. (25 de Mayo de 2013). *El Debido Proceso y la Tutela Jurisdiccional Efectiva*. Obtenido de <http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/05/25/el-debido-proceso-y-la-tutela-jurisdiccional-efectiva/>
- SALINAS SICCHA, R. (2010). *Derecho Penal Parte Especial* (Cuarta ed., Vol. I). Editorial GRIJLEY.
- SORIANO ORTEGA, R. A. (2015). *Los Derechos de las Niñas y los Niños en el Derecho Internacional, con Especial Atención al Sistema Interamericano de Protección de los derechos Humanos*. (C. N. Humanos, Ed.) México: GVG Grupo Gráfico S.A. de C.V. Obtenido de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4706/11.pdf>
- TICONA POSTIGO, V. (1999). *EL Debido Proceso y la Demanda Civil. Tomo I* (SEGUNDA ed.). Editorial Rodhas.
- VARSI, E. (2012). *Tratado de Derecho de la Familia. Derecho Familiar Patrimonial. Relaciones Económicas e Instituciones Supletoria y de Amparo Familiar. Tomo III*. Lima: Gaceta Jurídica.

ANEXOS

ANEXO N° 01: MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA

<p>Título: Afectación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del demandante obligado, en el proceso de reducción de alimentos en los Juzgados de Paz Letrado de Piura año 2016-2017. PIURA- PERÚ. 2019.</p> <p>Nombre del tesista: Mary Carlita Cueva Avendaño</p>				
PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES/INDICADORES	METODOLOGÍA
<p>General ¿La exigencia del requisito especial de admisibilidad de encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia para admitir una demanda de reducción de alimentos, estaría vulnerando el derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva del demandante obligado en los Juzgados de Paz Letrado de Piura durante los años 2016-2017?</p>	<p>General: Determinar, la posible vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del demandante obligado en los Juzgados de Paz Letrado de Piura durante los años 2016 a 2017, ante la exigencia del requisito especial de admisibilidad de encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia para admitir una demanda de reducción de alimentos</p> <p>Específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar el fundamento jurídico del proceso de reducción de alimentos. 2. Determinar el contenido y manifestaciones del derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva. 3. Analizar la Ley N° 29486 que incorpora el requisito especial de 	<p>Hipótesis: La exigencia del requisito de admisibilidad de encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia para admitir una demanda de reducción de alimentos, vulneraría el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del demandante obligado en los Juzgado de Paz Letrado de Piura durante el periodo de 2016 al 2017.</p> <p>Justificación: La presente investigación se justifica en la necesidad de analizar la vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de los obligados alimentarios en el proceso de reducción de alimentos, en los Juzgados de Paz Letrado de Piura durante los años 2016 a 2017, cuando se les exige como requisito de</p>	<p>Variable Independiente: La exigencia del requisito de admisibilidad de encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia para admitir una demanda de reducción de alimentos.</p> <p>Dimensiones: Requisito de admisibilidad; Demanda de Reducción de alimentos.</p> <p>Indicadores: Estar al día en el pago de la pensión alimenticia; Disminución de las necesidades del alimentista; Disminución de las posibilidades económicas del obligado.</p> <p>Variable Dependiente: Vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del demandante obligado en los Juzgados de Paz Letrado de Piura durante el periodo del año 2016 al 2017.</p>	<p>Enfoque: Cualitativo</p> <p>Diseño: Teórica fundamentada; Descriptivo- Documental.</p> <p>Métodos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Método Analítico - Método Sintético -Método Inductivo-Deductivo -Método Hermenéutico jurídico. <p>Técnica e instrumentos: Técnica: Recolección y análisis de datos. Instrumentos: Fuentes directas; revisión bibliográfica; datos estadísticos.</p> <p>Población: Demandas de reducción de alimentos ingresadas a los Juzgados de Paz Letrado de</p>

	<p>admisibilidad exigido por el artículo 565-A del Código Procesal Civil respecto del proceso de reducción de alimentos.</p> <p>4. Examinar el tratamiento normativo del tema de investigación en el derecho comparado.</p>	<p>admisibilidad de su demanda, encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia.</p> <p>Importancia: La presente investigación coadyuvará a la búsqueda de mecanismos que permitan garantizar el derecho de acción de los demandantes obligados, de tal manera que se les permita iniciar un proceso de reducción de alimentos cuando se encuentren frente a la imposibilidad de cumplir en su totalidad el monto de pensión alimenticia fijado primigeniamente y a su vez impedir que dichas deudas acrecienten y se conviertan en deudas impagables, que posteriormente desencadenaran, irremediablemente, en un proceso penal.</p>	<p>Dimensiones: Proceso con garantías mínimas; Demandantes en los Juzgados de Paz Letrado de Piura.</p> <p>Indicadores: Tutela jurisdiccional efectiva; Derecho de acción; Demandantes en el año 2016; Demandantes en el año 2017.</p>	<p>Piura durante los años 2016 a 2017.</p> <p>Muestra: 50 Demandas de reducción de alimentos ingresadas a los Juzgados de Paz Letrado de Piura durante los años 2016 a 2017</p> <p>Procedimientos: La información se procesó de acuerdo a los logros obtenidos mediante las técnicas, fuentes e instrumentos empleados para la recolección de la información. De esta forma, los datos obtenidos se analizaron detalladamente con la finalidad de dar validez a la hipótesis planteada.</p>
--	---	--	--	---

ANEXO N° 02: DATOS ESTADÍSTICOS

DEMANDAS INGRESADAS A LOS JUZ CIVILES 2017

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA

Etiquetas de fila	N° DE EXP. INGRESADOS
ADOPCION	6
ALIMENTOS	2044
AUMENTO DE ALIMENTOS	236
CAMBIO EN LA FORMA DE PRESTAR ALIMENTOS	27
CONSIGNACION DE PENSION ALIMENTICIA	3
DECLARACION JUDICIAL DE PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL	252
EJECUCION DE ACTA DE CONCILIACION	262
EJECUCION DE SUMA ILIQUIDA	1
EJECUCION FORZADA DE PAGO	6
EXONERACION DE ALIMENTOS	189
EXTINCION DE ALIMENTOS	17
FILIACION	18
FILIACION EXTRAMATRIMONIAL	28
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO	2
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR AFPS	3
OFRECIMIENTO DE PAGO Y CONSIGNACION	11
PRORRATEO DE ALIMENTOS	41
RECONOCIMIENTO DE EMBARAZO	1
REDUCCION DE ALIMENTOS	60
(en blanco)	15
Total general	3222


Angela Díaz Espino
 OFICINA ESTADISTICA
 Corte Superior de Justicia de Piura



PROCESOS INGRESADOS A PAZ LETRADO DE FAMILIA 2016

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA

Etiquetas de fila	Cuenta de JUZGADO/SALA :
ADOPCION	7
ALIMENTOS	1697
AUMENTO DE ALIMENTOS	225
CAMBIO EN LA FORMA DE PRESTAR ALIMENTOS	39
CONSIGNACION DE PENSION ALIMENTICIA	6
DECLARACION JUDICIAL DE PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL	244
EJECUCION DE ACTA DE CONCILIACION	219
EJECUCION FORZADA DE PAGO	209
EXONERACION DE ALIMENTOS	199
EXTINCION DE ALIMENTOS	9
FILIACION	12
FILIACION EXTRAMATRIMONIAL	4
MEDIDA CAUTELAR DE ANOTACION DE DEMANDA	2
MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO	8
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO	38
OFRECIMIENTO DE PAGO Y CONSIGNACION	20
PRORRATEO DE ALIMENTOS	29
RECONOCIMIENTO DE EXISTENCIA	2
REDUCCION DE ALIMENTOS	49
(en blanco)	23
Total general	3041


Ángela Díaz Espino
 OFICINA ESTADISTICA
 Corte Superior de Justicia de Piura



ANEXO N° 02: PLENOS JURISDICCIONALES

1. PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL DE FAMILIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL DE FAMILIA

LIMA

CONCLUSIONES DEL PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL DE FAMILIA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA - 2011

Las señoras Jueces Superiores, integrantes de la Comisión de Actos Preparatorios del Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima para el año 2011 que suscriben, Dra. Luz María Capuñay Chávez, (Presidenta); Dra. Janet Ofelia Tello Gilardi; Dra. Nancy Coronel Aquino; Dra. Sonia Vascones Ruiz; Dra. Rosario Donayre Mávila; y Dra. Doris Rodríguez Alarcón;; dejan constancia de la realización del Pleno Jurisdiccional el día 02 de setiembre de 2011, con la concurrencia de señores Jueces Superiores, Jueces de Familia y Jueces de Paz Letrado, siendo el detalle el siguiente:

Se inició al evento con la inauguración por el señor Presidente de la Corte Superior de la Justicia de Lima Dr. Hector Lama More. Seguidamente, la señora Juez Superior Carmen Julia Cabello Matamala procedió a presentar la metodología de trabajo, luego de lo cual se retiró a fin de cumplir una representación asignada por la Presidencia de esta Corte Superior.

A continuación, se propuso definir la forma de participación y votación de los señores Magistrados presentes, acordándose que para efectos de la votación en el Pleno, todos los participantes, indistintamente de la jerarquía o instancia a la que pertenecen, sean considerados en la presente votación.

CONCLUSIONES DEL PLENO JURISDICCIONAL

TEMA N° 01

PROCESO DE ALIMENTOS

1. **En los procesos sobre Exoneración o Reducción de Alimentos:**
¿Puede admitirse una demanda sobre exoneración o reducción de alimentos no obstante lo dispuesto por el artículo 565°-A del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 29486, cuando el obligado alimentario se ha visto imposibilitado de cumplir el pago de las pensiones alimenticias?

Primera Ponencia:

Sí procede, amparándose en el derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva.

Segunda Ponencia:

No procede conforme a lo dispuesto en la ley N° 29486.

VOTACIÓN

Por la posición número 01: Total de 22 votos

Por la posición número 02: Total de 21 votos

CONCLUSIÓN PLENARIA

El Pleno adoptó por **MAYORIA** la primera ponencia.

FUNDAMENTO

El requisito previsto en el artículo 565°-A del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 29486, debe ser entendido como un requisito de admisibilidad, sobre cuyo cumplimiento el demandante deberá pronunciarse en los actos postulatorios. Sin embargo, en atención al derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva a que se refiere el numeral 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil y teniéndose presente que los casos de Familia deben ser analizados como problemas humanos, el Juez podrá admitir la demanda a fin de debatir la existencia de fundamentos razonables en lo expuesto, resolviendo lo pertinente en la sentencia.

TEMA N° 02**OPOSICIÓN DE VIAJE**

¿ A la solicitud de oposición de viaje de niño o adolescente, qué trámite debe darse?

Primera Ponencia

El trámite administrativo de inscripción en el Registro de Oposiciones de Viaje – RENAVIN.

Segunda Ponencia

El trámite del proceso no contencioso, conforme a lo dispuesto en el artículo 162° del Código de Niños y Adolescentes y el artículo 749° del Código Procesal Civil; esto es con posibilidad de contradicción, audiencia, etapa probatoria y resolución final.

VOTACIÓN

Por la primera ponencia: 37 votos.

Por la segunda ponencia: 05 votos.

CONCLUSIÓN PLENARIA

El Pleno adoptó por **MAYORIA** la primera ponencia.

FUNDAMENTOS

Lo prescrito en el artículo 112° del Código de los Niños y los Adolescentes y en los artículos 19° y 20° del Reglamento del RENAVIN (R.A. N° 204-2008-CE-PJ) en que se señala que recibida la solicitud de oposición de viaje, el órgano jurisdiccional la inscribirá, siendo los efectos de la inscripción el de publicidad, por tratarse de una solicitud de carácter preventivo.

TEMA N° 03

PROCESOS DE EXEQUATUR

¿Cómo debe interpretarse el inciso 5to del artículo 2104° del Código Civil, que señala los requisitos para el reconocimiento de sentencias expedidas en el extranjero? en el siguiente caso:

La cónyuge inicia un proceso de divorcio por causal y estando en trámite dicho proceso, viaja a Estados Unidos y promueve en dicho país un nuevo proceso de divorcio. Sin perjuicio de ello, mediante apoderado continúa el proceso de divorcio instaurado en el Perú; resuelto el proceso en Estados Unidos, con sentencia donde se declara la disolución del vínculo matrimonial, el cónyuge emplazado inicia en el Perú, un proceso de exequátur para que se reconozca la sentencia de divorcio expedida en el extranjero. La cónyuge formula contradicción, invocando lo dispuesto el inciso 5to del artículo 2104° del Código Civil.

Primera Ponencia: No procede el reconocimiento de la sentencia de divorcio expedida en el extranjero, porque existe en el país un proceso pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo objeto iniciado con anterioridad a la interposición de la demanda en el extranjero.

2. REUNIÓN PLENARIA DE LOS JUECES DE PAZ LETRADO Y LOS JUECES DE FAMILIA DE ICA

ACTA DE REUNIÓN PLENARIA ENTRE LOS JUECES DE PAZ LETRADO Y LOS JUECES DE FAMILIA DE LA CIUDAD DE ICA

En Ica, siendo las 15:20 horas del día 15 de junio del año 2018, en el Auditorio de la Corte Superior de Justicia de Ica, se reunieron la señora Jefa de la ODECMA-ICA, Jacqueline Chauca Peñaloza en calidad de Presidenta de "El Proyecto Biondi" (en adelante "El Proyecto", así como las magistradas Eneida Juana Contreras Zamora y Gloria Teresa Vivanco Huamán en su condición de Jueces del Primer y Segundo Juzgado de Paz Letrado Familia de Ica; la magistrada Gloria María Rosas Pachas en su condición de Juez del Juzgado de Paz Letrado Itinerante de Parcona; los magistrados Beatriz Irene Clemente Cuadros, Janet Contreras Ortiz y Ricardo Baro Antezana Bendezu, en su condición de Jueces del Segundo, Tercero y Cuarto Juzgado de Familia de Ica, dejándose constancia de la inasistencia del magistrado Cesar Augusto Alegría Valer, Juez del Primer Juzgado de Familia de Ica; ello con la finalidad de llevar adelante la reunión plenaria entre los jueces de la especialidad familia, pertenecientes a los Juzgados de Paz Letrado y Juzgado de primera instancia, siendo esta actividad académica, parte de la ejecución de "El Proyecto", autorizado mediante Resolución Administrativa N° 180-2018-P-CSJIC/PJ, de fecha 11 de abril del 2018.

Se deja constancia que tanto magistrados como personal jurisdiccional de los órganos jurisdiccionales anteriormente aludidos, fueron oficiados con invitación oficial y obligatoria para la concurrencia del presente evento, conforme a los Oficios Circulares N° 00643-2018-J-ODECMA-ICA y N° 00644-2018-J-ODECMA-ICA.

Se deja constancia además de la presencia e intervención de la señora Mary Luz del Carpio Muñoz, Juez Superior integrante de la Primera Sala Civil de Ica, en calidad de ponente dirimente respecto a los temas y criterios que sustentarán oportunamente cada uno de los magistrados convocados; además, de la señora Juez Superior María Ysabel Gonzales Núñez, en su condición de Presidenta de la Comisión de Plenos de la Corte Superior de Justicia de Ica, quien observará el desarrollo de esta reunión plenaria y emitirá una opinión al final de la misma.

Seguidamente, luego que los coordinadores Antony José Díaz Hernández y Víctor Arturo Trigos Espinoza, verificaran la asistencia de los señores magistrados y personal jurisdiccional convocado a este evento académico, se procedió a establecer el mecanismo de trabajo, para posteriormente dar inicio al análisis y debate de los temas que convocan a la reunión plenaria, conforme al siguiente detalle:

TEMA N° 1.- La audiencia única en los procesos de filiación extramatrimonial acumulada con alimentos, ante la falta de oposición del demandado.

Posición a) En los procesos de filiación extramatrimonial acumulada con alimentos, ante la falta de oposición del demandado, no resulta ser necesario llevarse a cabo la audiencia única, en aplicación de la parte *in fine* del artículo 1 de la Ley N° 30628, concordante con el juzgamiento anticipado del proceso, previsto en los artículos 468 y 473 del Código Procesal Civil; debiendo emitirse sentencia directamente resolviendo lo relativo a la filiación y los alimentos.

Posición b) En los procesos de filiación extramatrimonial acumulada con alimentos, ante la falta de oposición del demandado se debe llevar a cabo la audiencia única, para dilucidarse lo relativo a los alimentos, al ser presuntamente inconstitucional la parte *in fine* del 1 de la Ley N° 30628, por incompatibilizar con la

RICARDO B. ANTEZANA BENDEZU
JUEZ
CUARTO JUZGADO DE FAMILIA DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

JANET CONTRERAS ORTIZ
JUEZ PROVISIONAL
PRIMERO JUZGADO DE FAMILIA DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

BEATRIZ IRENE CLEMENTE CUADROS
JUEZ TITULO SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

ENEIDA JUANA CONTRERAS ZAMORA
JUEZ
PRIMERO JUZGADO DE PAZ LETRADO DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

GLORIA TERESA VIVANCO HUAMAN
JUEZ TITULO PRIMERO JUZGADO DE PAZ LETRADO DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

GLORIA MARIA ROSAS PACHAS
JUEZ
SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

MARIA YSABEL GONZALES NUÑEZ
JUEZ SUPERIOR TITULAR
SEGUNDA SALA SUPERIOR CIVIL DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

MARY LUZ DEL CARPIO MUÑOZ
JUEZ SUPERIOR TITULAR
PRIMERA SALA CIVIL DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

JACQUELINE CHAUCA PENALOZA
Jefa de la ODECMA-ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

naturaleza del proceso de los procesos de alimentos regulados en el CPC y el CNA.

Luego de leídas las posiciones, los magistrados de los Juzgados de Paz Letrado y de Primera Instancia, expresaron a su turno, lo siguiente:

La Dra. Gloria Teresa Vivanco Huamán sustentó su exposición en la primera posición, reafirmando que la ley es clara en señalar el trámite.

La Dra. Eneida Juana Contreras Zamora respaldando la primera posición, efectuó algunas precisiones en cuanto al trámite de la pretensión accesoria referida a los alimentos, considerando que se trata de un proceso especial, cuyo trámite debe ser célere.

La Dra. Gloria María Rosas Pachas sustentó su exposición en respaldo de la primera posición, precisando que en los casos donde no exista oposición respecto a la filiación y por el contrario se cuestione el extremo de los alimentos, deben ser tomados en cuenta los medios probatorios presentados al respecto. Por ejemplo, antes de sentenciar, emitir un auto admitiendo en calidad de pruebas de oficio, las documentales destinadas a acreditar el extremo de los alimentos.

El Dr. Ricardo Baro Antezana Bendezú se remite al texto expreso de la Ley N° 30628, para respaldar la posición "a)", siempre y cuando se trate de un proceso regular.

La Dra. Beatriz Irene Clemente Cuadros hizo referencia a los casos en que se apela la sentencia acompañando nuevos medios probatorios en el extremo de los alimentos, para señalar que la segunda posición sería la más adecuada, tanto más si la casuística no es uniforme en segunda instancia.

La Dra. Janet Contreras Ortiz precisó que aun cuando no hubiere oposición en cuanto a la filiación pero si cuestiona el extremo de los alimentos, resulta necesario que se convoque a una audiencia especial, a fin de actuar las pruebas necesarias para dilucidar lo referente a los alimentos, acogiendo por lo tanto, la posición "b".

Concluidas las intervenciones de los magistrados de la especialidad, intervino la Dra. Mary Luz del Carpio Muñoz, Juez Superior integrante de la Primera Sala Civil de Ica, quien adoptó argumentos a favor de la segunda posición, pues tratándose de imponer una obligación a los demandados (paternidad y/o pensión de alimentos) resulta necesario establecer lineamientos que permitan el contradictorio en todos los casos; ello sin desmerecer los derechos regulados en nuestra Constitución Política a favor de los menores, toda vez que el respeto del derecho a la identidad, a los alimentos y otros afines, debe ser aplicado de forma ecuaníme y con todas las garantías procesales para ambas partes. En ese sentido, expresó su conformidad con que se convoque a las partes a una audiencia especial a efectos que el juzgador forme mejor criterio, a la luz del principio de inmediación; debiendo quedar la posición "b)" de la siguiente manera:

En los procesos de filiación extramatrimonial acumulada con alimentos, ante la falta de oposición del demandado, se debe llevar a cabo la audiencia única para dilucidarse lo relativo a los alimentos, en observancia directa del debido proceso, como principio continente de múltiples garantías procesales de naturaleza constitucional en los procesos de alimentos, compatible con lo regulado en el CPC y el CNA, principalmente, el principio de inmediación,

MARIA YSABEL GONZALES NUÑEZ
JUEZ SUPERIOR TITULAR
SEGUNDA SALA SUPERIOR CIVIL DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

MARY LUZ DEL CARPIO MUÑOZ
JUEZ SUPERIOR TITULAR
PRIMERA SALA CIVIL DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

JACQUELINE CHAUCA PENALOZA
Juez Superior Titular
Jefa de la ODEOMA Ica
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

máxime cuando se plantee la mínima iniciativa probatoria por parte del demandado.

TEMA N° 2.- El requisito especial de admisión de las demandas de reducción, variación, prorrateo o exoneración de alimentos, contemplado en el artículo 565-A del Código Procesal Civil.

- **Posición a)** Sólo en algunas de las pretensiones previstas en el artículo 565-A del CPC, es aplicable el requisito especial de admisión de la demanda, el *pro* de la tutela jurisdiccional efectiva (las pretensiones específicas se precisarán en el conversatorio).
- **Posición b)** En todas las pretensiones previstas en el artículo 565-A del CPC, es aplicable el requisito especial de admisión de la demanda, al no evidenciarse vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva.
- **Posición c) posición ecléctica:** En los casos en donde se haga imposible para el demandado presentar el requisito de admisibilidad, de acreditar encontrarse al día en el pago de las pensiones, se permitirá al Juez de Paz Letrado, admitir la demanda al amparo del principio de razonabilidad y proporcionalidad, los derechos de acción y de tutela jurisdiccional efectiva, según cada caso en concreto.

Luego de leídas las posiciones, los magistrados de los Juzgados de Paz Letrado y de Primera Instancia, expresaron a su turno, lo siguiente:

La Dra. Gloria Teresa Vivanco Huamán asume la segunda posición, pero considerando que se supliría este requisito especial con la presentación de una declaración jurada.

La Dra. Eneida Juana Contreras Zamora concuerda con la magistrada que le antecede y se aúna a la segunda posición, señalando que la calificación de la demanda no debe ser rigurosa en este extremo.

La Dra. Gloria María Rosas Pachas especifico que este requisito especial debe ser ponderado de acuerdo al tipo de pretensión, ya sea que se trate de un aumento de alimentos, reducción o exoneración, para lo cual puede efectuarse la consulta a través del Sistema Integrado Judicial, a efectos de ponderar cada caso.

El Dr. Ricardo Baro Antezana Bendeزú adopta la segunda posición.

La Dra. Beatriz Irene Clemente Cuadros señaló que la tercera posición sería la más adecuada, en tanto que no siempre la parte demandante impulsa la liquidación de alimentos en el proceso principal.

La Dra. Janet Contreras Ortiz precisó que este requisito especial debe ser verificado en la etapa de calificación de la demanda y no con posterioridad, a fin de evitar la emisión de un fallo inhibitorio, acogiendo por tanto la segunda posición.

Concluidas las intervenciones de los magistrados de la especialidad, intervino la Dra. Mary Luz del Carpio Muñoz, quien acogió la tercera posición a la luz de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, haciendo referencia p.e. que en los procesos de prorrateo de alimentos no se debe exigir este requisito especial de admisibilidad, pues la experiencia dicta que sería casi imposible que el demandado se encuentre al día en el

RICARDO B. ANTEZANA BENDEZÚ
JUEZ SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

JANET CONTRERAS ORTIZ
JUEZ PROVISIONAL
JUZGADO DE FAMILIA DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

BEATRIZ IRENE CLEMENTE CUADROS
JUEZ SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

MARIA YSABEL GONZALES NUÑEZ
JUEZ SUPERIOR TITULAR
SEGUNDA SALA SUPERIOR CIVIL DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

MARY LUZ DEL CARPIO MUÑOZ
JUEZ SUPERIOR TITULAR
PRIMERA SALA CIVIL DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

JACQUELINE CHAUCA PENALOZA
Juez Superior Titular
Jefe de la ODECMA Ica
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

ENEIDA JUANA CONTRERAS ZAMORA
JUEZ TITULAR
SEGUNDA SALA SUPERIOR CIVIL DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

GLORIA TERESA VIVANCO HUAMAN
JUEZ TITULAR
SEGUNDA SALA SUPERIOR CIVIL DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

GLORIA MARIA ROSAS PACHAS
JUEZ TITULAR
SEGUNDA SALA SUPERIOR CIVIL DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

pago de la pensión de alimentos, dada la convergencia de múltiples obligaciones alimentarias que superan el límite embargable fijado por ley.

En el caso de la reducción y/o exoneración de alimentos, expresó que no sería viable la presentación de este requisito puesto que constituye un impedimento para que los justiciables alcancen la tutela urgente que requiere esta clase de procesos, al menos en aquellos casos en donde los demandantes resultan ser personas mayores o en condición de vulnerabilidad, y sobre quienes continua la exigencia de cumplir con una pensión alimenticia respecto a sus hijos mayores de edad, que cuentan con una primera profesión, carga familiar u otros. Resulta evidente que en este caso, la propia condición de los demandantes sería un impedimento para que el cumplimiento de obligación alimenticia sea cumplida cabalmente, y de ser aplicado este requisito especial de admisibilidad, se estaría contraviniendo su derecho de acceso a la justicia; lo cual obviamente no ocurriría en aquellos casos en donde se pida la reducción de alimentos respecto de un alimentista menor de edad.

En ese sentido, recalcó que frente a las diferentes pretensiones en las que sea evaluado el requisito especial de admisibilidad, debe optarse por flexibilizar su aplicación al inicio del proceso, en observancia del Tercer Pleno Casatorio Civil, relegando su análisis al momento de sentenciar, según sea el caso, sin que bajo ninguna circunstancia se emita una sentencia inhibitoria, al no encontrarnos frente a los supuestos de improcedencia previstos en el artículo 427 del Código Procesal Civil, lo que quiere decir que el eventual incumplimiento del pago de la obligación alimentaria, deberá ser valorado con un análisis sobre el fondo del asunto, lo mismo que invitará al análisis contrastado del Juez, respecto de las múltiples situaciones especiales que se presenten en el proceso; debiendo quedar la posición "c)" de la siguiente manera:

En los casos de prorrato de alimentos, no será necesaria la aplicación estricta del artículo 565-A del CPC. En los casos de reducción de alimentos, cuando el alimentista sea menor de edad, el Juez deberá aplicar el artículo 565-A del CPC. Asimismo, en los demás casos, el Juez deberá analizar la exigencia contenida en el artículo 565-A del CPC, en cada situación en concreto, teniendo en cuenta ciertas variables, como la calidad de adulto mayor o situación de vulnerabilidad del obligado, la imposibilidad del obligado de acreditar estar al día en el pago o la existencia de duda razonable sobre ello; debiendo el Juzgador dejar dicho análisis para el momento de sentenciar, pronunciándose sobre el fondo del asunto, constituyendo tal situación de incumplimiento, un fundamento de fondo en contraste con otras situaciones alegadas y acreditadas dentro del proceso; todo ello, a la luz de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, pro- acción y la tutela jurisdiccional efectiva (acceso a la justicia).

TEMA N° 3.- La legalidad de las formas, a propósito de lo preceptuado en el artículo 377 del Código Procesal Civil.

Posición a) En caso de que el impugnante no proponga los actuados que deban ser enviados al superior en grado, el superior deberá declarar la nulidad del concesorio de apelación, y devolver el expediente al A-quo, para que se requiera al impugnante, proponer los actuados que deban ser enviados al superior en grado, emitiéndose un nuevo concesorio de apelación.

Posición b) En caso de que el impugnante no proponga los actuados que deban ser enviados al superior en grado, no se deberá declarar nulidad, puesto que no existe vulneración a la legalidad de las formas, por ende, tampoco nulidad

R. CARDO B. ANTEZANA BENDEZU
JUEZ
CUARTO JUZGADO DE FAMILIA DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

JAMES HERRERA CONTRERAS ORTIZ
JUEZ PROVISIONAL
4. JUZGADO DE FAMILIA DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

ENEIDA COMTE PERAZZANO
JUEZ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

EDUARDO AGUIRRE DE PAZ
JUEZ TITULAR
PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

BEATRIZ IRENE GUERRERO CUADROS
JUEZ TITULAR
PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

MARILYTSABEL GONZALEZ NUÑEZ
JUEZ SUPERIOR TITULAR
SEGUNDA SALA SUPERIOR CIVIL DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

MARY LUZ DEL CARMO MUÑOZ
JUEZ SUPERIOR TITULAR
PRIMERA SALA CIVIL DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

JACQUELINE CHAUCA PENALOSA
Jueza Superior Titular
Jefa de la ODECMA Ica
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

GLORIA MARIA ROSAS PACHAS
JUEZ TITULAR
PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

insalvable, en la medida de que el propio apelante renunció tácitamente a proponer los actuados; en todo caso, el superior podrá requerir los actuados que sean necesarios, sin devolver la causa, conforme lo dispone el artículo 377 del Código Procesal Civil.

Luego de leídas las posiciones, los magistrados de los Juzgados de Paz Letrado y de Primera Instancia, expresaron a su turno, lo siguiente:

La Dra. Gloria Teresa Vivanco Huamán sustentó su exposición en la segunda posición, reafirmando que la ley es clara en señalar el trámite, además que al momento de emitir el concesorio, se precisan los actuados que habrán de formar parte del cuaderno de apelación

La Dra. Eneida Juana Contreras Zamora y la Dra. Gloria María Rosas Pachas concuerdan con la segunda posición y con lo expuesto por la magistrada que las antecedió.

Dr. Ricardo Baro Antezana Bendezu, adopta la segunda posición en tanto se cumpla con la debida formación de los cuadernos de apelación.

Dra. Beatriz Irene Clemente Cuadros a su vez, adopta la segunda posición, cediendo uso de la palabra a la servidora Alicia Luna en su condición de Secretaria Judicial, quien hizo también referencia a la deficiencia en la formación de los cuadernos de apelación.

Dra. Janet Contreras Ortiz se inclinó también por la segunda posición, dejando constancia su aplicación depende de la correcta o no, formación de los cuadernos de apelación.

La Dra. Gloria Teresa Vivanco Huamán realiza una nueva intervención en cuanto a la interpretación del artículo 377° del Código Procesal Civil, respecto a la concesión o no de un plazo adicional para que las partes precisen los actuados que deberán formar parte del cuaderno de apelación.

Concluidas las intervenciones de los magistrados de la especialidad, intervino la Dra. Mary Luz del Carpio Muñoz, quien precisó que el artículo 377° del Código Procesal Civil resulta ser claro en señalar que el Juez es el llamado a enumerar las piezas procesales que van a formar parte del cuaderno de apelación, una vez concedida la misma, ya que llegado dicho momento procesal sin que la parte apelante haya efectuado propuesta alguna de qué actuados deben ser elevados, debe entenderse que ha renunciado tácitamente a ejercer la facultad que le confiere la norma procesal. En ese sentido, resulta claro que la magistrada dirimiente estaría adoptando la segunda posición. Por otro lado, precisó en cuanto al plazo adicional que se pudiere conceder a la parte apelante, para que precise las piezas con las que se debería formar el cuaderno de apelación, sostiene que la norma procesal no prevé dicho procedimiento, por lo que recurrir a su aplicación en la tramitación de los procesos en los Juzgados de Paz Letrado, o finalmente, advertirlo como un mecanismo procesal para declarar la nulidad del concesorio en segunda instancia, sería afectar el debido proceso, al desviar a las partes del procedimiento establecido por ley. Debiendo quedar la posición "c)" de la siguiente manera:

- En caso de que el impugnante no proponga los actuados que deban ser enviados al superior en grado, no se deberá declarar nulidad, puesto que no

9-221
MARIA YSABEL GONZALES NUÑEZ
JUEZ SUPERIOR TITULAR
SEGUNDA SALA SUPERIOR CIVIL DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

MARY LUZ DEL CARPIO MUÑOZ
JUEZ SUPERIOR TITULAR
PRIMERA SALA CIVIL DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

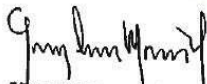
JACQUELINE CHAUCA PENALOSA
Juez Superior Titular
Jefa de la ODECMA Ica
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA


5


existe vulneración a la legalidad de las formas, por ende, tampoco nulidad insalvable, en la medida de que el propio apelante renunció tácitamente a proponer los actuados; así como tampoco existe la posibilidad de conferir traslado al impugnante antes de concederse la apelación a efectos de que precise qué actuados deben ser elevados, puesto que ello consiste en un procedimiento no previsto en la ley, además de devenir en innecesario, ya que el proponer actuados es una facultad del apelante (no un derecho procesal), al momento de presentar el recurso impugnatorio; en todo caso, el superior podrá requerir los actuados que sean necesarios, sin devolver la causa, conforme lo dispone el artículo 377 del Código Procesal Civil.

Concluidas las disertaciones, la señora Juez Superior María Ysabel Gonzáles Núñez, en su condición de Presidenta de la Comisión de Plenos de la Corte Superior de Justicia de Ica, expresó su conformidad con el desarrollo de la presente actividad académica y con el criterio expuesto para dilucidar los temas propuestos por los propios magistrados, considerando que este conversatorio y los acuerdos adoptados servirán para unificar criterios de los operadores y mejorar el servicio de administración de justicia; por lo mismo, propone la remisión de la presente acta al Centro de Investigaciones Judiciales, a efectos que esta iniciativa se replique en las diferentes Cortes de Justicia del país.

Estando a la conformidad de los magistrados asistentes, siendo las 16:53 horas, se da por cerrada la presente reunión plenaria.



MARIA YSABEL GONZALES NUÑEZ
JUEZ SUPERIOR TITULAR
SEGUNDA SALA SUPERIOR CIVIL DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

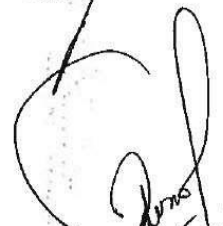

MARY LUZ DELGADO MUÑOZ
JUEZ SUPERIOR TITULAR
PRIMERA SALA CIVIL DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA



JACQUELINE CHALICA PENALZO
Juez Superior Titular
Jefa de la ODECIJA Ica
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA


RICARDO B. ANTEZANA BENITEZ
JUEZ
CUARTO JUZGADO DE FAMILIA DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA


JANET PILAR CONTRERAS ORTIZ
JUEZ PROVISIONAL
3º JUZGADO DE FAMILIA DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA


BEATRIZ IRENE CLEMENTE CUADROS
JUEZ (T) DEL SEXTO JUZGADO
DE FAMILIA DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA


GLORIA MARIA ROSAS PACHAS
JUEZ
JUZGADO DE PAZ LETRADO CIVIL TRANSITORIO DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA


GLORIA TERESA VIQUEZ HUACALAN
JUEZ TITULAR
SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA


ENEIDA CONTRERAS ZAMORA
JUEZ TITULAR
PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA